Cuadernos Jurídicos

INDICE

	Pág.
Presentación	7
Estudios	9
Decreto Ley 2.191, 18 de abril de 1978	11
Fallos basados en el D.L. 2.191	13
Estudio	15
Jurisprudencia	33
Manifestaciones pacíficas con detención de los participantes y acusación de infringir la Ley de Seguridad del Estado	35
1. Requerimiento presentado por el Ministro del Interior por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado	35
2. Resolución del Ministro Sumariante que dispone la de tención de los inculpados	41
3. Fallo del Recurso de Amparo rol N° 245-9	43
4. Resolución del Ministro Sumariante que dispone la libertad de los detenidos	45
5. Desestimio presentado en el Recurso de Amparo	47
6. Sobreseimiento definitivo dictado por el Ministro Su- mariante	48
7. Encargatoria de Reo de 40 personas detenidas el 1° de mayo de 1979. Resolución dictada por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en proceso iniciado a requerimiento del Ministro del Interior por infracción a la Ley de Seguridad del Estado	52
8. Revocación de la encargatoria de reo	55
Nota	58
Recurso de Amparo en favor de Sergio Enrique Sepúlveda Coloma y otros	61

PRESENTACION. Este número de CUADERNOS JURIDICOS...

El presente número de CUADERNOS JURIDICOS...

Para este número de CUADERNOS JURIDICOS hemos tratado de reunir una serie de materias de actualidad en la tarea de Defensa de los Derechos Humanos en el campo jurídico.

Es así como la sección ESTUDIOS está dedicada al tema de Amnistía y los Desaparecidos. La dictación del Decreto Ley Nº 2.191, de 18 de abril de 1978, provocó numerosos sobreseimientos de causas que se seguían por la detención y posterior desaparición de personas. La mayoría de dichas resoluciones fueron revocadas por las respectivas Cortes de Apelaciones, pero se hace indispensable precisar correctamente los alcances de la amnistía decretada por el Gobierno a través del D.L. 2.191.

La sección JURISPRUDENCIA está dedicada al papel que han jugado nuestros Tribunales en dos materias que son de primer orden: las detenciones provocadas a raíz de requerimientos formulados por el Ministro del Interior, de acuerdo con el procedimiento de la Ley de Seguridad del Estado y la facultad de la autoridad administrativa para proceder a la expulsión de personas, nacionales o extranjeros, del territorio nacional. Respecto del primer punto, cabe destacar que el Ministerio del Interior ha iniciado en tres oportunidades procesos por infracción a la Ley de Seguridad del Estado para reprimir manifestaciones de carácter masivo y que por lo tanto afectan a un elevado número de personas.

Se incluye en la sección INFORMACIONES la petición de los Vicarios de Santiago a la Corte Suprema para que se designen Ministros en Visita Extraordinaria en las investigaciones de los casos de detenidos desaparecidos, y el fallo de la corte a dicha solicitud. De más está señalar la importancia de ambas piezas

si se considera que tal petición se había formulado anteriormente en varias ocasiones, siendo denegada, y la importancia del problema de los detenidos desaparecidos.

Por último, en la sección DOCUMENTOS se transcribe la parte correspondiente al Poder Judicial del Informe evacuado por el Grupo de Trabajo Ad Hoc, para la investigación de los Derechos Humanos en Chile, que visitó nuestro país en el año 1978.

Estudios

DECRETO LEY 2.191, 18 de abril de 1978.

Vistos: lo dispuesto en los decretos leyes N.os 1 y 128 de 1973, y 527 de 1974, y

Considerando:

1º La tranquilidad general, la paz y el orden de que disfruta actualmente todo el país, en términos tales, que la conmoción interna ha sido superada, haciendo posible poner fin al Estado de Sitio y al toque de queda en todo el territorio nacional;

2º El imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido, y fomentando todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos;

3º La necesidad de una férrea unidad nacional que respalde el avance hacia la nueva institucionalidad que debe regir los destinos de Chile.

La Junta de Gobierno ha acordado dictar el siguiente decreto ley:

Artículo 1º Concédese amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se en-

cuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas.

Artículo 2º Amnistíase, asimismo, a las personas que a la fecha de vigencia del presente decreto ley se encuentren condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.

Artículo 3º No quedarán comprendidas en la amnistía a que se refiere el artículo 1º, las personas respecto de las cuales hubiere acción penal vigente en su contra por los delitos de parricidio, infanticidio, robo con fuerza en las cosas, o con violencias o intimidación en las personas, elaboración o tráfico de estupefacientes, sustracción de menores de edad, corrupción de menores, incendios y otros estragos; violación, estupro, incesto, manejo en estado de ebriedad, malversación de caudales o efectos públicos, fraudes y exacciones ilegales, estafas y otros engaños, abusos deshonestos, delitos contemplados en el decreto ley número 280, de 1974, y sus posteriores modificaciones; cohecho, fraude y contrabando aduanero y delitos previstos en el Código Tributario.

Artículo 4º Tampoco serán favorecidas con la aplicación del artículo 1º, las personas que aparecieren responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, de los hechos que se investigan en proceso rol

Nº 192-78 del Juzgado Militar de Santiago, Fiscalía Ad Hoc.

Artículo 5º Las personas favorecidas por el presente decreto ley, que se encuentren fuera del territorio de la República, deberán someterse a lo dispuesto en el artículo 3º del decreto ley Nº 81, de 1973, para reingresar al país. Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopila-

ción Oficial de dicha Contraloría. AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República. JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros. Sergio Fernández Fernández, Ministro del Interior; Mónica Madariaga Gutiérrez, Ministro de Justicia.

FALLOS BASADOS EN EL D.L. 2.191.

Presunta desgracia de EDUARDO PAREDES BARRIENTOS.

ROL 88.481-9. 2º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

11.5.78: Vistos: Se declara cerrado el sumario. Teniendo presente que se ha dictado el D.L. 2.191 que concede la amnistía a las personas que hayan incurrido en hechos delictuosos durante el lapso comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1978, siempre que no estén actualmente procesadas o condenadas y que no se trate de delitos que se exceptúan; visto lo dispuesto en el art. 93, Nº 3, del C.P. y 408 Nº 5 C.P.P. se sobresee definitivamente en esta causa.

Presunta desgracia de RICARDO LAGOS SALINAS.

Rol 77.933, 7º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Santiago, 26 de abril de 1978.

Siendo inoficioso proseguir la investigación, atendido el tenor del Decreto Ley Nº 2.191 publicado con fecha 19 de los corrientes sobre amnistía, se declara cerrado el sumario.

Visto y teniendo presente:

1º Que se ha instruido sumario con el objeto de averiguar la existencia de

algún delito que se haya podido perpetrar por una o más personas con ocasión del desaparecimiento de RICARDO LAGOS SALINAS.

2º Que los delitos de que pudo haber sido víctima son homicidio, simple o calificado, lesiones, detención ilegal o arbitraria y secuestro.

3º Que los hechos punibles —precedentemente indicados— perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1978, perdieron el carácter de delito respecto de todas aquellas personas que hayan tenido participación en ellos como autores, cómplices o encubridores y que, al 19 de abril del presente año no se hayan encontrado sometidos a proceso.

4º Que en autos no se encuentra sometida a proceso persona alguna por concepto de los delitos señalados.

Y visto, además, lo dispuesto en los arts. 408 Nº 6 del Código de Procedimiento Penal en relación con el art. 93 Nº 3 del Código Penal y Decreto Ley Nº 2.191, se declara:

Que se sobresee definitivamente en esta causa.

Anótese y consúltese.

Revocación:

Santiago, 29 de mayo de 1978.

Vistos y teniendo presente:

Que el artículo 1º del Decreto Ley Nº

2.191 otorga amnistía a las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictuosos durante el período que indica y que conforme al artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, el sobreseimiento definitivo no puede decretarse sino cuando esté agotada la investigación en que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de determinar la persona del delincuente. Con lo dictaminado también por el señor Fiscal a fs. 57 y no encontrándose agotada la investigación en esta causa, se revoca la resolución consultada de 26 de abril último escrita a fs. 56 y se repone el proceso al estado de sumario con el objeto de que se practiquen todas las diligencias que requiera la investigación de los hechos que han dado origen al sumario.

**Presunta desgracia de
JULIO DEL TRANSITO VALLADARES
CAROCA.**

Rol 21.107-8. 2º Juzgado del Crimen Departamento Pedro Aguirre Cerda.

La Granja, 15 de mayo de 1978.

Vistos: Se declara cerrado el sumario. Que conforme a lo dispuesto en el D.L. 2.191 de 19 de abril de 1978 la responsabilidad de las personas que hayan actuado en calidad de autores, cómplices o encubridores con motivo del desaparecimiento de Julio del Tránsito Valladares Caroca, se halla extinguida y visto, además, lo dispuesto en los arts. 93 Nº 3 del Código Penal y 406, 407, 408 Nº 5 y 414 del C.P.P. se declara: Que se sobresee total y definitivamente en esta causa.

Revocación Corte:

Vistos: Encontrándose incompleta la investigación se revoca el sobreseimiento de fecha 15 de mayo último, escrito a fs. 48 y se repone la causa al estado de

sumario, a objeto de que el Juez cumpla la diligencia decretada a fs. 27 vta., o sea, el exhorto internacional, como esta Corte ya lo ordenó por resolución de 28 de octubre último, escrita a fs. 43 y practique las demás diligencias que de ella pudieran derivar o hagan necesarias el curso de la investigación. Devuélvase.

**Querella por secuestro de
NALVIA ROSA MENA ALVARADO Y
OTROS.**

Rol 20.027-9 2º Juzgado del Crimen Departamento Pedro Aguirre Cerda.

La Granja, 28 de abril de 1978.

Vistos: Se declara cerrado el sumario. Que conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley de 19 de abril de 1978 la responsabilidad de las personas que hayan actuado en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de secuestro, se halla extinguida y visto, además, lo dispuesto en los artículos 93 Nº 3 del Código Penal, 406, 407, 408 Nº 5 y 414 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

Que se sobresee total y definitivamente en esta causa.

Resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, 21 de junio de 1978.

Teniendo únicamente en consideración que no aparece establecida en autos la existencia del delito denunciado y sustituyendo la cita del artículo 408 Nº 5 del Código de Procedimiento Penal por la del artículo 409 Nº 1 del mismo texto legal, se aprueba en lo consultado, la resolución de 28 de abril último, escrita a fs. 61, con declaración de que el sobreseimiento es temporal. Regístrese y devuélvase.

ESTUDIO

1. Los fallos anteriormente transcritos, que se pronuncian en forma contrapuesta respecto del sobreseimiento definitivo que pudiere dictarse en virtud de la amnistía dispuesta por el Decreto Ley 2.191, de 18 de abril de 1978, ponen de relieve la exacta naturaleza de uno de los problemas que se han presentado en la tramitación de las causas criminales incoadas con motivo de la detención, seguida del desaparecimiento, de personas que han sido privadas de su libertad en forma ilegal y arbitraria por agentes de los servicios de seguridad del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, durante la vigencia del Estado de Sitio. En efecto, el problema referido es, fundamentalmente, de índole procesal, y consiste en determinar la **oportunidad** en que dicho sobreseimiento, fundado en la amnistía citada, debe ser dictado. Por cierto que la adecuada resolución de este tema supone, como veremos, la correcta comprensión de otros diversos elementos que entran en juego, de derecho penal, civil y procesal unos, y de índole social y aun moral, otros.

2. De lo anterior se desprende que no está en discusión en dichos fallos la **procedencia** o **improcedencia** de la amnistía en relación con los delitos que hayan podido cometerse en las personas de los detenidos desaparecidos. En consecuencia, este comentario no se referirá a dicho tópico, salvo en cuanto al tratar de uno de los presupuestos de la aplicación del D.L. 2.191 (el ámbito temporal de su aplicación, fijado por la

vigencia del Estado de Sitio), se verá cómo la extinción de la responsabilidad penal de que trata este último, jamás podría comprender a delitos permanentes que, aunque iniciados en el período abarcado por la amnistía, se han seguido cometiendo con posterioridad a dicho período, como ocurre, por ejemplo, con los secuestros perpetrados en personas cuya suerte y paradero se desconoce hasta el día de hoy. Tales secuestros (y lo mismo cabe decir de las detenciones irregulares) naturalmente no han sido cubiertos por la amnistía, no sólo porque exceden su ámbito temporal, sino porque ninguna ley de amnistía podría cubrir hechos delictuosos futuros, sin constituirse, a la vez, en una garantía de impunidad y en una incitación al crimen, aberración que no cabe imputar al legislador.

3. Como se aprecia de la simple lectura de los fallos que anteceden, los de primera instancia se han pronunciado por la dictación **inmediata** del sobreseimiento definitivo, aunque no se encuentre agotada "la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de determinar la persona del delincuente" (presupuestos ambos, sin embargo, que el art. 413 del C.P.P. exige expresamente para sobreseer definitivamente), en tanto que las resoluciones de segunda instancia han sido de parecer que, encontrándose incompleta la investigación o (en un caso) no hallándose establecida en la causa la existencia de delito materia de la misma,

no procede la dictación del referido sobreseimiento mientras no se lleve a cabo dicha investigación.

4. Quizás el mejor método para abordar el tema propuesto por estos fallos contrapuestos, sea partir por examinar ambas posiciones a la luz de sus respectivas construcciones argumentales. De esta manera se irán despejando los equívocos, señalándose las insuficiencias y defectos de aquéllos y precisándose los verdaderos términos del debate.

En primer lugar, llama la atención el carácter casi exclusivamente formal en el que los fallos comentados colocan la polémica, como asimismo la extrema parquedad de sus fundamentos. Habría sido de esperar que un asunto de esta importancia (la amnistía de los responsables de los secuestros cometidos en contra de opositores políticos por miembros de los servicios de seguridad) suscitara, de parte de los tribunales, reflexiones más sustanciales, que se hicieran cargo de las distintas cuestiones envueltas en la amnistía mencionada. Si bien la conclusión de las resoluciones de segunda instancia es acertada, como también lo es la cita que se hace del recordado art. 413 del C.P.P., se imponía una mayor argumentación, que trascendiera la simple invocación del texto legal, destinada a persuadir sobre la **necesidad legal** de agotar la investigación (en procura del establecimiento del delito y de la determinación de la persona del delincuente) antes de disponer el sobreseimiento definitivo. Ello con mayor razón en uno de los casos en que el fundamento del tribunal de primera instancia apuntaba a la circunstancia de que, en presencia de la amnistía, era **inoficioso** proseguir la tramitación del proceso. Esta equivocada apreciación merecía, de parte del tribunal superior que revocó tal decisión, una refutación que demostrara la necesidad insoslayable de continuar con la investigación, pese a la amnistía. Por lo demás, en un asunto que se ha pre-

sentado como controvertible, la propia misión de los tribunales superiores de justicia los obliga a fundamentar la posición correcta, en términos de persuadir racionalmente a los inferiores, los cuales se sentirán, así, inhibidos de reincidir en sus propios planteamientos. En cambio, en la sustitución de los argumentos, por la fría y escueta cita legal, podría verse una postura no tan firme y segura, que invita, justamente, como ha ocurrido, a la insistencia en las propias opiniones.

5. Examinaremos a continuación la posición de los fallos de primera instancia.

Todos los fallos referidos (excepto uno, al que nos referiremos luego) se limitan a la invocación, lisa y llana, de las disposiciones del D.L. 2.191, que otorga amnistía a los responsables de todos los hechos delictivos no exceptuados (situación en la que se encuentran los posibles secuestros, detenciones ilegales, homicidios, lesiones y otros delitos de los que pudieron ser víctimas los detenidos desaparecidos) que se hayan cometido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se hayan encontrado procesados o condenados a la fecha de la entrada en vigencia de dicho decreto ley.

6. Esta posición adolece por lo menos de dos defectos graves.

En primer lugar, considera sólo uno de los presupuestos establecidos por el propio D.L. 2.191 (a saber, el ámbito temporal de su aplicación, esto es, mientras duró el Estado de Sitio), prescindiendo simplemente de otros dos, exigidos con la misma claridad que aquél, y que son: a) el hecho de haberse realmente "incurrido en hechos delictivos" no exceptuados del beneficio; y b) la circunstancia de que debe amnistiarse a **personas concretas**, y no simplemente a "delitos". Más adelante nos extenderemos sobre estos dos presupuestos de la amnistía, y veremos

cómo ellos no emanan sólo del propio texto de ésta y del tenor literal del art. 413 del C.P.P. (que condiciona el sobreseimiento definitivo al cumplimiento del deber de agotar la investigación), sino que de las mínimas exigencias de la seguridad y certeza jurídicas y de la seriedad y prestancia que deben tener la función jurisdiccional y los procedimientos de los tribunales de justicia.

7. En segundo lugar, los fallos mencionados no consideran para nada la circunstancia de ser la amnistía una causal del sobreseimiento definitivo, y tener, por lo mismo, que ajustarse la declaración judicial de este beneficio, en cada caso concreto, a las modalidades de este último **institutivo**, una de las cuales es, justamente, la oportunidad de su dictación; punto —por lo demás, como se ha reiterado— sobre el cual existe texto expreso en el C.P.P.: “El sobreseimiento definitivo no podrá decretarse sino cuando esté agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de determinar la persona del delincuente” (art. 413).

Pues bien, los fallos de primera instancia que venimos citando aluden toda reflexión sobre el esencial punto de la oportunidad en que debe dictarse el sobreseimiento definitivo, tal vez por suponer que ella es indiferente. Sin embargo, como se demostrará más adelante, esto no es así; por el contrario, las consecuencias jurídicas que se derivan dependen justamente de la oportunidad aludida, y pueden ser radicalmente diversas en uno u otro caso.

Como se desprende de las resoluciones revocatorias de segunda instancia, en ninguno de los casos a que se refiere las sentencias en alzada, la investigación estaba completa o agotada: en todos ellos faltaba la determinación de los delincuentes y al parecer también la comprobación del cuerpo del delito (por lo menos en dos de los casos). En tales condiciones es obvio que no pro-

cedía la dictación del sobreseimiento definitivo.

8. Si bien se observa, las dos exigencias presupuestas en el D.L. 2.191 de las cuales prescindieron los fallos de primera instancia, y a las que ya nos hemos referido, coinciden con los requisitos impuestos por el art. 413 del C.P.P. para proceder a la dictación del sobreseimiento definitivo, lo cual es lógico, ya que, como se sabe, la amnistía es precisamente una de las formas de extinguir la responsabilidad penal, extinción que a su vez, es causal de sobreseimiento definitivo.

Sin embargo, pese a ser esto así, los sentenciadores de primera instancia, con rara uniformidad, entendieron que debían, de oficio, sobreseer definitivamente, con el solo mérito de la amnistía citada. Y es que, en efecto, a primera vista puede resultar desconcertante y hasta contradictorio, que habiéndose dictado un decreto ley de amnistía en favor de los responsables de los delitos comprendidos en dicho beneficio, los jueces que conocen de procesos criminales en los que se investiga la comisión de aquellos actos delictivos, deban llevar adelante la investigación hasta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los culpables. En efecto, podría pensarse que tal investigación no se justifica, y que constituye una pérdida de tiempo y de energía, toda vez que, en definitiva, igual habrá de sobreseerse definitivamente, en virtud de la señalada amnistía.

Es cierto que la anterior apreciación resulta formal y superficial, y, en lo que se refiere al fondo del asunto, equivocada; pero mientras su refutación se haga sólo con la cita del art. 413 del C.P.P. seguirá teniendo adeptos. Urge, pues, una impugnación más decidida que penetre más profundamente la naturaleza jurídica de la amnistía misma, como asimismo del contexto ético-social en el que esta última se inserta y cobra sentido (lo que en buenas cuen-

tas implica responder a la siguiente pregunta, que se ha formulado algunas veces: ¿impide esta amnistía establecer la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos?). Sólo una indagación de tal género podrá persuadir que no da lo mismo la oportunidad en que se decreta el sobreseimiento definitivo, fundado en la amnistía, y que tal oportunidad no puede ser otra que la indicada por las resoluciones de segunda instancia tantas veces citadas. Este comentario espera cumplir dicho cometido.

9. Uno de los fallos de primera instancia que se han transcrito (el del 7º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, de 26 de abril de 1978, Rol 77.933) intenta trascender la argumentación puramente formal. En efecto, sostiene, en primer término que es "noficioso proseguir la investigación, atendido el tenor del Decreto Ley 2.191"; para agregar a continuación "que los delitos de que pudo haber sido víctima (la persona desaparecida cuyo paradero y suerte se investigaban en ese proceso) son homicidio, simple o calificado, lesiones, detención ilegal o arbitraria y secuestro" y que todos estos hechos punibles, "perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, **perdieron el carácter de delito** respecto de todas aquellas personas que hayan tenido participación en ellos como autores, cómplices o encubridores y que, al 19 de abril (de 1978) no se hayan encontrado sometidas a proceso".

La primera razón esgrimida por el fallo que se viene examinando (resultaría inoficioso proseguir la investigación, frente al D.L. 2.191) importa una confusión entre dos extremos categorialmente diversos entre sí, como lo son: a) el relativo a la procedencia de la amnistía para ese caso concreto que se trataba de resolver y, b) el concerniente a la oportunidad procesal en la que debe ser declarado dicho beneficio. El tenor del D.L. 2.191, que dicho fallo invoca

para zanjar definitivamente la cuestión, sólo podría (y no necesariamente, ya que, aparte de otras consideraciones, existía la posibilidad de que el delito cometido fuera secuestro o detención ilegal, figuras ambas que son permanentes) servir racionalmente para fundamentar la procedencia de la amnistía en favor de los responsables, pero no se ve cómo podría ser invocado para decidir, además, sobre la oportunidad en que el sobreseimiento definitivo deba ser decretado. Más bien, como se ha insinuado anteriormente, del propio tenor literal del D.L. 2.191 (en perfecta armonía con el art. 413 del C.P.P.) se desprende, en todo caso, que dicha oportunidad no puede tener lugar antes de que se encuentre establecido el hecho delictuoso de que se trata y determinados los delincuentes. Como quiera que, según se desprende del fallo revocatorio de segunda instancia, ninguno de estos dos aspectos estaba esclarecido en esa etapa de la tramitación de la causa, se tiene que, el texto del D.L. 2.191 se oponía más bien a la dictación del sobreseimiento definitivo en ese momento.

10. El fallo examinado no aclara más su posición. Se limita a postular apriorísticamente que en presencia de una ley de amnistía debe dictarse de inmediato sobreseimiento definitivo, cualquiera que sea la etapa en que se encuentre la tramitación del proceso y cualesquiera sean los resultados de la investigación, la cual resultaría, a su juicio, inoficiosa. No dice por qué. Esta posición es equivocada. Fuera del incumplimiento de los diferentes supuestos que según el propio texto del D.L. 2.191 condicionan la extinción de la responsabilidad penal en los casos a que se refiere (establecimiento del delito y determinación de los culpables), aquel fallo prescinde simplemente del hecho que la amnistía tiene sus propios límites, que emanan de su naturaleza (es una causal de extinción sólo de la responsabilidad penal), no cubriendo otro tipo de responsabilidades jurídicas,

cómo lo son la administración y la civil. Esta última, como se verá más adelante, desempeña un papel de primera importancia en la correcta dilucidación del problema concerniente a la oportunidad de la dictación del sobreseimiento definitivo fundado en la amnistía, toda vez que, entre otras consecuencias inadmisibles, un sobreseimiento definitivo dictado prematuramente podría hacer ilusorio el efectivo ejercicio de la acción civil correspondiente a los perjudicados con el delito.

Pero este defecto que se viene imputando, es decir, la no consideración de la incidencia que en la resolución del asunto tiene la subsistencia de la responsabilidad civil, se relaciona con otro de los fundamentos del fallo examinado, a saber, que los hechos punibles afectados por la amnistía, "perdieron el carácter de delito". Tal afirmación, pese a lo difundida que pueda estar, no es exacta, ya que, como lo enseña la doctrina penal, las leyes de amnistía no tienen efecto retroactivo y no pueden, por ende, borrar los hechos históricamente acaecidos en la realidad, ni aún modificarlos. Se trata sólo de una ficción (único sentido en que es válido sostener que la amnistía hace "desaparecer" el hecho punible) que lógicamente no puede obstar a que, en verdad, tales hechos hayan ocurrido. El alcance de la amnistía es otro. Cancela la punibilidad a ciertos hechos delictuosos, impidiendo, bien la ejecución de la pena impuesta, bien el ejercicio de la acción penal. El Estado renuncia, mediante la amnistía, al ejercicio de su facultad punitiva.

De lo anterior, se desprende que mediante la ficción aludida, únicamente se producen consecuencias de orden penal, que sólo afectan a este tipo de responsabilidad; pero, por lo mismo que el hecho efectivamente acaeció, subsisten todas las otras consecuencias jurídicas del mismo, entre las cuales deben destacarse a los efectos del

presente comentario, la responsabilidad civil.

11. Finalmente, el fallo analizado, para concluir que procede en el caso de que se trata, el beneficio de la amnistía, **especula**, en abstracto, acerca de los delitos que pudieron haberse cometido con motivo de la detención y subsiguiente desaparecimiento de la víctima, todos los cuales están incluidos dentro de dicho beneficio. Aparte de lo incompleto que pueda ser el cálculo de este fallo (por no considerar otros delitos que eventualmente hayan podido cometerse y que no estén cubiertos por la amnistía), lo cierto es que tanto el D.L. 2.191 cuanto el Art. 413 del C.P.P. exigen que se encuentre establecido el delito de que se trata, no bastando, por lo tanto, una referencia genérica, puramente intelectual, a los posibles delitos cometidos. Por lo demás, resulta manifiesto, como se verá luego, al ocuparnos detenidamente de este presupuesto fundamental de la amnistía dispuesta por el D.L. 2.191, el interés jurídico y social que existe en orden a un mínimo de certidumbre respecto de los hechos efectivamente ocurridos, particularmente si se trata de acontecimientos tan graves como el desaparecimiento de personas a manos de los servicios de seguridad. La precisión que es dable esperar en todos los procedimientos judiciales, se opone rotundamente a esta suerte de cábalas con las que tan livianamente se pretenden resolver agudos problemas, que, cuando menos, habrá de convenirse, exigen de una mayor seriedad, la misma que, en **cualquier** asunto, es categóricamente requerida por el Art. 413 del C.P.P.

12. Corresponde ahora que nos ocupemos de la posición de las resoluciones de segunda instancia.

Estos fallos (con la excepción de uno, del cual nos ocuparemos después) se limitan a señalar la improcedencia del sobreseimiento definitivo mientras se

encuentre incompleta la investigación. Uno de ellos cita expresamente el Art. 413 del C.P.P.; el otro discurre sustancialmente sobre el mismo supuesto.

Ya hemos insistido en la insuficiencia de esta réplica. De lo que se trata es, justamente, de explicar **por qué** aun en presencia de una ley de amnistía, que de manera tan rotunda extingue la responsabilidad penal, es preciso proseguir la investigación en aquellos casos en que no se encuentra comprobada la existencia del delito o determinada la persona del delincuente. Pudiera, en efecto, pensarse que la norma del Art. 413 del C.P.P., pensada indiscriminadamente para cualquier causal de sobreseimiento definitivo, no sería tan imperatoria y rígida, en el caso concreto de una ley de amnistía concebida en términos tan generales como el D.L. 2.191. Es esta falsa suposición la que debe ser descartada. Es necesario convencer de que también es preciso agotar la investigación sumarial en el caso de que la extinción de la responsabilidad penal emane de una ley de amnistía. En suma, de lo que se trata es de precisar las consecuencias inadmisibles que se derivarían de un sobreseimiento prematuro dictado antes de que se encuentre acreditado el delito y determinado el responsable; o dicho en otros términos, demostrar cómo estas dos verificaciones son indispensables, tanto para que, conceptualmente, incluso, pueda aplicarse la amnistía, cuanto para que no se frustre el ejercicio de otros derechos que han quedado incólumes con la amnistía, entre los cuales deben citarse el derecho a una reparación civil y, más importante aún, el derecho de la comunidad toda a recibir una explicación sobre la suerte de compatriotas detenidos por servicios de seguridad y de los que nunca más se han tenido noticias, derecho este último que, a mayor abundamiento, es reconocido por el propio Gobierno, como veremos, el cual reivindica la competencia de los tribunales para emprender

dicha tarea, y ofrece prestar la colaboración que sea necesaria.

No se nos escapa que la impaciencia demostrada por los tribunales de primera instancia, que se han apresurado a amnistiar "en las causas" por ellos tramitadas (en forma genérica, sin referencia a personas concretas y, en ocasiones, sin señalar siquiera, con el grado de precisión exigido por las normas legales aplicables, el delito concreto de que se trata), revela tal vez, y no sin cierta razón, si se considera lo que ha sido su propia experiencia investigadora, la cual se ha estrellado con toda clase de entorpecimientos, a los cuales, debemos decirlo, el Gobierno no ha sido en modo alguno ajeno, cierto escepticismo sobre los resultados finales de estos procesos criminales.

Sin embargo, creemos, con todo, que la disposición de los jueces debe ser la inversa: su fe inquebrantable en los recursos de la ley y de la justicia para esclarecer debidamente los hechos delictuosos cometidos y determinar a los responsables de los mismos, por grandes que sean los obstáculos que surjan en la realización de esta tarea. Una actuación decidida y enérgica de los tribunales es de todo punto de vista indispensable. Por lo menos, y aun en el caso de que, debido a dichos obstáculos, y pese a los esfuerzos de los tribunales por superarlos, la verdad no lograra establecerse, se habrían conseguido dos resultados positivos. En efecto, los tribunales salvarían su propia responsabilidad en orden a aplicar la ley velando por el respeto de los derechos fundamentales que aquélla les acuerda a todas las personas; y, por otro lado, se podría apreciar con mayor claridad la causa del fracaso de la investigación judicial, o, dicho en otros términos, sería posible determinar dónde ha estado la falla del sistema institucional vigente, que ha impedido el establecimiento de hechos delictuosos en cientos de casos similares en

los que aparecen comprometidos los organismos de seguridad del Gobierno y de las Fuerzas Armadas.

13. El otro fallo mencionado de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de 21 de junio de 1978, discrepa igualmente de la sentencia de primera instancia, que había sobreesido definitivamente "a las personas que hayan actuado en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de secuestro", por cuanto la responsabilidad de todos ellos, a juicio del sentenciador, "se halla extinguida", conforme a lo dispuesto en el D.L. 2.191. A diferencia del resto de las sentencias de la Corte de Santiago, a las que aludimos anteriormente, la que ahora analizamos contiene un argumento más sustancial para oponerse a la aplicación inmediata de la amnistía, el que apunta a uno de los presupuestos exigidos en el propio D.L. 2.191, cual es, que para que entre en aplicación este último es necesario "que se encuentre establecida en autos la existencia del delito" materia de la causa. No encontrándose comprobada dicha existencia, los jueces de alzada estiman que lo que procede es la dictación no de un sobreseimiento definitivo, sino que de uno temporal, el que fundan en la disposición del N° 1 del Art. 409 del C.P.P.: "Cuando no resulte completamente justificada la perpetración del delito que hubiere dado motivo a la formación del sumario".

La conclusión de este fallo de segunda instancia es inobjetable. De lo que se trata, en los casos en que resulta aplicable la amnistía aludida, es de extinguir la responsabilidad penal por hechos delictuosos en los que efectivamente se haya incurrido, según se desprende del propio tenor literal del Art. 1° del D.L. 2.191. Si no está justificada completamente la perpetración del delito que hubiere dado motivo a la formación del sumario, resulta conceptualmente contradictorio invocar amnistía alguna, ya que ésta extingue responsabilidades penales concretas y no hipotéticas o conjeturales.

En cambio, no hay obstáculo para que en tales casos se sobresea temporalmente, ya que la propia ley impone tal solución, no sólo cuando no se encuentra completamente justificada la existencia del delito materia de la investigación, sino también cuando "resultando del sumario haberse cometido el delito, no hubiera indicios suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor" (Art. 409, N° 2). Es decir, a diferencia de un sobreseimiento definitivo fundado en una ley de amnistía, el sobreseimiento temporal que se asile en los dos primeros numerandos del Art. 409 del C.P.P. es, por decirlo así, de carácter genérico o indeterminado, o dicho de otra forma, en tales casos se sobresee "en la causa", hasta que aparezcan mejores datos de investigación. Muy otra es la situación en el caso de la amnistía, que es un beneficio que obligadamente debe favorecer a personas concretas por hechos también perfectamente determinados y establecidos en el proceso. De ahí que el desplazamiento en la calificación global de la situación procesal producida que propone la sentencia en comentario, de sobreseimiento definitivo a sobreseimiento temporal, resulte altamente ilustrativa de los términos exactos del debate sobre la oportunidad de la declaración judicial del beneficio en que la amnistía consiste.

14. El fallo mencionado resuelve en la forma vista "teniendo únicamente en consideración que no aparece establecida en autos la existencia del delito denunciado". También nos parece acertada esta afirmación, que revela la construcción mental del argumento de los sentenciadores. Ello no significa, por cierto, que la aplicación de la amnistía referida no presuponga otras exigencias que deban cumplirse, entre las cuales deben mencionarse el hecho de que, favoreciendo toda amnistía a personas concretas, es preciso que en el proceso se encuentren determinados los culpables, cuya responsabilidad pe-

nal se trata de extinguir, y la circunstancia del tiempo de comisión de los delitos, que el D.L. 2.191 restringe a la duración del estado de sitio. Simplemente este fallo de la C. de Apelaciones de Santiago que venimos examinando postula, con razón, que no encontrándose acreditada en la causa la condición conceptual **previa** y fundamental de la amnistía, esto es, que efectivamente se haya cometido el hecho delictuoso materia de la investigación, eso **basta** para rechazar el sobreseimiento definitivo que se funda en dicha amnistía. En efecto, si falta esa esencial comprobación, no tiene sentido inquirir por los posibles partícipes en un hecho que ni siquiera se encuentra legalmente establecido. Tampoco lo tendría hacer consideraciones sobre la época de su ocurrencia, por la misma razón. En suma, previo a todo es, lógicamente, acreditar el delito investigado; hecho que sea, la indagación debe concretarse en la determinación de los responsables para quienes se dictó esta ley de amnistía.

15. Corresponde ahora entrar de lleno al examen de los presupuestos que deban concurrir para que pueda entrar en aplicación la amnistía concedida por el D.L. 2.191, los que han ido apareciendo de la exposición anterior.

En primer lugar, como lo destaca el fallo que acabamos de citar, es preciso que aparezca establecida en autos la existencia del delito objeto del proceso.

Así se desprende, como lo hemos dicho, inequívocamente, en primer lugar, del propio texto del Art. 1º del D.L. 2.191, el que no puede ser desatendido, dado el claro sentido de la ley, que concede amnistía a todos los que, en cualquier forma de participación, "hayan incurrido en hechos delictuosos" durante la vigencia del estado de sitio, siempre que no se trate de los delitos señalados en el Art. 3º de dicho decreto ley, y que concurren las demás con-

diciones establecidas por este último (que no se trate de procesados o condenados).

En segundo lugar, y siempre dentro de la argumentación literal, tenemos el Art. 413 del C.P.P., que condiciona, igualmente, el sobreseimiento definitivo, a la circunstancia de encontrarse agotada la investigación con que haya tratado de comprobarse el cuerpo del delito que hubiere dado lugar a la formación del sumario. Esta disposición, concebida en términos imperativos ("El sobreseimiento definitivo **NO PODRÁ DECRETARSE** sino cuando..."), cualquiera que sea la causal del sobreseimiento definitivo, es tanto más justificada tratándose de una amnistía que en la mayoría de las otras causas de aquel sobreseimiento, lo que se comprueba con la sola lectura del resto de los numerandos del Art. 408 del C.P.P.: En efecto, en el caso de los números 1, 2 y 3 de este último precepto (no hay presunciones de que se haya verificado el hecho que dio motivo a la causa; tal hecho no es constitutivo de delito; o aparece claramente establecida la inocencia del procesado) pareciera que, por la propia fuerza de las cosas, la imposición del Art. 413 citado no pudiera tener mayor aplicación, resultando superflua. En efecto, si el hecho no es constitutivo de delito, carece de sentido ordenar que se agote la investigación para tratar de comprobarlo. Si, por otro lado, ni siquiera hay presunciones de que se haya verificado el hecho (tras la investigación adecuada, se entiende, ya que sólo puede ser el sentido del N° 1 del Art. 413 del C.P.P.), carece igualmente de sentido la "recomendación" de que se haya agotado la investigación para comprobar el cuerpo del delito. En lo que atañe a la inocencia del procesado, si bien esta causal se refiere a la otra condición puesta por el citado Art. 413 para sobreseer definitivamente (que se encuentre también agotada la investigación para determinar la persona del delincuente), ella también resulta ilustrativa de lo

que se viene sosteniendo, toda vez que tampoco dicha imposición tendría sentido.

Tampoco pareciera que la disposición del Art. 413 aludido tenga mayor sentido en los casos de los N.os 6 y 7 del Art. 408, esto es, "cuando sobrevenga un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a dicha responsabilidad", y "cuando el hecho punible de que se trata haya sido ya materia de un proceso en que haya recaído sentencia firme que afecte al actual procesado" (sin negar la posibilidad, ciertamente excepcional, de que pese a concurrir estas causas de sobreseimiento definitivo, la investigación deba seguir hasta agotarse, por no comprender ellas a todos los implicados en los hechos. Igual salvedad cabría hacer respecto de la causal señalada en el N° 4 del Art. 408: "Cuando el procesado esté exento de responsabilidad en conformidad al artículo 10 del Código Penal", que contempla, como se sabe, las circunstancias que eximen de responsabilidad penal. Bien pudiera ocurrir que la investigación debiera proseguir por haber otros implicados no afectados por dichas circunstancias. Además, algunas de esas circunstancias a las que se refiere el Art. 10 del C. P. dejan subsistente la responsabilidad civil, y en tal caso, según se verá más tarde al tratar este punto a propósito de la amnistía, la necesidad de la prosecución de la investigación por el propio Juez del Crimen podría resultar decisiva e inexcusable para proteger los derechos de los perjudicados con el delito).

16. En consecuencia, se tiene que, en general, la norma del Art. 413 del C.P.P. resulta más claramente aplicable a algunas de las situaciones a que se refiere el N° 5 del Art. 408 del mismo cuerpo de leyes. Decimos algunas, ya que en varias de las causales de extinción de responsabilidad penal no se advierten, en verdad, la utilidad y la necesidad de agotar la investigación en

los términos demandados por el citado Art. 413.

En suma, pues, es justamente a propósito de la amnistía (y lo mismo cabe decir del indulto) donde mejor y más claramente se aprecia la **ratio legis** de la norma contenida en el Art. 413 del C.P.P. referida a la oportunidad en la cual debe dictarse el sobreseimiento definitivo. Realmente es principalmente aquí donde adquiere todo su sentido la necesidad de posponer dicha dictación hasta la comprobación del hecho punible y la determinación de los delincuentes, en atención a razones que se vinculan, como se ha adelantado, a la propia naturaleza de una ley de amnistía, a los requerimientos de valores superiores y permanentes del derecho, como son la seguridad y la certeza jurídica y, finalmente, en el caso concreto de los beneficios concedidos por el D.L. 2.191, al interés social de que los hechos delictuosos cometidos masivamente por los servicios de seguridad en contra de cientos de personas y que quedan comprendidos en esta "gracia" (entré otros, homicidios, asesinatos, lesiones de toda clase, mutilaciones, secuestros, detenciones ilegales, etc.) se aclaren definitivamente. Todas estas razones jurídicas y ético-sociales se verían burladas si se generalizara el predicamento de los fallos de primera instancia a los que nos hemos referido anteriormente y que abogan por una aplicación inmediata de la amnistía.

17. La estricta necesidad de que se encuentre comprobado el delito antes de darle aplicación a la amnistía fluye también de la circunstancia que el D.L. 2.191 no ha concedido tal beneficio respecto de cualquier hecho delictuoso; por generales que sean sus términos; sino que sólo respecto de algunos; concretamente, los no señalados en la enumeración que hace el Art. 3 del citado decreto ley. De modo entonces que es absolutamente indispensable que la investigación sumarial se encuentre agotada realmente, ya que sólo si ello

ocurre podrá tenerse la certeza de que la amnistía se está concediendo en relación con delitos alcanzados por ella, y no además, respecto de otros hechos punibles que expresamente se han exceptuado del beneficio. Naturalmente, la misma seriedad de los procedimientos judiciales, y la precisión que les es característica, exige una absoluta determinación sobre este punto (es decir, que se encuentren comprobados los hechos concretos, específicos, que se imputan, y por los cuales se trata de amnistiar a sus responsables), sin que puedan aceptarse soluciones que impliquen verdaderos acertijos, como ocurre con uno de los fallos de primera instancia comentados precedentemente, concebidos en términos a tal extremo conjeturales, que son la negación misma de toda labor investigadora llevada a cabo por un Juez de instrucción, y que contradice, por lo mismo, los principios básicos, resaltados reiteradamente por la ley procesal, en orden a los objetivos esenciales de la investigación sumarial.

En efecto, los Arts. 76 y 108 del C.P.P. insisten en que el fundamento del juicio criminal y primer objeto a que deben tender las investigaciones del sumario es "la existencia del cuerpo del delito, o sea el hecho punible" y "su comprobación por los medios que determina la ley". El otro gran objetivo del sumario es, como se sabe, la determinación de la persona o personas responsables de la perpetración del delito. Existen otros objetivos aún, señalados por el Art. 76 citado, de menor importancia relativa, en comparación con aquellos dos, que son esenciales, a saber, la determinación de las circunstancias que puedan influir en la calificación y penalidad del delito; el aseguramiento de la persona de los presuntos culpables y de su responsabilidad pecuniaria.

Pues bien, el Art. 413 del C.P.P. justamente ordena agotar la investigación "con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de determinar la

persona del delincuente", es decir, alude a los dos objetivos **esenciales** y primeros del sumario, y no menciona a los otros objetivos indicados en el Art. 76 referido, ya que ello, particularmente en el caso de una amnistía, no tendría mayor sentido. Lo que debe destacarse una vez más, teniendo presente ahora dichos objetivos esenciales del período de instrucción del proceso, es que aun frente a una ley de amnistía, de todas formas debe agotarse la investigación para comprobar el delito y determinar a los delincuentes, ya que éstos son los dos objetivos primeros e irrenunciables de toda investigación sumarial, a tal punto que subsisten como tales objetivos (con la consecuente obligación de cumplirlos) aunque la responsabilidad se encuentre extinguida en virtud de una amnistía. Cabe hacer presente que no se trata aquí de que el fin de la investigación a que se refiere el inc. 1 del Art. 413 del C.P.P. sea el de acreditar la posible existencia de circunstancias que eximen de responsabilidad penal o los hechos de que dependa su extinción, ya que tal situación está prevista expresamente, como diferente, por el inc. 2 del precepto citado.

En suma, pues, y en lo que hace a este primer presupuesto de la amnistía, esto es, que se encuentre comprobada la existencia del delito, tenemos que él constituye a la vez no sólo el primer objetivo del sumario, sino que "el fundamento de todo juicio criminal", carácter que no se pierde ni aun en presencia de una ley de amnistía como lo pone de relieve la disposición del propio Art. 413 del C.P.P., interpretada armónicamente con los demás preceptos que forman parte del Instituto Jurídico en el cual este último se inserta, es decir, el sumario criminal, su naturaleza y fines. La razón de esto es que no obstante la amnistía, de todos modos la investigación completa se justifica, no sólo, naturalmente, por razones de prestancia y seriedad de los tribunales y sus procedimientos (valores que algunos querrían tal vez subordinar al de

la economía procesal) sino por otras de mayor trascendencia aún, a las cuales aludiremos más adelante.

18. La necesidad de este primer presupuesto de la amnistía se desprende también de su propia naturaleza: extinguen la responsabilidad penal; y, como se sabe, la responsabilidad penal, y no sólo ella, sino que cualquier tipo de responsabilidad jurídica está referida, por definición, a la existencia de un hecho concreto, en la especie, a un hecho delictuoso preciso, tipificado por la ley. De manera que con mayor razón, en el caso de extinción de responsabilidades penales, que se refieren a hechos específicos descritos circunstanciadamente por el legislador, se requiere, para que espere esta causal de extinción de dicha responsabilidad, que se encuentre establecido el hecho delictuoso que se se trata de cubrir con tal beneficio.

19. A este propósito existe un aforismo jurídico cuya cita resulta igualmente ilustrativa: "Actio non datur nisi prius contest de corpore delicti" (no hay acción judicial si antes no consta el cuerpo del delito). Pues bien, la amnistía extingue, en verdad, o bien la pena, o bien, precisamente, la **acción penal** (como lo enseña la doctrina). Y como se puede apreciar, condición de la existencia misma de la acción penal es el establecimiento del cuerpo del delito. Nuestra legislación corrobora este aserto. En efecto, sabido es que la simple denuncia o la querrela no importa, por sí misma, ejercicio de la acción penal, justamente porque no supone que se encuentre acreditado el delito. Sin entrar en discusiones doctrinarias complejas sobre este punto, basta observar que tanto la acusación fiscal (que indudablemente importa el ejercicio de la acción penal) como el auto encargatorio de reo presuponen justamente que se encuentre justificada la existencia del delito que se investiga.

20. En realidad, si no consta siquiera la existencia del delito, la solución al

problema que nos ocupa no está en la declaración judicial del beneficio de la amnistía, sino que en la dictación de un sobreseimiento temporal (como hizo uno de los fallos de segunda instancia ya comentado) o aun de un sobreseimiento definitivo, pero fundado en el N° 1 del Art. 408 del C.P.P. Que el sobreseimiento dictado por esta causa sea definitiva o temporal dependerá del mérito que arroje el proceso: si no aparecen presunciones de que se haya verificado el hecho que dio motivo a la formación de la causa, deberá decretarse el sobreseimiento definitivo, en tanto que si existen tales presunciones, pero no resulta completamente justificada la perpetración de dicho delito, lo que procede es el sobreseimiento temporal (Art. 409 del C.P.P., N° 1).

21. Para terminar con el examen de este primer requisito de la aplicación de la amnistía a que se refiere el D.L. 2.191, citemos las declaraciones formuladas por el entonces Presidente de la Corte Marcial, Ministro señor José Cánovas Robles, en respuesta a la consulta periodística sobre la situación de los procesos en que se investiga la desaparición de personas (publicadas en el diario "El Mercurio" de fecha 14 de mayo de 1978). Expresó el señor Cánovas textualmente en dicha oportunidad: "para que proceda el sobreseimiento (fundado en la citada ley de amnistía) en una causa de esa naturaleza es necesario que exista una imputación concreta en contra de persona determinada. Además, se requiere que se agote la investigación para saber qué delito se ha cometido, lo que es necesario, porque el Art. 3° del D.L. 2.191, enumera en forma taxativa ciertos tipos de delitos en los que no procede sobreseimiento".

22. El segundo presupuesto de la concesión de la amnistía referida es que se encuentre determinada en el proceso la persona de los delincuentes a quienes se trata de aplicar este beneficio.

Como muy bien lo puso de manifiesto el propio Ministro señor Cánovas en la entrevista citada anteriormente, "la amnistía es en favor de las personas y no de los delitos, aun cuando se limite en su aplicación a ciertos delitos", añadiendo que debe existir una imputación concreta en contra de "persona determinada".

En verdad, el requisito señalado es obvio, y el propio texto del D.L. 2.191 lo reitera en forma insistente. En efecto, el Art. 1º de este D.L. comienza por manifestar que se concede amnistía a todas las **personas** que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos no expresamente exceptuados del beneficio. Los otros cuatro artículos del D.L. 2.191 discurren asimismo sobre la base de que se trata de un beneficio que supone un titular concreto y determinado, y emplean, todos ellos, al igual que el Art. 1º el vocablo "persona" para enfatizar justamente esta idea. En relación con este presupuesto de la amnistía debe mencionarse también la disposición del Inc. 1º del Art. 413 del C.P.P., que, como ya se ha visto a propósito del requisito tratado en primer término, condiciona la dictación del sobreseimiento definitivo a la circunstancia de encontrarse agotada la investigación con que haya tratado de determinarse la persona del delincuente. Por razones similares a las expuestas al tratar de la necesidad de que se encuentre establecido el cuerpo del delito como exigencia previa de la declaración de la amnistía, debe concluirse, en relación con el presupuesto que ahora examinamos, que no bastaría, por cierto, una referencia genérica a las personas que eventualmente pudieran ser responsables de los delitos acreditados en el proceso. Tales personas deben estar determinadas. Si pese a concurrir el primer requisito de la amnistía, esto es, que resulte del sumario haberse cometido el delito incluido en aquélla, "no hubiere indicios suficientes para acusar a determinada persona como autor,

cómplice o encubridor", lo que procede es sobreseer temporalmente, de acuerdo con lo establecido en el Nº 2 del Art. 409 del C.P.P. (Naturalmente, si "aparece establecida claramente la inocencia del procesado", debe sobreseerse definitivamente, pero no en virtud de la amnistía sino que de acuerdo con lo dispuesto en el Nº 3 del Art. 408 del cuerpo de leyes citado. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, no da lo mismo que se siga un camino u otro, pues si bien las consecuencias son iguales respecto de la responsabilidad penal, no ocurre lo mismo con la responsabilidad administrativa y con la civil. Es notorio que el procesado preferirá que el sobreseimiento se funde en su inocencia, ya que ella obstará en definitiva a la satisfacción de las pretensiones de carácter reparatorio que pudiere esgrimir el perjudicado con el hecho.)

23. El propio Art. 408 del C.P.P., en su Nº 5, que es el que se refiere a la extinción de la responsabilidad penal, comprendiendo, por ende a la amnistía, habla del **procesado** a quien afecta dicha extinción. Sin entrar a la cuestión del alcance técnico de esta expresión (¿se exige la declaratoria de reo?), lo cierto es que el empleo de tal expresión por lo menos implica que el sobreseimiento definitivo fundado en tal causal debe dictarse en favor de personas determinadas. Por otra parte, todas las demás causales de sobreseimiento definitivo (excepto, naturalmente, las de los números 1 y 2; no hay siquiera presunciones de que se haya verificado el delito; el hecho materia del sumario no es constitutivo de delito) presuponen igualmente personas determinadas que son beneficiadas con dicha medida.

24. Pero, por encima de estas consideraciones de carácter literal (no siempre decisivas, aunque no desdeñables en este caso, toda vez que el tenor literal de la ley no puede ser desatendido cuando el sentido de la ley es cla-

ro, cómo en el presente caso, en que, mírese como se mire el asunto, y desde cualquier punto de vista que se lo enfrente, todo confluye a la misma inequívoca conclusión, en orden a que la amnistía debe concederse a personas concretas) debe tenerse presente que la amnistía es una causa de extinción de la responsabilidad penal, y que esta responsabilidad se caracteriza, ante todo (y esto es lo que la distingue de otro tipo de responsabilidades jurídicas) por su carácter eminentemente personal. De manera entonces que, así como no se concibe una responsabilidad penal indeterminada o genérica, sino que referida específicamente a una persona concreta, también su extinción, lógicamente, requiere del mismo grado de determinación en cuanto a sus beneficiarios. Ello es evidente, si se considera que la extinción de responsabilidad es, en el fondo, en cierto sentido, una modalidad o accidente suyo, dependiente, por lo mismo, de esa responsabilidad, e incapaz de existir por sí misma, de donde se sigue que dicha extinción no podía contrariar, en su aplicación concreta, la esencia misma de la responsabilidad que se trata de extinguir.

25. El hecho de que la doctrina, para diferenciar a la amnistía del indulto, exprese que mientras aquella es colectiva, en tanto se fundamenta más en los hechos que en las personas, éste es individual, porque se dicta más en consideración a las personas que a los hechos, no significa, por cierto, que la amnistía no deba también, en definitiva, cuando se trata de su aplicación real y concreta, beneficiar a personas perfectamente determinadas. Es efectivo que la amnistía no se dicta (al menos no debe dictarse) en consideración a las personas, pero esto no es óbice para que los amnistiados no deban estar individualizados. Tal singularización es indispensable, ya que la amnistía debe declararse judicialmente respecto de personas concretas que resultan comprendidas dentro de la generalidad de

sus términos. La oposición entre amnistía e indulto se refiere más bien a la extensión de uno y otro beneficio y al móvil del legislador en uno y otro caso (beneficiar a personas determinadas, en el indulto; beneficiar a todas las personas que se encuentren en la misma situación objetiva en la amnistía); pero en ambos eventos la declaración judicial del beneficio debe referirse a personas concretas individualizadas en el proceso.

26. La concurrencia de los dos presupuestos examinados para la aplicación de la amnistía (establecimiento del delito y determinación de los responsables a los que se trata de beneficiar) es una exigencia que nace de los propios e irrenunciables requerimientos de la certeza y seguridad jurídica, según se ha manifestado anteriormente. Resulta a todas luces evidente que para el derecho no puede resultar indiferente que se ignore el delito cometido (e incluso, que se haya cometido alguno) y a los responsables del mismo. Una precisión sobre ambos extremos es indispensable (naturalmente, bastarán presunciones fundadas respecto de la participación; en cambio, en lo que concierne a la existencia del delito, ella debe estar acreditada, ya que de lo contrario no hay, en rigor, acción penal, y la amnistía extingue justamente a esta última. Lo que procede en tal caso es la dictación de un sobreseimiento definitivo o temporal, según los antecedentes de convicción que existan en el proceso: N° 1 de los arts. 408 y 409).

La amnistía no puede declararse, pues, en términos generales e hipotéticos, sino que respecto de personas determinadas, por la responsabilidad que les cabe en hechos también determinados. Existe un manifiesto interés jurídico en que se establezcan con precisión, en primer término, la existencia del delito, y con cierto grado de probabilidad la persona de los amnistiados. Para no citar, sino un ejemplo claro de aquel inte-

rés, baste considerar que de no determinarse con precisión el hecho punible materia de la amnistía y los presuntos responsables, aquel hecho podría, posteriormente, serle imputado a otras personas ajenas al mismo, las cuales deberían sufrir todas las molestias propias de un proceso criminal (las cuales no desaparecen absolutamente por el hecho de que en definitiva puedan invocar la amnistía), siendo, además, sujetos pasivos de la acción civil, que no es alcanzada por la amnistía, lo cual podría traducirse en embargos de bienes y otras medidas cautelares de los resultados de dicha acción. Toda esta situación de incertidumbre y de confusión se evitaría, en cambio, de haberse establecido claramente en la misma resolución que decreta el sobreseimiento definitivo en virtud de la amnistía, el delito específico objeto de la misma y la persona de los beneficiados con ella.

27. Trascendiendo ya el importante ámbito de los respetable intereses jurídicos individuales a los que hemos aludido, los cuales podrían verse gravemente perjudicados en el caso de una aplicación vaga de la amnistía, deben considerarse asimismo los intereses del Estado involucrados, los cuales, no por ser más generales y mediatos, dejan de tener importancia. Así, por ejemplo, aspectos tan trascendentales como una adecuada política criminal resultarían también comprometidos por una declaración imprecisa de la amnistía. En efecto, dicha vaguedad impediría contar con una información precisa sobre el comportamiento delictual de la población durante un lapso considerable (cuatro años y medio), lo que sería tanto más grave en el presente caso, en que la amnistía comprende a algunos de los delitos comunes de más frecuente ocurrencia en el país, como son, entre otros, los que afectan a la vida y a la integridad corporal.

28. Finalmente, es menester insistir en que, como ya lo hemos dicho, la

misma seriedad y prestancia de los procedimientos judiciales impide formular declaraciones tan extremadamente vagas de la amnistía, como ocurre en los fallos de primera instancia, objeto del presente comentario. La propia dignidad de la función jurisdiccional, como asimismo los objetivos **esenciales** de la investigación sumarial, hacen ineludible la obligación de agotar aquélla en procura del establecimiento del delito y de la determinación de los delincuentes. Es por eso que el Art. 413 del C.P.P. prohíbe a los tribunales dictar sobreseimiento definitivo antes de agotar dicha investigación. Y ya vimos cómo tal prohibición cobra justamente en el caso de la amnistía (por exigencias que surgen de su propia naturaleza) todo su sentido, quedando en evidencia que dicha disposición no es en modo alguno (en el caso concreto de la amnistía) un lapsus del legislador, sino que una imposición concebida conscientemente para impedir que se frustren intereses y objetivos permanentes del Derecho, entre los cuales se destacan, como se ha visto, la certeza y la seguridad jurídicas.

29. Examinaremos, por último, un tercer presupuesto de la amnistía contenida en el D.L. 2.191: el de su extensión o ámbito temporal.

Esta amnistía está circunscrita, en cuanto a su aplicación, a un período bien determinado: la vigencia del estado de sitio durante el Gobierno actual (11 de septiembre de 1973 a 10 de marzo de 1978).

El presupuesto temporal aludido tiene importancia tratándose de algunos de los delitos cometidos por los servicios de seguridad, tales como el secuestro y la detención ilegal, ya que estos hechos punibles tienen el carácter de delitos permanentes, esto es, se siguen cometiendo mientras la víctima permanece privada de su libertad. El estado de comunicación perdura en el tiempo

y sólo cesa cuando el detenido o encerrado deja, por cualquier causa, de investir tal calidad.

En consecuencia, en todos los procesos criminales en los que se investigan posibles secuestros o detenciones ilegales, la investigación debe proseguirse hasta averiguar el destino o suerte de las víctimas, sin que a ello pueda obstar la ley de amnistía de abril de 1978, toda vez que esta última cubre solamente los hechos cometidos hasta el 10 de marzo de dicho año. En otros términos, para aplicar el D.L. 2.191, en un proceso que versa sobre los delitos referidos, es preciso que se encuentre descartada la comisión de los delitos permanentes aludidos.

30. La categoría jurídica de los "delitos permanentes" no es, por cierto, una creación doctrinaria ficticia que consagre una irrealdad. No se trata de un artilugio teórico alejado de la realidad de la vida. Por el contrario, lo único que hace es recoger esta última, explicar la realidad del suceder fáctico. No podría ser de otra manera. El derecho en general, y particularmente el derecho penal, no puede, con sus normas o categorías, alterar el orden natural de las cosas. Lo que hace es explicar, ordenar, en una suerte de sistematización del buen sentido.

31. Lo que la ley sanciona en el secuestro es la acción de privar a otro de su libertad. Mientras dure dicha privación, la acción prohibida por la ley se sigue ejecutando. La víctima conserva en todo momento el carácter de ofendido **actual** y podría, por ejemplo, defenderse de los delincuentes que la mantienen en esa situación y ejecutar acciones tendientes a recuperar su libertad (romper ventanas, forzar puertas, agredir y reducir a los captores y guardianes), sin que su proceder fuera antijurídico puesto que estaría amparado por la justificante de la legítima defensa, la cual exige de una agresión

actual (las reacciones contra ofensas pretéritas constituyen modalidades de la justicia por mano propia o de la venganza privada), calidad que ostenta el hecho de **mantener** a alguien detenido o encerrado, cualquiera que sea el tiempo que dure la privación de la libertad. La prolongación de la privación de la libertad sólo puede agravar la responsabilidad penal de sus autores (y demás partícipes), en conformidad con el inc. 3 del Art. 141 y el Art. 69 del C.P., pero jamás, y sostenerle solamente, ya es grotesco, podría hacer perder a la agresión en contra del bien jurídico de la libertad personal su carácter de actual, mientras la privación de esta última se mantenga.

Sostener algo distinto, con el fin de ampliar la aplicación de la amnistía, implicaría no un perdón (porque sólo se pueden perdonar acciones que ya se han realizado), sino más bien una autorización para seguir cometiendo la infracción, puesto que no otra cosa sería semejante promesa de impunidad.

De todo cuanto se ha expuesto se desprende la calidad de ofendidos actuales (y no sólo pretéritos) que invisten las personas que han sido arbitrariamente privadas de su libertad por los servicios de seguridad y cuyo paradero hasta el día de hoy se ignora. Pues bien, esta sola consideración prueba la imposibilidad de favorecer a los responsables de estos hechos con la amnistía citada, ya que ello significaría poner término a tales procesos mediante el sobreseimiento definitivo que debería dictarse en los mismos. Sin embargo, esta consecuencia pugna con uno de los fines fundamentales del proceso criminal, el que no siempre se enfatiza suficientemente, cual es, prestar al ofendido por el delito la debida protección.

32. Así se desprende claramente de las disposiciones preliminares del Código de Procedimiento Penal, las que señalan, como primera diligencia del

sumario, antes que ninguna otra, DAR PROTECCION A LOS PERJUDICADOS (Art. 7 del C.P.P.). En este mismo orden de ideas discurren otros preceptos del cuerpo legal citado, entre los cuales merecen destacarse, por su trascendencia, los que condicionan el otorgamiento de la libertad provisional a los reos a la inexistencia de un peligro para la seguridad del ofendido.

Se comprende fácilmente que en el caso de personas secuestradas por organismos de seguridad y que se encuentran desaparecidos (y cuya detención ha sido, además, negada oficialmente por las autoridades del Poder Ejecutivo), la única forma imaginable de otorgárseles protección sería poniéndolas inmediatamente en libertad, lo cual sólo sería posible en virtud de una orden judicial o como resultado de la investigación criminal, de manera entonces, que la declaración de la extinción de la responsabilidad penal de los miembros de los servicios de seguridad que han participado en la comisión de los secuestros referidos, produciría como consecuencia dejar sin protección alguna a personas que ahora, hoy día, en este preciso momento, tienen la calidad de perjudicados en virtud de las acciones ilegales que con ellas continúan realizando sus captores o guardianes.

En suma, pues, la amnistía no alcanza a los secuestros y detenciones ilegales que, aunque iniciadas durante la vigencia del estado de sitio, se han seguido cometiendo con posterioridad a su término.

33. Como se sabe, y lo acepta pacíficamente la doctrina jurídica universal y también por cierto la nacional, la amnistía extingue sólo la responsabilidad penal, y deja subsistente, por entero, la responsabilidad civil. Más aún, como lo señalara el (ex) Contralor General de la República, señor Enrique Silva Cimma, en su informe al Presidente de la

Cámara de Diputados, contenido en Oficio N° 86.299, de 11 de noviembre de 1966, "Tanto la jurisprudencia de nuestros tribunales, en particular la que deriva de las sentencias de la Corte Suprema, como los informes de esta Contraloría y los del Consejo de Defensa Fiscal, hoy del Estado, al igual que la opinión unánime de los autores y de los profesores que imparten enseñanza del Derecho Penal en la cátedra universitaria, coinciden en apreciar la amnistía como un medio de extinguir la responsabilidad penal, la pena correspondiente al delito amnistiado y todos los efectos de la pena. Sostienen, con idéntica concordancia, que aquella amnistía no alcanza a influenciar la responsabilidad civil que proviene del delito, ya que los alcances de ella están referidos exclusivamente a la pena y a los efectos de ella".

La subsistencia de la responsabilidad civil, pese a la amnistía, tiene, a nuestro juicio, gran importancia en la determinación sobre la oportunidad de la declaración judicial de tal beneficio a través del sobreseimiento definitivo.

En efecto, se nos ocurre que la única manera de lograr que el ejercicio de la acción civil indemnizatoria no resulte ilusoria es, precisamente, condicionar la dictación de dicho sobreseimiento, a la circunstancia de encontrarse agotada la investigación con que haya tratado de comprobarse la existencia del delito y de determinar la persona de los delincuentes. Piénsese sólo en el destino de una acción civil de esa índole ejercitada ante los tribunales civiles, en el caso en que el proceso criminal correspondiente haya terminado por sobreseimiento definitivo, sin que conste siquiera fehacientemente la comisión del delito y sin que se encuentren tampoco determinados los responsables. Las posibilidades de éxito de la acción civil referida están estrechamente vinculadas, obvio es decirlo, a la comprobación judicial previa de ambos extremos. Y son justamente los tribunales

del crimen los únicos capaces, en razón de su especialización profesional y de los recursos con que cuentan —amén del hecho de tratarse de instrucciones de oficio— de llegar a la comprobación del delito y de la determinación de los responsables del mismo. Lo dicho anteriormente es lo único lógico, toda vez que la responsabilidad civil emana justamente del delito penal (el cual por ocasionar daños, hace surgir, además, aquella responsabilidad), cuyo establecimiento debe efectuarse por los tribunales del crimen llamados por la ley a cumplir tal cometido.

En consecuencia, son los derechos patrimoniales de los perjudicados con el delito, que se incorporan a su patrimonio desde la comisión del hecho punible, los que por otra vía, y a mayor abundamiento vienen a reforzar el planteamiento de los fallos de segunda instancia comentados, en orden a que la declaración judicial de la amnistía a través del sobreseimiento definitivo sólo puede tener lugar una vez que se encuentre agotada la investigación en los términos expresados en el Art. 413 del C.P.P. Digamos, finalmente, que de acuerdo con la propia mecánica de la ley procesal, el ejercicio de la acción civil que emana del delito es absolutamente dependiente de los resultados de la investigación criminal, sea que dicha acción se entable ante el propio tribunal que conoce del delito, sea que se incoe ante el tribunal civil ordinario competente. Pues bien, para que se mantenga la referida relación en el caso de una ley de amnistía, es preciso que la investigación sumarial prosiga no obstante aquélla, en procura del establecimiento del delito y de los responsables; sólo si eso ocurre se mantendrá la misma relación querida por la ley entre acción civil y sus presupuestos que no son otros, como se dijo, que los resultados de la propia investigación criminal. Si esta última queda incompleta, por efecto de un so-

breseimiento prematuro, dictado con infracción de lo dispuesto en el aludido Art. 413 del C.P.P., será la propia acción civil la que, en definitiva, quedará sin base de sustentación real y sólida.

34. Por último, es preciso referirse al contexto ético social en el que inciden estos secuestros cometidos por agentes de servicios de seguridad del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, y cuyo fondo es el drama de cientos de compatriotas desaparecidos tras haber sido detenidos por el personal referido. En declaración pública de fecha 15 de junio de 1978, el Ministro del Interior, refiriéndose al problema de los detenidos desaparecidos y a los alcances de la amnistía, expresó, saliendo al paso de críticas formuladas a esta última: "¿Qué es lo que pretendían los críticos? ¿Acaso que el Gobierno perdona a quienes desde las trincheras del extremismo marxista promovieron la guerra civil y, en cambio, mantuviera vigente el castigo para aquellos que pudieron excederse en combate?" En el mismo sentido, la declaración de este personero de Gobierno de fecha 20 de diciembre de 1978, reitera que la ley de amnistía "buscó justamente borrar los efectos penales tanto de los delitos cometidos por quienes habían preparado fría y sistemáticamente la guerra civil, como de los eventuales excesos en que hubieran podido incurrir quienes tuvieron la misión de conjurarla".

De estas declaraciones se desprende (por encima del lenguaje eufemístico usado: "eventuales excesos de combate", etc.) el reconocimiento de uno de los fines de la amnistía: borrar los efectos penales o perdonar los delitos cometidos por los servicios de seguridad durante la vigencia del estado de sitio.

En las mismas declaraciones, posteriores ambas al D.L. 2.191 que concedió la amnistía tantas veces citada, el Mi-

nistro del Interior manifestó que "cualquiera sea la verdad concreta en cada situación (de detenidos desaparecidos), ella **puede ser investigada por los Tribunales de Justicia** y, por su parte, el Gobierno explorará cualquier camino serio que, respecto de algún caso particular, pueda presentársele" (declaración de 15 de junio citada). La misma idea es reiterada en la declaración de 20 de diciembre de 1978, donde se expresa que "el Gobierno desea contribuir al esclarecimiento de los hechos **que la justicia investiga**".

Ambos tipos de declaraciones contenidas en los mismos documentos, serían, a primera vista, inconciliables entre sí, toda vez que la amnistía de los crímenes de la DINA y demás servicios de seguridad estaría significando, en los hechos, la imposibilidad de un esclarecimiento judicial de los mismos.

Sin embargo, la contradicción es sólo aparente, precisamente en virtud de todo cuanto hemos venido sosteniendo

en apoyo de los tallos de segunda instancia materia del presente comentario. En efecto, la amnistía por sí sola no cierra la posibilidad a la investigación criminal, ya que, como se ha visto, sólo puede ser dictada una vez que se encuentre agotada dicha investigación en conformidad con lo prevenido en el Art. 413 del C.P.P. En definitiva, pues, los fallos referidos lo que hacen en el fondo no es otra cosa que conciliar ambas declaraciones haciéndolas coherentes. En efecto, si el Gobierno manifiesta su esperanza de que la situación de los detenidos desaparecidos sea investigada por los tribunales, y lo hace con posterioridad a la amnistía, es porque entiende que pese a ella, la investigación judicial puede y debe continuar en procura de un esclarecimiento total de los hechos, el cual resulta conveniente para todos: para los familiares, para la sociedad chilena y también, debemos suponerlo, para el propio Gobierno. Dentro de la posición formulada por este último, sólo una vez que tal esclarecimiento tenga lugar, entraría en aplicación la ley de amnistía.

Jurisprudencia

**MANIFESTACIONES PACIFICAS CON DETENCION DE
LOS PARTICIPANTES Y ACUSACION DE INFRINGIR
LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO.**

**1. REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL MINISTRO
DEL INTERIOR POR INFRACCION A LA LEY DE
SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO.**

EN LO PRINCIPAL: Formula requerimiento. PRIMER OTROSI, acompaña documentos probatorios. SEGUNDO OTROSI, patrocinio y poder.

I. Corte de Apelaciones.

SERGIO FERNANDEZ FERNANDEZ, Ministro del Interior, domiciliado para estos efectos en el Edificio Diego Portales de esta ciudad, a US. Iltna. respetuosamente digo:

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 26 de la Ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, vengo en formular requerimiento en contra de: AURORA ISABEL VILLARROEL VERA, dueña de casa, carnet de Identidad N° 5.652.235-2 de Villa Alemana, domiciliada en Paradero 18 Gran Avenida, calle Nueva 78, San Miguel; PATRICIA ELVIRA SALAS GONZALEZ, dueña de casa, carnet de Identidad N° 6.283.741-1 de Santiago, domiciliada en Diagonal Los Presidentes N° 134-A, Depto. 304, comuna de Ñuñoa; SARA DUQUE DUQUE, dueña de casa, sin carnet de identidad, domiciliada en Las Rejas N° 601, sector Sur, Block 11, Depto. N° 302, Maipú; MARIA CECILIA RODRIGUEZ ARAYA, labores de casa, carnet de identidad N° 4.855.664-7 de Santiago, domiciliada en Santa Victoria N° 133, Vicuña Mackenna 500, Fono 225415 de Santiago; ANA LUISA ELVIRA ORELLANA FARFAN, dueña de casa, carnet de Identidad N° 3.155.207-9 de Santiago, domiciliada en Santiaguillo N° 1478, San Diego x San Ignacio, sector 4° Comuna, Santiago; BLANCA INES CHAMORRO CACERES, dueña de casa, carnet de identidad N° 2.330.268-3 Santiago, domiciliada en Avda. Matta N° 349, Fono 22230, Comuna de Santiago; VIO-

LETA MARIA ZUÑIGA PERALTA, dueña de casa, carnet de identidad N° 3.242.761-8 de Santiago, domiciliada en Pío XII N° 7777, Población José María Caro, sector F. Paradero 17 Gran Avenida, San Miguel; ROSA JUVENILIA RUBILAR GARRIDO, ama de casa, carnet de identidad N° 5.014.915-3 de Santiago, domiciliada en Cuevas N° 1328, cuarta comisaría. Fono 568472, Santiago; GABRIELA YOLANDA BRAVO JARA, enfermera, carnet de identidad N° 6.245.437, Santiago, domiciliada en Echaurren N° 664, Depto. 325, Blanco con República. 8ª Comisaría. Comuna de Santiago; GLORIA LUCIA GABRIELA QUIJADA SOLAR, dueña de casa, carnet de identidad N° 2.899.603, de Santiago, domiciliada en Juan Godoy 087, 3er. piso, Santiago; MARIA LUZ ENCINA SILVA, ama de casa, carnet de identidad N° 3.242.934 Santiago, domiciliada en Ejército N° 346, Santiago; PATRICIA VIOLETA PAREDES PARRA, estudiante, carnet de identidad N° 5.977.907-9 de Santiago, domiciliada en Quirihue N° 90, Depto. C, Ñuñoa; EMELINA HORTENSIA BOETTIGER VERA, dueña de casa, carnet de identidad N° 4.322.887 de Santiago, domiciliada en Avda. Santa María N° 6509, La Cisterna; GALA JESUS TORRES ARAVENA, dueña de casa, carnet de identidad N° 2.815.633-2 de Santiago, domiciliada en Espejo N° 1016, Población Lo Espejo, Pudahuel; ZAIRA DEL CARMEN ABARCA LEIVA, modista, carnet de identidad N° 3.917.876-1 de Santiago, domiciliada en Max Jara N° 5108, casa W, Población Santa Elena, Ñuñoa; MARIA TANIA TORO BRAVO, dueña de casa, carnet de identidad N° 5.947.482-0 de Santiago, domiciliada en Villa Pintor Cicarelli, Silva N° 636 A, Santiago; PAULINA IDES MARTINEZ RIQUELME, dueña de casa, carnet de identidad N° 2360, Cardenal Caro, domiciliada en Habana N° 2468, Población José María Caro, Santiago; ALICIA BLANCA ESTRELLA TAPIA, dueña de casa, carnet de identidad N° 2.646.877-9, Valparaíso, domiciliada en Pirámide N° 1024, casa A, San Miguel; HUMILDE APOLONIA RAMIREZ CABALLERO, cesante, carnet de identidad N° 5.206.451-1 Santiago, domiciliada en Francisco de Castañeda N° 4792 de San Miguel; VICTORIA SELENIA DIAZ CARO, dueña de casa, carnet de identidad N° 6.005.812-1 Santiago, domiciliada en Miguel Campos N° 3004, Población San Joaquín, San Miguel; ELSA DEL CARMEN ESQUIVEL ROJO, labores de casa, carnet de identidad N° 2.695.507-6 Santiago, domiciliada en Huasco N° 6807, población Clara Estrella, La Cisterna; ANDREA DEL CARMEN HERRERA SALINAS, labores de casa, carnet de identidad N° 7.698.954-0 de Santiago, domiciliada en Pasaje 7 Noviembre N° 4316, Renca; NORMA ALICIA MATUS GONZALEZ, labores de casa, carnet de identidad N° 3.195.321-9 Santiago, domiciliada en Carlos Aguirre Luco N° 1070, población Victoria, Con-

chalí; MARIANA HILDA GUZMAN NUÑEZ, labores de casa, carnet de identidad N° 4.333.983-4 Santiago, domiciliada en Padre Las Casas N° 2473, Conchalí; MARIA ANGELICA PILQUIL LIZAMA, ama de casa, carnet de identidad N° 5.544.733-0 de Santiago, domiciliada en Los Copihues N° 1977, Comuna de Pudahuel; ANA CLEDIA MOLINA PALACIOS, dueña de casa, carnet de identidad N° 3.599.489, Santiago, domiciliada en Pasaje 1 Poniente N° 8016, población José María Caro; OLIVIA DELFINA SAZO GAMBOA, dueña de casa, carnet de identidad N° 3.689.814 de Santiago, domiciliada en Latadía N° 4301, Las Condes; CARMEN ROSA VIVANCO VEGA, ama de casa, carnet de identidad N° 2.233.508 de Santiago, domiciliada en Parque Apoquindo, calle 7, N° 7801, Las Condes; IRENE GODOY GODOY, dueña de casa, carnet de identidad N° 3.024.630-6 de Santiago, domiciliada en Caupolicán N° 1196, Renca; MARTA DE LAS MERCEDES PEREZ PEREZ, costurera, carnet de identidad N° 4.217.124-7 Santiago, domiciliada en Juan Vicuña N° 1596, Santiago; CARMEN ROSA BRICEÑO MARTINEZ, dueña de casa, carnet de identidad N° 5.028.864 Santiago, domiciliada en Monja Alférez 3929, Población San Miguel; HILDA MERCEDES SALDIVAR OLIVARES, labores de casa, carnet de identidad N° 2.472.982-6 de Santiago, domiciliada en 5 Poniente 5857, población José M. Caro; GLADYS MARGARITA GONZALEZ MEDINA, labores de casa, carnet de identidad N° 3.251.067-1 Santiago, domiciliada en Gaspar de Orense N° 356, Quinta Normal; ROSA PEÑAILILLO NUÑEZ, labores de casa, carnet de identidad N° 5.226.562-2 Santiago, domiciliada en Luis Infante Cerda N° 5447, Comuna de Maipú; MARIA TERESA BARAHONA MUÑOZ, labores de casa, carnet de identidad N° 5.399.863-1 de Santiago, domiciliada en calle San Alfonso N° 1389, Santiago; AURELIANA ANGELICA MUÑOZ CATEJO, Secretaria, carnet de identidad N° 6.159.631-3 Santiago, domiciliada en Porto Seguro N° 5121, Qta. Normal; SUSANA DEL CARMEN ZUÑIGA NORAMBUENA, Contadora, carnet de identidad N° 4.034.172-2 de Santiago, domiciliada en Pasaje 6, casa 105, población Nueva San Bernardo, San Bernardo; UBALDINA ALFARO CASTILLO, labores de casa, carnet de identidad N° 34325 de Maipú, domiciliada en Sta. Amanda N° 14 A, Comuna de Maipú; HERMINIA FRANCISCA ANTEQUERA LATRILLE, labores de casa, carnet de identidad N° 2.044 de La Cisterna, domiciliada en Clemente Fabres N° 1190, Providencia; RAQUEL DEL CARMEN ARDILES TABILO, dueña de casa, carnet de identidad N° 3.769.455-K San Miguel, domiciliada en Club Hípico N° 154, población Juan Hamilton, San Miguel; ORFELIA DEL CARMEN SILVA CORRALES, dueña de casa, carnet de identidad N° 2.471.713-5 de Santiago, domi-

ciliada en Pasaje N° 10 Norte, 3912, población José M. Caro, San Miguel; IRMA ROSA ARELLANO HURTADO, dueña de casa, carnet de identidad N° 11.655; Barrancas, domiciliada en Avda. Estrella N° 1281, población La Estrella, Pudahuel; LIDIA ARGANDOÑA TAPIA, dueña de casa, carnet de identidad N° 4.884.197-K Santiago, domiciliada en Apolo N° 5771, población El Cortijo, Quilicura; CARMEN LUZ QUEZADA FUENTES, dueña de casa, carnet de identidad N° 5.166.567-8 de Santiago, domiciliada en Villa Lo Arrieta, calle 133, N° 6962, Ñuñoa; MARIA GARRIDO ESPINOZA, dueña de casa, carnet de identidad N° 2.408.549, Santiago, domiciliada en Nuel Huapi N° 3581, Pobl. Magallanes, San Miguel; ZOILA DORIS MENICONI LORCA, dueña de casa, carnet de identidad N° 4.884.779-K de Santiago, domiciliada en Pasaje Cochamó N° 1431, población La Palmilla, Conchalí; NINFA ANA ESPINOZA FERNANDEZ, dueña de casa, carnet de identidad N° 3.927.933-9 de Santiago, domiciliada en Nueva Tres N° 1738, población Mirador Viejo, Renca; MAGDALENA MERCEDES NAVARRETE FARRALDO, Contadora, carnet de identidad N° 370.850 Valparaíso, domiciliada en Los Aliaga N° 441, Ñuñoa; BELGICA DEL CARMEN CASTRO FUENTES, labores de casa, carnet de identidad N° 7.575.658-5 Santiago, domiciliada en Comandante Riessler N° 387, población La Legua, San Miguel; ERNESTINA ELENA ALVARADO RIVAS, labores de casa, carnet de identidad N° 1.987.667 de Santiago, domiciliada en Pasaje Muñoz Hurtado N° 275, población Enrique Mac-Iver, Santiago; ELENA COFRE JOFRE, labores de casa, carnet de identidad N° 5.047.323-6 Santiago, domiciliada en Avda. Fraternal 3833, Población José María Caro, Sector A-San Miguel, Paradero 14 Gran Avenida; VIVIANA ELISA DIAZ CARO, dueña de casa, carnet de identidad N° 6.082.926 Santiago, domiciliada en Miguel Campos N° 3050, población San Joaquín, San Miguel; MERCEDES DEL CARMEN AREVALO PANTOJA, labores de casa, carnet de identidad N° 54.951 Lota, domiciliada en Villa Frías, Los Corintios N° 585, Maipú esquina San José, Maipú; ANA GONZALEZ GONZALEZ, labores de casa, sin cédula, domiciliada en Cantares de Chile N° 6271, paradero 16, Sta. Rosa, comuna La Granja; LUCIA IRENE CANTEROS TORRES, labores de casa, carnet de identidad N° 7.334.386-0 Santiago, domiciliada en Panamá N° 9257, La Florida, paradero 18, Vicuña Mackenna, Comuna La Florida; ELIANA DEL CARMEN ZAMORANO ROJAS, labores de casa, carnet de identidad N° 2.815.613-8 La Reina, domiciliada en Simón Bolívar N° 7343, casa J, La Reina; CATALINA DEL CARMEN AVENDAÑO LEAL, labores de casa, carnet de identidad N° 5.546.903, Santiago, domiciliada en 4 Norte 1893, Valdivieso, Comuna de Conchalí;

ELISA DEL CARMEN SEPULVEDA LILLO, labores de casa, carnet de identidad N° 2.743.046-5 Santiago, domiciliada en Profesor Fuentes Maturana 5460, Quinta Normal; RAUL HORACIO LORCA TOBAR, empleado particular, carnet de identidad N° 5.311.143-2 Stgo. domiciliado en Avda. Bustamante 120, 7° piso, fono 220547; comuna de Santiago; PABLO JOSE MAXIMILIANO SANTELICES TELLO, kinesiólogo, carnet de identidad N° 5.392.492-1 Stgo., domiciliado en Juan de Barros 4041, Quinta Normal; ALBERTO RAUL ARAYA FLORES, chofer, carnet de identidad N° 4.488.127-6 Stgo., domiciliado en Población Lautaro, Sorrento 629, Pudahuel; MARIA LORETO TOLEDO CORTES, dueña de casa, sin cédula, domiciliada en Nueva Uno 6674, Villa Sergio Ceppi, La Cisterna; MIRTA E. UGAS O., C. I. N° 3.636.358, Infante 108, Maipú; MONICA GARCIA VIVANCO, abogada, carnet de identidad N° 3.872.800-8 Stgo., domiciliada en Juan Esteban Montero N° 5190, Las Condes; y EUGENIO GONZALEZ ESQUIVEL, estudiante, carnet de identidad s/cédula, domiciliado en Huasco N° 5190, Las Condes, y en contra de todos aquellos que aparecieran involucrados en los hechos que se investigan en este proceso.

Formulo el presente requerimiento en razón de que los individuos mencionados son responsables de los delitos señalados en los artículos 4° letras a) y g), y 6°, letras a) y b) de la Ley N° 12.927 sobre Seguridad del Estado, que castigan a los que inciten o induzcan a la subversión del orden público; a los que propaguen de palabra o por escrito o por cualquier otro medio en el interior, divulguen noticias falsas o informaciones tendenciosas destinadas a perturbar el orden constitucional o la seguridad del país; los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública, y los que difamen a Ministros de Estado, sea que la difamación se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido.

En efecto, las personas individualizadas fueron detenidas por efectivos policiales el día 18 de abril en curso, a las 11.15 hrs. en circunstancias que la mayor parte de ellas se encadenó a las rejas exteriores del edificio del Congreso Nacional que dan a la calle Bandera entre Catedral y Compañía, dependencia ocupada en la actualidad por el Ministerio de Justicia. Posteriormente gritaron consignas alusivas a presuntos desaparecidos cuyas fotos llevaban prendidas visiblemente en las solapas de sus vestidos. Dos de las personas individualizadas: MONICA GARCIA VIVANCO y EUGENIO GONZALEZ ESQUIVEL repartían panfletos alusivos a los desaparecidos y a las actuaciones

nes del Ministro del Interior en ese caso. De todo lo anterior resultó un acto concertado de intento a la subversión del orden público y de provocación a las autoridades e incluso a la difamación de ellas como aparece del propio panfleto aludido.

Fueron testigos presenciales de este acto la señorita Ministro de Justicia Mónica Madariaga Gutiérrez y el señor Subsecretario de Justicia, Coronel Eduardo Avello Concha.

La responsabilidad de las personas detenidas emana del parte N° 1 de 18 de abril de 1979, de la Primera Comisaría de Carabineros de Chile, de Santiago, correspondiente a la Prefectura Central, documento que se acompaña en el Primer Otrosí de esta presentación.

POR TANTO:

En mérito de lo expuesto y de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 26 de la Ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado y demás normas legales pertinentes,

RUEGO A US. ILTMA. tener por efectuado el presente requerimiento en contra de las personas ya individualizadas en lo principal de este escrito y de todos aquellos que aparezcan involucrados en estos delitos durante la sustanciación del correspondiente proceso, por ser responsables de los delitos previstos en los artículos 4°, letras a) y g), y 6°, letras a) y b), de la Ley 12.927, sobre Seguridad del Estado, ordenar se instruya sumario, acusarlos y, en definitiva condenarlos al máximo de las penas que para tales delitos señala la Ley, y al pago de las costas de la causa.

PRIMER OTROSI: Ruego a Us. Iltna. tener por acompañado los siguientes documentos probatorios: Parte N° 1, de 18.04.79 de la Primera Comisaría de Carabineros correspondiente a la Prefectura Central; 50 panfletos con leyendas altamente injuriosas a las autoridades de Gobierno, que le fueron incautados a los mencionados sujetos, y 37 fotografías que portaban prendidas en sus solapas algunos de los detenidos.

SEGUNDO OTROSI: Ruego a Us. Iltna. tener presente que designo abogado patrocinante a don SERGIO MALAGAMBA STIGLICH, Inscripción 4114, R-2, patente N° 1095 para ante la Excm. Corte Suprema, de mi mismo domicilio para estos efectos, y que confiero poder a don SERGIO CASTRO OLIVARES, Procurador del Número, domiciliado en el Palacio de los Tribunales de Justicia.

Presentado hoy 19 de abril de 1979, a las 17.29 hora.

2. RESOLUCION DEL MINISTRO SUMARIANTE QUE DISPONE LA DETENCION DE LOS INculpADOS.

Santiago, veinte de Abril de mil novecientos setenta y nueve.

Manténganse detenidas en el Centro de Orientación Femenina, por el delito contemplado en el artículo 6° letra a) de la Ley de Seguridad del Estado, a Aurora Villarroel Vera, Patricia Salas González, Sara Duque Duque, María Rodríguez Araya, Ana Luisa Orellana Farfán, Blanca Chamorro Cáceres, Violeta Zúñiga Peralta, Rosa Rubilar Garrido, María Toro Bravo, Norma Matus González, Irene Godoy Godoy, Gabriela Bravo Jara, Gloria Quijada Solar, María Encina Silva, Patricia Paredes Parra, Emelina Boettinger Vera, Humilde Ramírez Caballero, Olivia Sazo Gamboa, Susana Zúñiga Norambuena, Gala Torres Aravena, Paulina Martínez Riquelme, Victoria Díaz Caro, Andrea Herrera Salinas, Ana Molina Palacios, Carmen Vivanco Vega, Aureliana Muñoz Catejo, Herminia Antequera Latrille, Mariana Guzmán Núñez, María Pilquín Lizama, Magdalena Navarrete Faraldo, Mónica García Vivanco, Bélgica Castro Fuentes, María Barahona Muñoz, Catalina Avenaño Leal, Carmen Quezada Fuentes, Ninfa Espinoza Fernández, Mercedes Arévalo Pantoja, Eliana Zamorano Rojas, Lidia Argandoña Tapia, Ana González González, María Garrido Espinoza, Zaira Abarca Leiva, Alicia Blanca Estrella Tapia, Elsa Esquivel Rojo, Marta Pérez Pérez, Gladys González Medina, Hilda Zaldívar Olivares, Rosa Peñailillo Núñez, Zoila Meniconi Lorca, Ubaldina Alfaro Castillo, Mirta Ugaz Olivos, Carmen Briceño Martínez, Raquel Ardiles Tabilo, Ernestina Alvarado Rivas, Lucía Canteros Torres, Irma Arellano Hurtado, Viviana Díaz Caro, Orfilia Silva Corrales, Elena Cofré Jofré y Elisa Sepúlveda Lillo, todas en libre plática, excepto la última que permanecerá incomunicada. Dése orden y hágaseles saber la causa.

Manténganse detenidos por el mismo delito precedentemente señalado a Pablo Santelices Tello, Raúl Lorca Tobar y Alberto Araya Flores, en la Penitenciaría de esta ciudad. Dése orden y hágaseles saber la causa.

Déjese en libertad por falta de mérito a María Loreto Toledo Cortés.

En Santiago a veinte de Abril de mil novecientos setenta y nueve notifiqué personalmente en Secretaría

la resolución que antecede a don Sergio Castro y no firmó.

En Santiago a veinte de Abril de mil novecientos setenta y nueve notifiqué personalmente en Secretaría la resolución que antecede al señor Fiscal don Marcial García Pica y no firmó.

3. FALLO DEL RECURSO DE AMPARO ROL N° 245-9.

Santiago, veintiuno de Abril de mil novecientos setenta y nueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que no obstante la motivación de los actos que se investigan, es lo cierto que en el caso que se juzga existe un hecho con caracteres de delito, que recién está en la etapa inicial de la investigación, por cuyo motivo no es dable en esta oportunidad entrar a juzgar esas acciones desde el punto de vista jurídico, ya que para ello se hace necesario contar con los elementos de juicio necesarios, que materialmente no ha sido posible reunir en este breve lapso transcurrido y cuando aún están pendientes los plazos mínimos que la ley acuerda para estos efectos.

Que a ello se agrega que la orden de que se reclama aparece dictada por un juez con facultades para arrestar, está expedida dentro de los casos previstos por la ley y con las formalidades procesales; existiendo, además, mérito suficiente para expedirla, según se desprende de los autos traídos a la vista y particularmente de las propias declaraciones de los inculcados.

En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo que previenen los artículos 255 N° 1° y 306 del Código de Procedimiento Penal se desecha el recurso de amparo interpuesto a fs. 1.

Acordada contra el voto del Ministro señor Galecio, quien estuvo por acoger el recurso de amparo en favor de los detenidos, con excepción de Mónica García Vivanco y de Eugenio González Esquivel.

Tiene para ello presente que no existe en la causa mérito suficiente para justificar la detención de esas personas.

El artículo 136 del Código de Justicia Militar, aplicable a la materia por disponerlo así el art. 27 de la Ley N° 12.927, confiere facultad al instructor para decretar la detención cuando hay motivos bastantes para sospechar que una persona es responsable de un delito y el artículo 255 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, aplicable también según lo que previene el Art. 135 del Código de Justicia Militar y la disposición primeramente citada, le confiere igual facultad cuando, estando establecida la existencia de un hecho que presente caracteres de delito, tenga el

juez fundadas sospechas para repútarlo responsable. Tratándose de hechos que se indagan de acuerdo con las normas de la Ley de Seguridad del Estado, ellos deben ser de los que describe esa misma Ley, situación que no se produce en esta causa, sino respecto de Mónica García y de Eugenio González, como se advierte en el N° 3 siguiente.

En efecto:

1) Los delitos previstos en las letras a) y g) del Art. 4° de la ley 12.927 necesitan, como requisito general, que haya un alzamiento contra el Gobierno constituido o provocación a la guerra civil, pues todos los acápites de ese artículo no son sino formas específicas de esos alzamientos y provocación. Ni en el parte policial, ni en el requerimiento, ni en los antecedentes reunidos por el Instructor aparecen datos que permitan formular esa imputación a los inculpados.

2) Los desórdenes destinados a alterar la tranquilidad pública a que se refiere el acápite a) del art. 6° deben constituir "actos de violencia", como aparece del texto expreso de esa disposición. Tampoco se han proporcionado datos sobre actos de tal naturaleza.

3) Sólo se ha imputado la distribución de panfletos que podrían constituir difamación contra altas autoridades de Gobierno a las dos personas indicadas, no a las demás.

4) Lo dicho es sin perjuicio de que los actos inculcados pudieran constituir faltas o infracciones sancionables por otra vía y de lo que pueda decidir el instructor si en el curso de la investigación se cumplieren los requisitos para detener.

Que, en consecuencia, la detención judicial de los amparados —con exclusión de los indicados— ha sido decretada sin mérito suficiente, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 306 del Código de Procedimiento Penal y 3° del acta Constitucional N° 3, el Tribunal está en la obligación de decretar la libertad de aquéllos, si no estuvieren presos por otro motivo, para restablecer así el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de los afectados.

Archívense en su oportunidad. Devuélvanse los autos traídos a la vista.

Redactó el fallo de mayoría el Ministro señor Cánovas y la disidencia su autor.

N° 245-79.

4. RESOLUCION DEL MINISTRO SUMARIANTE QUE DISPONE LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS.

Santiago, veintitrés de Abril de mil novecientos setenta y nueve.

Vistos y teniendo presente:

Que las investigaciones llevadas a cabo dentro del plazo que la Ley Procesal concede al juez instructor de un sumario para resolver si existe mérito suficiente para declarar reo a los detenidos, o, cuando no lo hay, para ordenar sean puestos en libertad, permiten concluir que no existe mérito suficiente para encarar reo a los detenidos por los delitos de infracción a la Ley de Seguridad del Estado objeto del requerimiento.

Visto además lo preceptuado en el artículo 272 N° 1° del Código de Procedimiento Penal, dése orden para que sean puestas en libertad, si no estuvieren privadas de ella por otra causa a las siguientes personas: Aurora Villarroel Vera, Patricia Salas González, Sara Duque Duque, María Rodríguez Araya, Ana Luisa Orellana Farfán, Blanca Chamorro Cáceres, Violeta Zúñiga Peralta, Rosa Rubilar Garrido, María Toro Bravo, Norma Matus González, Irene Godoy Godoy, Gabriela Bravo Jara, Gloria Quijada Solar, María Encina Silva, Patricia Paredes Parra, Emelina Boettinger Vera, Humilde Ramírez Caballero, Olivia Sazo Gamboa, Susana Zúñiga Norambuena, Gala Torres Aravena, Paulina Martínez Riquelme, Victoria Díaz Caro, Andrea Herrera Salinas, Ana Molina Palacios, Carmen Vivanco Vega, Aureliana Muñoz Catejo, Herminia Antequera Latrille, Mariana Guzmán Núñez, María Pilquín Lizama, Magdalena Navarrete Faraldo, Mónica García Vivanco, Bélgica Castro Fuentes, María Barahona Muñoz, Catalina Avendaño Leal, Carmen Quezada Fuentes, Ninfa Espinoza Fernández, Mercedes Arévalo Pantoja, Eliana Zamorano Rojas, Lidia Argandoña Tapia, Ana González González, María Garrido Espinoza, Zaira Abarca Leiva, Alicia Blanca Estrella Tapia, Elsa Esquivel Rojo, Marta Pérez Pérez, Gladys González Medina, Hilda Zaldívar Olivares, Rosa Peñailillo Núñez, Zolia Meniconi Lorca, Ubaldina Alfaro Castillo, Mirta Ugas Olivo, Carmen Briceño Martínez, Raquel Ardiles Tahila, Ernestina Alvarado Rivas, Lucía Canteros Torres, Irma Arellano Hurtado, Viviana Díaz Caro, Orfilia Silva Corrales, Elena Cofré Jofré, Elisa Sepúlveda Lillo, Pablo Santelices Tello, Raúl Lorca Tobar y Alberto Araya Flores. Oficiese a la Revda. Madre Superiora del Centro de Orientación Femenina respecto de las mujeres

y al señor Alcaide de la Penitenciaría de Santiago respecto de los hombres.

Apareciendo del proceso antecedentes que permiten dar por establecido que los hechos investigados son constitutivos de falta remítanse compulsas al señor Juez de la Policía Local correspondiente para su conocimiento, y en su oportunidad.

PROVEIDO POR DON GERMAN VALENZUELA ERAZO, MINISTRO SUMARIANTE.

En Santiago a veintitrés de Abril de mil novecientos setenta y nueve notifiqué personalmente en Secretaría la resolución que antecede a don Sergio Castro Olivares y firmó manifestando que se reserva el derecho de apelar.

5. DESESTIMIENTO PRESENTADO EN EL RECURSO DE AMPARO.

SE DESISTE DEL RECURSO.

EXCMA. CORTE SUPREMA

JORGE MOLINA VALDIVIESO, abogado, en el recurso de amparo interpuesto en favor de AURORA VILLARROEL y otros, rol N° 245-79, a U.S. Excma. respetuosamente digo:

Por resolución librada en el día de ayer el señor Ministro Sumariante ha decretado la inmediata libertad de todas las personas que se encontraban detenidas y en favor de las cuales interpuso este recurso.

La resolución del Magistrado sumariante demuestra los dos aspectos que se estimaban esenciales como fundamento de este amparo: Por una parte, que la orden de detención había sido expedida sin existir un mérito suficiente en el proceso que la justificara, de acuerdo al Art. 306 del C.P.P.; por la otra, que ninguno de los hechos investigados podían ser estimados como delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado o como cualquier otra conducta punible susceptible de sanción.

Como puede observarse, la procedencia del recurso de amparo resultaba manifiesta. No obstante, la resolución del magistrado que decreta la libertad de los amparados por no existir méritos en contra de ellos hace impropósito continuarlo, por lo que vengo en desistirme de él para todos los efectos legales que corresponda.

POR TANTO,

A U.S. Excma. ruego se sirva tenerme por desistido de este recurso.

6. SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DICTADO POR EL MINISTRO SUMARIANTE.

Santiago, veinticinco de Junio de mil novecientos setenta y nueve.

Vistos y teniendo presente:

1º Que respecto de los delitos objeto del requerimiento del señor Ministro del Interior, los antecedentes acumulados en la investigación del sumario —apreciados en conciencia con sujeción al precepto del artículo 27 letra j) de la Ley de Seguridad del Estado— permiten tener por demostrados estos hechos:

El día 18 de abril de 1979, alrededor de las 11 horas, —previo concierto— llegaron **sesenta y cinco** personas hasta el lado exterior de la reja del jardín del edificio del Ministerio de Justicia que deslinda con la calle Bandera, a lo largo de toda su extensión entre las calles Compañía y Catedral, enlazaron sus cuerpos a ese cerco con cadenas que unieron con candados, colocándose fotografías de personas sobre sus pechos o solapas; y, además, otras dos personas fueron sorprendidas en ese lugar repartiendo panfletos en los que se hace alusión a esos hechos.

2º Que el orden público, a fin de evitar actos que lo lesionen de una manera inmediata, está protegido como bien jurídico por el Derecho Penal; y definido como "la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protesta" (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia), su trasunto es la tranquilidad o paz pública, vale decir, el sosiego o quietud en la coexistencia de los miembros de la colectividad, sin agitaciones, trastornos o turbaciones con el consiguiente estado anímico de confianza en el normal desenvolvimiento del diario vivir.

3º Que ajena a toda duda como es la obligación substancial e imperativa de todo Poder Ejecutivo —y lo propio del de Chile— de mantener el orden público, no lo es menos que la normatividad jurídica chilena —dictada, primero, hace más de un siglo, a través de nuestro Código Penal, y después, hace más de tres decenios, a través de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, reemplazada posteriormente por la Ley de Defensa del Estado— contempla una escala de calificación de los actos que se ejecutan

contrarios a ese orden público según la gravedad de la alteración y circunstancias en que se perpetra y que van desde la falta hasta el crimen, sancionándolos consecuente y justamente con penas estrictamente relacionadas con la entidad de esos factores. Es por ello que mientras los delitos contemplados en las letras a), b) y f) del artículo 6º de la Ley de Seguridad del Estado son castigados con las penas de presidio, relegación o entañamiento menores en sus grados medio a máximo, a mayores en su grado medio, los de la letra g) lo son desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en sus grados mínimos a medio; las acciones delictuosas configuradas en las letras c), d) y e) del mismo precepto son sancionados desde presidio menor en su grado máximo hasta la pena de muerte; las del Art. 9º, lo son con suspensión del empleo o inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa; y la del Art. 8º, son castigadas con prisión. Por su parte, el Código Penal castiga, en el Art. 269, a los desórdenes públicos que no llegan a constituir desacato con la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les correspondan a quienes los perpetrar por el daño u ofensa causados; y en los Arts. 494 Nº 1º y 2º, 495 Nº 1º y 2º y 496 Nº 7º y 8º con penas de prisión desde su grado mínimo a máximo o multa;

4º Que los desórdenes que castiga el Art. 6º letra a) de la Ley de Seguridad del Estado son aquellos actos que siendo contrarios al orden público, tienen por su propia naturaleza y gravedad, dentro de la escala de actos punibles, el significado de delito, conclusión ésta a la que es forzoso llegar, además de lo expresado en el precedente razonamiento, por los términos del texto legal, que, calificándolos de tal, los equipara a cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública, lo que fuerza a la conclusión de que si las características y naturaleza de los desórdenes están destinados a generar una alteración de ella de menor entidad, ellos deben encuadrarse en alguna de las infracciones que castigan los números 1º y 2º de los artículos 494 y 495 del Código Penal, valoración y encuadramiento de los desórdenes que es de la competencia exclusiva de los jueces del fondo, llamados por la ley a apreciar los hechos, y, para tal efecto, considerar el contexto del actuar y desarrollo político que se produce dentro del territorio nacional, o en una zona de él, o en el exterior con incidencia en el interior, y dentro de un período que permita apreciar las vinculaciones

con otros hechos ejecutados o expresiones proferidas y los fines perseguidos;

5º Que de los antecedentes allegados al proceso —apreciando la prueba en conciencia, como lo ordena el Art. 27 letra j) de la Ley de Seguridad del Estado— aparece que los sucesos comprobados sólo estuvieron destinados a llamar la atención de la población sobre lo que sus autores dicen corresponde al desaparecimiento de personas;

6º Que tanto el tiempo transcurrido —varios años— desde que se habrían producido los expresados desaparecimientos, como la forma de actuar de los inculcados, encadenándose en silencio en la vía pública, en un sector céntrico de la capital del Estado, y a una hora de intenso tránsito de peatones y vehículos, evidencian que tal actuar estuvo destinado a alterar la tranquilidad pública; pero, por la misma forma que se ejecutó, solamente en un nivel de mera excitación de una reunión tumultuosa en ofensa del sosiego de la población y contraviniendo las reglas dictadas por la autoridad para conservar el orden público o evitar que se altere, sólo se incurrió en las infracciones que sancionan los artículos 494 Nº 2º y 495 Nº 1º del Código Penal, tanto más si se observa que las acciones de los autores, que obraron previo concierto, únicamente originaron aglomeración de público y perturbación en el normal desenvolvimiento del tránsito por las vías públicas del sector en que se perpetraron;

7º Que los hechos establecidos no constituyen, tampoco, el delito de desacato a la señorita Ministro de Justicia, pues si bien es cierto que ella se encontraba en su despacho en el tiempo en que aquellos se llevaban a cabo —junto a la reja del jardín del edificio en que tiene su sede— en ellos no se profirió expresión, ni se ejecutó acción por la que se faltare el respeto o se infiriera una ofensa a su persona, o a la dignidad, prestigio o decoro de su autoridad, con motivo o no del desempeño de sus elevadas funciones;

8º Que del sumario no aparecen presunciones de que se hayan verificado hechos constitutivos de los delitos que configuran y sancionan los artículos 4º letras a) y g) y 6º letra b) de la antedicha ley, por lo que cabe, a su respecto, dictar auto de sobreseimiento definitivo.

Visto, además, lo preceptuado en los artículos 27 letra d) de la Ley Nº 12.927 sobre Seguridad del Estado; 147 del Código de Justicia Militar; 83, 84 Nº 3º,

408 Nos. 1° y 2°, 414, 422, 550 y 552 del de Procedimiento Penal; y 45 N° 2° letra e) del Código Orgánico de Tribunales, modificado por el artículo 9° del D.L. 2.416, publicado en el Diario Oficial del 10 de enero de 1979, SE RESUELVE:

1° Que se sobresee definitivamente en la causa:
a) De Conformidad con el artículo 408 N° 1° del Código de Procedimiento Penal, respecto de los delitos previstos en los artículos 4° letras a) y g) y 6° letra b) de la Ley N° 12.927 sobre Seguridad del Estado, y
b) De conformidad con el artículo 408 N° 2° del mismo cuerpo legal respecto del delito contemplado en el artículo 6° letra a) de la citada Ley de Seguridad del Estado, por no ser los hechos constitutivos de esta infracción, sin perjuicio de lo que enseguida se decide sobre ellos.

2° Remítanse estos antecedentes al señor Juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago a fin de que conozca de las infracciones a los artículos 494 N° 2° y 495 N° 1° del Código Penal referidas en el fundamento sexto de este fallo, en relación con el considerando primero.

Consúltese.

Regístrese.

Rol N° 9-79.

DICTADO POR EL MINISTRO DE LA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO SEÑOR GERMAN VALENZUELA ERAZO.

**7. ENCARGATORIA DE REO DE 40 PERSONAS
DETENIDAS EL DIA 1° DE MAYO DE 1979.
RESOLUCION DICTADA POR EL MINISTRO DE
LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO EN
PROCESO INICIADO A REQUERIMIENTO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR POR INFRACCION
A LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO.**

Santiago, ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve.

VISTOS,

Con el mérito probatorio de: partes de fs. 1, 3, 17 a 20, 21 y 39; documentos de fojas 40 a 79, Requerimiento del Ministerio del Interior de fs. 80 a 87; declaraciones de los funcionarios aprehensores: Leonidas Arriagada Fica de fs. 297, Hernando Libra Soto de fs. 298, Carlos Valencia Barría de fs. 299, Manuel Araya Ponce de fs. 300 vta., Pedro Hormazábal Fuente de fs. 301, Miguel Verdejo Tapia de fs. 301 vta., Bernardo Gaete Hernández de fs. 302, Galvarino Cáceres Bunel de fs. 302 vta., Pedro Garrido Navarro fs. 303, Manuel Porrás Medina de fs. 303 vta., Genario Illanes Figueroa de fs. 304, Juan Quintana Sandoval de fs. 305, Vicente Molina Vega de fs. 306, Héctor Sandoval Fuentes de fs. 306 vta., Segundo Matus Aedo de fs. 307, José Carreño Zúñiga de fs. 307 vta., Juan Montalva Palma de fs. 308, Oscar Playa Villavicencio de fs. 309, Gabriel Molina Quinteros de fs. 309 vta., Centeno Merivil Mellimán de fs. 310, Francisco Moreno Carvajal de fs. 310 vta., Lorenzo Meza Lagos de fs. 311, Luis Muñoz Loayza de fs. 312, Luis Mito Terán de fs. 313, René Rival Weibel de fs. 359 vta., Mario Romero Bravo de fs. 360, Samuel Sandoval de fs. 360 vta., Jaime Toledo Merino de fs. 361, Manuel Reyes Andrade de fs. 361 vta., Luis Vargas Torres de fs. 362, Carlos Domínguez Plaza de fs. 362 vta., Dámaso Muñoz Fernández de fs. 363, José Muñoz Rebolledo de fs. 363 vta., Alex Gacitúa Cofré de fs. 364; Esteban Gaete Parra de fs. 364, Carlos López Montenegro de fs. 365, Julio Araneda Aranda de fs. 366, Yolanda Lavanderos Sepúlveda de fs. 366 vta., Magaly Vargas Alanís de fs. 367, Oscar Flores Tapia de fs. 367 vta., Manuel Montanares Carrasco de fs. 368, Ernaldo Matus P. de fs. 368 vta., Humberto Salas Vicencio de fs. 369, Haru Flen Wong de fs. 369 vta., y Heriberto Aravena Pérez de fs. 370, se encuentra acreditado en autos la existencia de los delitos contra el orden público descrito en el artículo 6° letras a) y b) de la Ley de Seguridad del Estado y penados en el artículo 7° del mismo cuerpo legal;

Que los elementos probatorios indicados precedentemente y de las propias declaraciones de las inculpadas o inculpados: Carmen Jimena Rayo Urrutia de fs. 178 vta., Ana María Téllez Neubauer de fs. 162 vta., Mercedes Teresa Jerez Navarro de fs. 179, Báltica Contreras Rodríguez de fs. 172, Susana Ruth Levy Arensburg de fs. 169, María Angélica Soriano Castro de fs. 181 vta., Cecilia del Carmen Araya Pérez de fs. 182 y Raquel Elena Farías Gordon de fs. 182 vta., Patricia Verónica Fuenzalida Clavero de fs. 189 vta., María Soledad Araya Pinto de fs. 186 vta., Carmen Iglesias Pinto de fs. 177, Liliana del Carmen Hermosilla Castillo de fs. 164, Ana Rosa Zúñiga Román de fs. 165, José Eleuterio Donoso González de fs. 250, Nivaldo Jesús Jaque Jaque de fs. 247, Max Giovanne Segel Silva de fs. 253, Carlos Eugenio Trujillo Valenzuela de fs. 262, José Adán Sarmiento González de fs. 108 vta., Samuel Humberto Sarmiento González de fs. 137, Ramón Arturo Riquelme Sandoval de fs. 142, Iván Antonio Farfán Santibáñez de fs. 110 vta., Juan Guillermo Thomas Palavecino de fs. 146, Domingo Alberto Román Montes de Oca de fs. 205 vta., Oscar Darío Sarmiento Contreras de fs. 209 vta., Ignacio Mario Grandon Montoya de fs. 211, Jorge Luis Edwards Fernández de Castro de fs. 212 vta., Luis Pedro Huerta Torchio de fs. 238 vta., Camilo Eduardo Matus Durán de fs. 254, Ricardo Cruz Pecareo de fs. 254 vta., Luis Hernán Rodríguez Baeza de fs. 221, Mario Ernesto Cavieres Navarrete de fs. 222 vta., Gonzalo Antonio de la Masa Escobar de fs. 207 vta., Jorge Francisco Bezar Clavería de fs. 268, Ariel Gonzalo Espinoza Barrios de fs. 210 y 234, Sergio Alberto Vásquez Santana de fs. 208 vta., Luis Enrique Ramírez Molina de fs. 221 vta., Víctor Hugo Zúñiga Rodríguez de fs. 221 y 354, Luis Alberto Zúñiga Rodríguez de fs. 218 y 353, Paolo Valerio Di Girólamo Quesney de fs. 256 y Roberto Giulio del Carmen Di Girólamo Quesney de fs. 206, se encuentra acreditada su participación en calidad de autores de los delitos señalados en el fundamento anterior;

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Penal y artículo 5º del decreto Ley 1009 de 8 de mayo de 1975 y artículo 27 letra j) de la ley 12.927, se encargan reos y se someten a proceso a las siguientes personas: Carmen Jimena Rayo Urrutia, Ana María Téllez Neubauer, Mercedes Teresa Jerez Navarro, Báltica Contreras Rodríguez, Susana Ruth Levy Arensburg, María Angélica Soriano Castro, Cecilia del Carmen Araya Pérez, Raquel Elena Farías Gordon, Patricia Verónica Fuenzalida Clavero, María Soledad Araya Pinto,

Carmen Iglesias Pinto, Liliana del Carmen Hermosilla Castillo, Ana Rosa Zúñiga Román, José Eleuterio Donoso González, Nivaldo Jesús Jaque Jaque, Max Giovanni Segel Silva, Carlos Eugenio Trujillo Valenzuela, José Adán Sarmiento González, Samuel Humberto Sarmiento González, Ramón Arturo Riquelme Sandoval, Iván Antonio Farfán Santibáñez, Juan Guillermo Thomas Palavecino, Domingo Alberto Román Montes de Oca, Oscar Darío Sarmiento Contreras, Ignacio Mario Grandón Montoya, Jorge Luis Edwards Fernández de Castro, Luis Pedro Huerta Torchio, Camilo Eduardo Matus Durán, Ricardo Cruz Pecario, Hernán Luis Rodríguez Baeza, Mario Ernesto Cavieres Navarrete, Gonzalo Antonio de la Masa Escobar, Jorge Francisco Bezard Claverio, Ariel Gonzalo Espinoza Barrios, Sergio Alberto Vásquez Santana, Luis Enrique Ramírez Molina, Víctor Hugo Zúñiga Rodríguez, Luis Alberto Zúñiga Rodríguez, Paolo Valerio Di Girólamo Quesney y Roberto Giulio Di Girólamo Quesney, como autores de los delitos descritos en el fundamento primero de esta resolución;

Notifíqueseles e identifíqueseles oportunamente, agréguese su prontuario a los autos;

Manténgaseles en la Penitenciaría de Santiago y en el Centro de Orientación Femenino, en prisión. Despáchese orden de aprehensión en contra de José Donoso González, José Adán Sarmiento González, Samuel Humberto Sarmiento González y Jorge Luis Edwards Fernández de Castro; y de María Soledad Araya Pinto;

Cítese a Mónica Marta Isabel Gajardo Henríquez, Rosa Hormazábal Martínez, Verónica Hormazábal Martínez, Braulio Hugo Bravo Miranda y a Hernán Ignacio Velasco Contardo, a primera audiencia.

HAY FIRMA.

Dictado por el señor Ministro sumariante don Hernán Cereceda Bravo.

HAY FIRMA.

8. REVOCACION DE LA ENCARGATORIA DE REO.

Santiago, dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y nueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que, para que se torne aplicable la figura delictual provista en la letra a) del artículo 6° de la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, es menester que la actividad imputada a los encausados consiste en la provocación de desórdenes o cualesquier otros actos de violencia que están dirigidos directa y precisamente a alterar la tranquilidad pública;

Que, como se ha manifestado anteriormente en un fallo dictado por esta Corte de Apelaciones, "si bien la expresión tranquilidad pública no ha sido definida por el legislador, es indudable que por ella debe entenderse aquel sereno convivir ajeno a todo atentado, libre de peligros, dentro del respeto y de la normalidad que la ley ampara, en especial cuando tutela las garantías constitucionales de todo ciudadano, y cuando controla la tranquilidad del régimen interior"; Que los elementos probatorios hasta ahora acumulados en la investigación, apreciados en conciencia como lo autoriza la ley, permiten sólo establecer que los procesados fueron detenidos por personal policial —conjuntamente con numerosas otras personas dejadas posteriormente en libertad por falta de mérito— en diversos lugares en las cercanías de sitios donde se proyectaba realizar o se llevaban a efecto en esos momentos manifestaciones no autorizadas y organizadas en celebración del 1° de Mayo, día del trabajo, pero resulta evidente que la referida conducta, sea que hubiese sido motivada por razones políticas, sociales o gremiales, no es por sí solo susceptible de ser encuadrada dentro de las provisiones del tipo penal descrito en la letra a) del citado artículo 6° de la Ley de Seguridad del Estado, y menos aún se adecua a las hipótesis delictivas contenidas en la letra b) del mismo precepto legal por cuanto no aparece en los antecedentes allegados al proceso que la actividad reprochada a los procesados haya tenido por finalidad u objetivo turbar la tranquilidad pública ni tampoco que durante su desarrollo se haya incurrido por parte de ellos en desórdenes u otros actos violentos o bien en los ultrajes, difamaciones, injurias o calumnias contempladas en la segunda de las disposiciones legales citadas. En relación con esta última afirmación es conveniente puntualizar que si bien de fs. 40

a 79 de los autos se hallan agregados diversos panfletos, que de acuerdo a lo manifestado en el parte de fs. 39 eran distribuidos por los reos Ramón Arturo Rique'me Sandoval, José Adán y Samuel Humberto Sarmiento González, lo cierto es que la lectura de su contenido revela un manifiesto e inequívoco afán de crítica política, económica y social que, al emanar de cierto partido político, prohibido y considerado asociación ilícita por la ley, podría dar margen a otro tipo de delito que en todo caso no ha sido comprendido en el requerimiento de fs. 80 ni en su ampliación de fs. 203.

Que en las condiciones descritas, no puede ser mantenido un procesamiento que exige como base legal suficiente que se encuentre justificada la existencia de los delitos que se investigan.

Por estas consideraciones y de conformidad, además con lo que dispone el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal se revoca la resolución apelada de ocho del mes en curso, escrita a fs. 371 en cuanto por ella se somete a proceso a: Cecilia del Carmen Araya Pérez, María Soledad Araya Pinto, Jorge Be-zard Claverie, Báltica Contreras Rodríguez, Ricardo Cruz Pecaric, Mario Cavieres Navarrete, José Donoso González, Gonzalo de la Maza Escobar, Pablo Di Girólamo Quesney, Roberto Di Girólamo Quesney, Jorge Edwards Fernández de Castro, Ariel Espinoza Barrios, Raquel Farías Gordon, Verónica Fuenzalida Clavero, Iván Farfán Santibáñez, Ignacio Grandón Montoya, Liliana Hermosilla Castillo, Luis Huerta Torchio, Carmen Iglesias Pinto, Teresa Jerez Navarro, Nibaldo Jaque Jaque, Susana Ruth Levy Arensburg, Carmen Rayo Urrutia, Domingo Román Montes de Oca, Luis Hernán Rodríguez Baeza, Luis Enrique Ramírez Molina, María Soriano Castro, Max Segal Silva, Oscar Sarmiento Contreras, Ana María Téllez Neuba-uer, Carlos Trujillo Valenzuela, Juan Guillermo Thomas Palavecino, Sergio Vásquez Santana, Ana Zúñiga Román, Víctor Zúñiga Rodríguez, Luis Alberto Zúñiga Rodríguez, Ramón Riquelme, José Adán Sarmien-to y Samuel Sarmiento, y se declara que los antes nombrados no son reos en esta causa y deben ser puestos en inmediata libertad.

En atención a lo resuelto resulta innecesario emitir pronunciamiento sobre los recursos de apelación deducidos a fs. 441, 444 vta., 446 vta., 448 vta., 455, 456 vta., referentes a inculpados a los que por la resolución revocatoria han sido dejados en libertad incondicional y a quienes se había negado su libertad bajo fianza.

Se deja constancia que en los casos de los denunciados José Donoso González, Susana Levy Arensburg, Jorge Edwards y Juan Thomas, que no apelaron de la resolución que los sometió a proceso el Tribunal ha procedido de oficio.

Acordada la revocatoria con el voto en contra del Ministro señor Avello, quien estuvo por confirmar el referido auto de procesamiento, en mérito de sus propios fundamentos.

Se previene que el mismo señor Ministro, en atención a lo resuelto por la mayoría estima innecesario pronunciarse acerca de la libertad provisional de los reos, con todo deja constancia que, a su juicio, dicha libertad debía ser concedida en la forma solicitada. Dictada por los señores Ministros don Enrique Zurita Campos, Marcos Libedinsky Tschorno y Eduardo Avello Arellano.
Devuélvanse.
Nº 10-79.

HAY FIRMA.

NOTA

En diversas oportunidades —durante el último tiempo— se han interpuesto recursos de amparo en favor de personas detenidas de acuerdo con la ley 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado. Las situaciones más conocidas —por su carácter masivo y por la connotación pública de ellas— se relacionan con la detención de 65 personas pertenecientes a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (que se encadenaron a las rejas del edificio del Congreso Nacional) y la posterior detención de más de 300 personas con ocasión de la celebración del 1º de Mayo.

Ambas situaciones tienen una semejanza procesal innegable. Desde luego, en los dos casos, después de haberse rechazado recursos de amparo en favor de los detenidos, la misma Corte de Apelaciones o el Ministro instructor procedieron a dejar sin efecto las correspondientes encargatorias de reo.

La problemática planteada en estos casos consiste en saber si los Tribunales de Justicia, tratándose de procesos de la ley 12.927 deben esperar una tramitación relativamente avanzada del proceso para los efectos de cuestionar la privación de libertad o los procesamientos de los inculcados, o si, a la inversa, deben dichos Tribunales, por la vía del recurso de amparo —o por medio de otros recursos judiciales—, poner término de inmediato a una detención o prisión no ajustada a las exigencias legales.

A este respecto podemos señalar que en los procesos de la Ley de Seguridad Interior del Estado, los Tribunales han actuado muchas veces con un criterio que supondría estimar —directa o indirectamente— que el mero "requerimiento" del Ministerio del Interior, más unos "partes" de Carabineros relativamente vagos, serían antecedentes suficientes para

mantener detenidos a los inculcados durante el período inicial de tramitación del proceso. Pensamos que es éste el criterio que se consagra, implícitamente, en el voto de la mayoría de la 1ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando al rechazar el recurso de amparo en favor de los familiares de los detenidos desaparecidos se argumenta que el proceso "está recién en la etapa inicial de la investigación, por cuyo motivo no es dable en esta oportunidad entrar a juzgar esas acciones desde el punto de vista jurídico, ya que para ello se hace necesario contar con los elementos de juicio necesarios que materialmente no ha sido posible reunir en este breve lapso transcurrido".

El criterio señalado nos parece jurídicamente equivocado y peligroso. Estimamos, por el contrario, que no existe razón alguna para disponer la detención de inculcados por la Ley de Seguridad Interior del Estado cuando los hechos denunciados por el Ministerio del Interior no son constitutivos de delitos sancionados en la ley 12.927 (ej. "amarrarse pacíficamente a las rejas del Congreso Nacional" o "desfilarse por las calles sin realizar actos de violencia") o cuando no se acompañan por dicho Ministerio "antecedentes" que constituyan "fundadas sospechas" de haberse cometido un delito sancionado por dicha ley. Por lo mismo, en el caso de decretarse tales "detenciones", la Corte de Apelaciones debe poner término a la arbitrariedad por medio del Recurso de Amparo.

En este sentido, estimamos que el voto de minoría del Ministro Sr. Rubén Galecio —dictado en el mismo proceso de los familiares de detenidos desaparecidos— resuelve acertadamente la problemática planteada. En dicho voto se establece que debe acogerse un recurso de amparo puesto que

los hechos denunciados —en cadenarse en las rejas del Congreso, sin violencia ni ánimo de alzamiento contra el Gobierno— no revisten caracteres de delito tipificado en la ley 12.927. Con este mismo criterio, tratándose del proceso del Primero de Mayo, la Corte de Apelaciones debió acoger los recursos de amparo interpuestos ya que las manifestaciones de ese día, "sin violencias", no son constitutivas de delitos sancionados por la Ley de Seguridad Interior del Estado, tal como lo estableció "posteriormente" la misma Corte al conocer de la apelación contra los autos de procesamiento.

Conviene puntualizar que el Código de Justicia Militar, al cual se remite expresamente la ley 12.927, señala como requisito esencial para la procedencia de la detención de un inculpa-do la existencia de "motivos bastantes para sospechar que una persona es autor, cómplice o encubridor de un delito" (art. 136). Si se examina esta norma podrá apreciarse que las exigencias que ella establece son similares a las señaladas en el Código de Procedimiento Penal (aplicable a la materia, como lo señala el voto del Ministro Sr. Galecio) el cual exige para la procedencia de la detención que se encuentre "establecido" un "hecho que presente los caracteres de delito" y que existan "fundadas sospechas" sobre la responsabilidad de una persona. Siendo ésta la normatividad aplicable, no resulta acertado sostener que si en un proceso de la ley 12.927, el Ministerio del Interior no acompaña antecedentes para acreditar los presupuestos básicos que legitiman la detención —por "falta de tiempo" u otra razón— deban los inculpa-dos permanecer "privados de libertad" a la espera de que tales requisitos se cumplan. Por el contrario, la conclusión obvia es que, en tal evento, los inculpa-dos deben permanecer "libres" mientras no se acrediten los antecedentes respectivos en el proceso.

Conforme lo dicho, puede afirmarse que en ningún estado de tramitación de los proce-

sos de la ley 12.927 existe lo que pudiera considerarse una inversión del "onus probandi" en desmedro del inculpa-do. Tampoco existe una "liberalidad" —aunque sea transitoria— en favor del Ministerio del Interior para los efectos de la calificación jurídica de los supuestos hechos delictuales. Expresado esto en otros términos, podemos afirmar que en los procesos de la Ley de Seguridad Interior del Estado no existen inculpa-dos de "segunda categoría"; ni tampoco un denunciante "privilegiado", ni, mucho menos, un Poder Judicial "jibarizado" que delega transitoriamente las facultades jurisdiccionales en el Ministro del Interior.

Comprendemos que se puede sostener que en los procesos de la ley 12.927 el Ministerio del Interior es un denunciante "sui generis" cuya misión sería velar por la defensa de un valor jurídico tan importante como es la "seguridad del Estado". Sin embargo, salvo algunas situaciones especiales (ej., efecto del retiro de la denuncia) la verdad es que la referida ley no modifica en forma alguna la estructura general del proceso penal en materia de "privación de libertad" o "autos de procesamiento". Donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir. Por otra parte, no se puede olvidar que normalmente el Ministerio del Interior —no el actual sino cualquiera— es un denunciante que juzga la "seguridad" en forma "subjetiva" no ajena a las pasiones y conveniencias políticas. Por lo demás, la sola circunstancia de que el Ministerio del Interior sea "parte" en estos procesos impone más perentoriamente la necesidad de una separación tajante de Poderes, separación que resulta incompatible con una aceptación a priori —aunque sea transitoriamente— de las estimaciones "subjetivas" del Gobierno en materia de establecimiento y tipificación de los hechos. Agreguemos a lo dicho, que es, justamente, el interés gubernamental comprometido lo que hace que el Recurso de Amparo adquiera en este tipo de procesos toda su

verdadera jerarquía, pues es, precisamente, este recurso el medio más idóneo para contener los posibles abusos de poder.

Conforme lo dicho, aplicada en su verdadera dimensión jurídica la ley 12.927 y el Recurso de Amparo —tal como lo establece el voto de minoría del Ministro Sr. Galecio— es posible evitar la dilatación indebida de las detenciones en los procesos en que se invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado. Este criterio se hace indispensable en un contexto histórico donde —a nuestro juicio— se está haciendo por el Ministerio del Interior una aplicación extensiva de la ley

12.927, normatividad destinada a reprimir conductas bastante graves y que se está utilizando para denuncias de hechos o situaciones de muy escasa importancia que en ningún caso ponen en peligro "objetivamente" la "estabilidad" del Estado. Lo grave de esta situación es que una aplicación inadecuada por el Ministerio del Interior de la Ley de Seguridad del Estado —no contenida por Tribunales que den real eficacia al recurso de amparo— puede transformarse, en los hechos, en un instrumento de amedrentamiento absolutamente ajeno al contenido ético de la ley.

Andrés Aylwin Azócar.

RECURSO DE AMPARO EN FAVOR DE SERGIO ENRIQUE SEPULVEDA COLOMA Y OTROS.

FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES.

Santiago, siete de julio de mil novecientos setenta y ocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1° Que se ha recurrido de amparo en favor de SERGIO ENRIQUE SEPULVEDA COLOMA, HECTOR REYES NUÑEZ y VICTOR HUGO HERESSMAN SEPULVEDA, se afirma que los tres estaban detenidos a disposición de la Segunda Fiscalía Militar y por no ser procesados fueron favorecidos por el Decreto Ley sobre Amnistía N° 2.191-78, siendo sobreseídos definitivamente por el señor Juez Militar; cumplida la notificación del sobreseimiento el 10 de mayo, se dio orden de libertad en su favor; pero antes de cumplirse la orden llegaron efectivos de la Central Nacional de Informaciones y los llevaron a lugar desconocido.

2° Que después de acreditarse mediante las declaraciones juradas de fs. 19, 20 y 21, que el día 17 de mayo los amparados se encontraban en el Recinto de Detenidos Tres Alamos, se justificó también que el 12 de mayo se había dictado en su contra un decreto de expulsión del país.

3° Que, informando el recurso, el Alcalde de la Cárcel Pública dice que el 12 de mayo fueron puestos en libertad los tres detenidos por haber sido sobreseídos definitivamente en virtud de la amnistía; pero como medida de seguridad adoptada en cumplimiento de órdenes superiores se les hizo salir por la puerta lateral.

El Director Nacional de Informaciones, por su parte, informó que la Central había detenido a estas perso-

nas para dar cumplimiento a un decreto de expulsión dictado en su contra y actuó de acuerdo a las facultades otorgadas por los Decretos Leyes N.os 1878 y 1977.

4° Que el mencionado Decreto Exento N° 0062 de 12 de mayo de 1978 tiene presente que los ciudadanos mencionados constituyen un peligro para la seguridad interior del Estado, de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de ese Ministerio, y atendida la facultad que le confiere al Ministerio del Interior el artículo 2° del Decreto Ley N° 81, de 1973, modificado por el Decreto Ley N° 684, de 1974, ordena que Investigaciones de Chile proceda a expulsar del territorio nacional a los ciudadanos chilenos indicados.

5° Que el artículo 2° del Decreto Ley N° 81, de 1973 en la forma modificada por el Decreto Ley N° 684 de 1974 dispone: "En los casos de declaración de Estado de Sitio previsto en el artículo 6° del Decreto Ley 640, de 1974, y cuando así lo requieran los altos intereses de la Seguridad del Estado, el Gobierno podrá disponer la expulsión o abandono del país de determinadas personas, extranjeros o nacionales, por decreto fundado que llevará las firmas de los Ministros del Interior y Defensa Nacional".

Por su parte, el artículo 2° del Decreto Ley N° 1877 de 1977, declaró que las referencias al Estado de Sitio contenidas en los decretos leyes 81 y otros que mencionan debían entenderse aplicables al Estado de Emergencia regulado por la Ley N° 12.927, de 1958.

6° Que, en consecuencia, aun cuando el país no se encuentra sometido al Estado de Sitio, la circunstancia de que sí lo está al Estado de Emergencia, hace que el Gobierno tenga la facultad ya indicada.

7° Que el requisito de fondo consistente en que la expulsión sea requerida por los altos intereses de la Seguridad del Estado, no ha de ser revisado por este Tribunal, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el más alto Tribunal, se trata de una facultad privativa del Gobierno no sometida al control jurisdiccional.

8° Que, sin embargo, se exige también, como requisito de forma del decreto, que él sea fundado, y la existencia de este requisito objetivo de la orden sí

que puede y debe ser revisada por el Tribunal mediante el recurso de amparo, de acuerdo con las facultades que otorga a la Corte el artículo 3º del Acta Constitucional N° 3, de dictar las medidas que se estime conducentes a fin de restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección al afectado cuando ilegalmente sufra cualquiera privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual; y en consecuencia —según reza el artículo 1º N° 6 de esa Acta— el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.

9º Que el aludido decreto exento no está realmente fundado. Si la ley otorga la facultad al Gobierno de expulsar ciudadanos "cuando así lo requieran los intereses de la seguridad del Estado", y además ordena que el decreto sea fundado, lo que tiene que explicarse mediante la motivación es porque la expulsión está requerida por esos altos intereses, ya que afirmarlo simplemente no es una fundamentación. Aunque, como se ha dicho, la Corte no deba inmiscuirse en esas facultades, hay valores que está en el deber de proteger y que atañen a la libertad de las personas. Entre ellos, que se guarden verdaderamente las formalidades legales; en este caso, que se indique en virtud de qué fundamentos el Gobierno ha llegado a la conclusión de que los altos intereses de la Seguridad del Estado requieren que esos ciudadanos se alejen del país, tanto más cuanto que acaban de ser beneficiados por una ley de amnistía.

La ley, al ordenar la fundamentación del decreto, no lo ha hecho con el propósito de que tales razones sean controladas jurisdiccionalmente, sino para que los propios afectados sepan cuáles son los motivos que existen para privarlos de su derecho a la libertad de habitar en su patria, y con el propósito de que todo el cuerpo social se informe de la manera como las autoridades públicas hacen uso de las potestades que la ley les ha conferido para limitar o restringir sus garantías fundamentales.

Por estas consideraciones y visto, además, lo que disponen los artículos 1º y 3º del Acta Constitucional N° 3 y 506 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se ACOGE el recurso de amparo sólo en cuanto se resuelve que deberá dictarse un nuevo decreto

que sea debidamente fundado, o de lo contrario permitir el ingreso al país de los amparados SERGIO ENRIQUE SEPULVEDA COLOMA, HECTOR REYES NUÑEZ y VICTOR HUGO HERESSMAN SEPULVEDA, sin que tenga validez para impedirlo el Decreto Exento número 0062 de 12 de mayo de 1978, del Ministerio del Interior.

Resuelta contra el voto del Ministro señor Letelier, quien estuvo por negar lugar al amparo por estimar que el decreto de expulsión está suficientemente fundado en relación con las facultades que le confieren al Gobierno las disposiciones legales citadas en el fallo de mayoría. Notifíquese al Ministro del Interior en la forma legal correspondiente.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Santiago, diecisiete de julio de mil novecientos setenta y ocho.

Vistos:

Reproduciendo los fundamentos 1º, 3º, 4º, 5º y 6º del fallo apelado; y teniendo además, en consideración:

1º) Que, como aparece de los autos, el presente recurso de amparo objeta sólo la legalidad de la detención sufrida por las personas en cuyo favor se recurre, inmediatamente de ser dejadas en libertad por orden de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, como consecuencia de la reciente ley de amnistía que les favoreció al igual que a otros numerosos inculcados de diversos delitos;

2º) Que la detención reclamada, según los antecedentes producidos, tuvo por objeto ejecutar el Decreto Supremo Exento N° 0062 del mismo día de la aprehensión, que dispuso expulsar del territorio nacional a dichas personas; y como quiera que esta expulsión se verificó antes del fallo de este amparo, en que, como se ha dicho, solamente se impugna el arresto, tal recurso no puede prosperar por tener ahora los afectados una situación jurídicamente distinta, la de expulsados del país y no de individuos privados de libertad;

3º) Que si bien se pretendió por los recurrentes impedir que se llevara a efecto la medida indicada mientras estuviese pendiente del recurso de autos, es lo cierto que en ningún momento aparece formalmente objetada la legalidad del referido decreto supremo, lo que haría innecesario el examen del asunto, que sin embargo sirve de fundamento a la resolución apelada;

4º) Que no obstante lo anterior, cabe consignar que por tratarse de una facultad exclusiva del Gobierno,

no queda sometida al control jurisdiccional la apreciación del mérito de los antecedentes que han debido considerarse para adoptar la medida de expulsión; y en estas condiciones es del caso destacar que el decreto supremo que la dispuso cumple con las formalidades que exige la ley, puesto que fue dictado encontrándose el país en Estado de Emergencia, lleva las firmas de los ministros que corresponde y señala el fundamento o motivo en que se basa al expresar que los ciudadanos chilenos que se expulsan "constituyen un peligro para la seguridad interior del Estado, de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de este Ministerio"; sin que se advierta entonces la necesidad jurídica de consignar o manifestar en detalle esos antecedentes y elementos.

Por estos fundamentos y visto, además, lo prescrito en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y en el Decreto Ley N° 81 de 1973, con rango constitucional, se revoca la sentencia apelada de siete de julio en curso, escrita a fs. 33, y se declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto en lo principal del escrito de fs. 1.

Se previene que el Abogado Integrante señor Cousiño Mac Iver concurre al fallo en mérito de los siguientes fundamentos:

1°) Que el recurso de amparo tiene por objeto obtener la inmediata libertad de las personas que ilegalmente se hallaren arrestadas, detenidas o presas, o la entrega de las mismas a disposición del juez competente, decretando la reparación de los defectos legales de las órdenes que no guarden las formalidades prescritas por las leyes; como, asimismo, restablecer el imperio del Derecho y la debida protección del afectado en los casos de personas que sufran cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en sus derechos a la libertad personal y seguridad individual, según dispone el artículo 3° del Acta Constitucional N° 3.

2°) Que del propio tenor literal de las disposiciones que rigen el recurso de amparo, a que se ha hecho referencia, así como las de los artículos 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se desprende que este recurso extraordinario tan sólo es procedente con respecto a personas que se encuentran dentro del territorio nacional.

3°) Que consta de los autos que las personas en cuyo favor se recurre se encuentran fuera del país por haber sido expulsados, según Decreto N° 0062 de 12

de mayo último del Ministerio del Interior, por lo cual procede negar lugar al recurso interpuesto.

Acordada en contra del voto del Ministro señor Retamal, quien estuvo por confirmar la resolución apelada, teniendo para ello presente sus propios fundamentos y las razones siguientes:

El recurso de amparo se extiende también al decreto de expulsión del país de los amparados, como claramente se colige de los escritos corrientes a fs. 23 y 25.

Sobre esa materia, además, versaron las defensas orales de los abogados de las partes.

Por tal motivo y no siendo sacramental la forma de deducir el recurso de amparo, no puede haber duda alguna que el de estos autos comprende la expulsión del país de los amparados.

Procedía, pues, como lo hizo la resolución apelada, estudiar el aspecto formal del decreto de expulsión. Regístrese y archívese.
Rol N° 245-78.

Pronunciado por los ministros señores Rafael Retamal L.; Octavio Ramírez M.; Manuel Rivas del C.; Osvaldo Erbeta V. y abogado integrante señor Luis Cousiño Mac-Iver.

NOTA

I. Antecedentes de hecho

Dichas personas se encontraban inculpadas en dos procesos militares en tiempo de guerra seguidos ante la Segunda Fiscalía del Juzgado Militar de Santiago, por supuesta infracción a la Ley de Seguridad del Estado, por lo que permanecían detenidas en la Penitenciaría de la capital.

En virtud del Decreto Ley N° 2.191, de 1978, que concedió amnistía, los inculpados fueron sobreseídos definitivamente con fecha 3 de mayo de 1978. El día viernes 12 de este mismo mes quedaron notificados de los sobreseimientos de la Segunda Fiscalía, que dio orden de libertad inmediata. Así ocurría, también, con muchos otros inculpados de diversos procesos militares en tiempo de guerra.

Sin embargo, a dichas personas no se les concedió la libertad y, por el contrario, fueron tomados por funcionarios de la C. N. I. en la misma Penitenciaría de Santiago y conducidos al Campamento Tres Alamos.

El día lunes 15 de mayo abandonó el país el amparado Sergio Sepúlveda Coloma, con destino a Londres, bajo el patrocinio del C. I. M. E. En el mismo aeropuerto de Pudahuel suscribió una declaración jurada ante Notario, en que relata los hechos ocurridos y manifiesta que debió abandonar el país por la presión ejercida con la detención, a pesar de que era su intención permanecer en nuestro territorio.

El día jueves 18 de mayo los detenidos Reyes y Heressman fueron conducidos al Depto. de Policía Internacional del Servicio de Investigaciones, en razón de que este organismo haría efectiva la expulsión del país. Hasta este momento habían permanecido absolutamente incomunicados. Ahora se les permitió conversar sólo

con algunos miembros de su familia.

Entretanto, en el amparo presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 13 de mayo, se pedía por tercera vez que se suspendiera la posible medida de expulsión, sin que pudiera conocer el texto del decreto respectivo, por no haber sido notificado regularmente. Sólo el día 19 de mayo se conoció una fotocopia del decreto, que fue proporcionado por el C. I. M. E., y se obtuvo la designación de la Sala de Turno de la Corte para conocer la suspensión de la medida expulsiva. Esta Sala de Turno se constituyó el día sábado 20 de mayo, pero en la misma mañana los amparados Reyes y Heressman fueron expulsados del país.

II. Antecedentes procesales

Ya se dijo, el 13 de mayo de 1978 fue presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de amparo en favor de Sepúlveda, Reyes y Heressman. El 15 de mayo, el Presidente de la Corte estimó que ésta era incompetente, creyendo que se trataba de un incumplimiento del Tribunal Militar.

El mismo día se solicitó reposición, la que fue acogida al día siguiente, en que la Sala en que fue agregado el recurso, solicitó informes al Ministerio del Interior, a la C. N. I. y al Alcaide de la Penitenciaría de Santiago.

En el mismo recurso de amparo se había solicitado la suspensión de cualquiera medida expulsiva, por cuanto éste era una eventualidad, aunque no se conociera el respectivo decreto de expulsión. El miércoles 17 de mayo se insistió en la urgencia de suspender dicha medida, pero su resolución se dejó otra vez para la Sala que conociera del recurso. El viernes 19 de mayo se insistió

nuevamente en la petición y sólo ahora se consiguió que la viera la Sala de Turno del día siguiente. Sin embargo, este día 20 de mayo, cuando se alegaba por la solicitud de suspender la expulsión, ella se produjo. En este alegato se impugnó el decreto de expulsión que recién se conocía por una fotocopia conseguida oficiosamente.

Después de recibirse los informes solicitados por la Corte, sólo con fecha 7 de julio se conoció el recurso por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo acogió sobre la base de no cumplir el decreto de expulsión con los requisitos del artículo 2º del Decreto Ley N° 81, de 1973, modificado por el Decreto Ley N° 684, de 1974.

III. Infracciones acreditadas

Del examen de los antecedentes se deducen cuatro infracciones cometidas por las autoridades administrativas:

a) No se cumplió la orden de libertad emanada de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago;

b) La C. N. I. detuvo ilegalmente a los amparados, sin orden competente, trasladándolos al Campamento Tres Alamos;

c) Se mantuvo a los detenidos en incomunicación, sin orden judicial; y

d) Se expulsó a los amparados en virtud de un decreto (N° 0062, de 12 de mayo de 1978), que no se notificó regularmente y que no se encuentra fundado como lo exige la ley.

IV. Fallo de la Corte de Apelaciones

La sentencia de 7 de julio acoge el recurso de amparo, sobre la base de que el aludido decreto de expulsión no se encuentra fundado como lo requiere el artículo 2º del Decreto Ley N° 81 de 1973. Para

este efecto deja sentado lo siguiente:

a) Que la C. N. I. reconoce la detención, pero la justifica con el hecho de cumplir un decreto de expulsión, aunque ésta es una orden dada al Servicio de Investigaciones y no al C. N. I.;

b) Que en los casos de declaración de Estado de Emergencia y cuando así lo requieran los altos intereses de la Seguridad del Estado el Gobierno puede disponer la expulsión o abandono del país de determinadas personas, extranjeras o nacionales, por decreto fundado que llevaría las firmas de los Ministros del Interior y Defensa Nacional, según lo prescribe el artículo 2º del Decreto Ley N° 1.877, de 1977;

c) Que el tribunal no puede revisar el requisito de fondo consistente en que la expulsión sea requerida por los altos intereses de la Seguridad del Estado, por tratarse de una facultad privativa del Gobierno, no sometida al control jurisdiccional;

d) Que, sin embargo, el tribunal puede y debe revisar el requisito de forma consistente en que el decreto sea fundado, de acuerdo a las facultades que otorga a la Corte el artículo 3º del Acta Constitucional N° 3;

e) Que el aludido decreto de expulsión N° 0062, de 12 de mayo de 1978, no está realmente fundado, ya que afirmar solamente la premisa legal de que así lo requieran los altos intereses de la Seguridad del Estado, no es una fundamentación.

Notificado este fallo al Ministerio del Interior, se hizo parte en el recurso e interpuso apelación que conocería la Corte Suprema.

V. Fallo de la Corte Suprema

Por sentencia de 17 de julio, la mayoría de la Primera Sala de la Corte Suprema revoca el

fallo apelado y declara sin lugar el recurso de amparo, sobre la base de las siguientes consideraciones:

a) Que el amparo sólo objeta la detención de tres personas, la que tuvo por finalidad ejecutar un decreto de expulsión;

b) Que, como la expulsión se verificó antes del fallo, no puede prosperar el recurso por tener los afectados una situación jurídicamente distinta, es decir, la de expulsados y no de detenidos;

c) Que no aparece formalmente objetada la legalidad del decreto de expulsión;

d) Que, no obstante, la expulsión es una facultad privativa del Gobierno, no sometida al control jurisdiccional;

e) Que, en todo caso, este decreto cumple las formalidades de la ley, puesto que se dictó encontrándose el país en estado de emergencia, se suscribió por los ministros correspondientes y señaló el fundamento o motivo de constituir los expulsados un peligro para la seguridad interior del Estado de acuerdo a los antecedentes que obran en poder del Ministerio del Interior, sin que se advierta la necesidad jurídica de consignar en detalle esos antecedentes.

El abogado Integrante de la Sala concurre al fallo sobre la base de que el recurso de amparo sólo procede respecto de personas que se encuentren dentro del territorio nacional.

El fallo se acuerda contra el voto del Ministro señor Rafael Retamal, quien estuvo por confirmar la resolución apelada, por los fundamentos de ella y por las siguientes razones: porque el recurso de amparo se extiende también al decreto de expulsión, según se colige de los escritos de la defensa; porque sobre esta materia versaron los alegatos de las partes; y porque no es sacramental la forma de deducir el amparo.

VI. Comentarlos generales

Es posible formular las siguientes observaciones a la tramitación del recurso y a los fallos anteriores:

a) Ninguno de los fallos considera y resuelve el incumplimiento de la orden de libertad emanada del Juzgado Militar de Santiago;

b) Ninguna de las sentencias considera y resuelve la detención arbitraria de los afectados por parte de la C. N. I., que no tenía orden competente;

c) Tampoco se considera y resuelve la incomunicación de los afectados;

d) La tramitación del recurso se demoró más de dos meses, en circunstancia que el Código de Procedimiento Penal exige que se resuelva en el término de 24 horas, o 6 días, cuando hubiere necesidad de practicar alguna investigación o esclarecimiento para establecer los antecedentes del recurso, fuera del lugar en que funciona el tribunal llamado a resolverlo;

e) En la sustanciación no se ordenaron oportunamente las diligencias probatorias solicitadas, en especial el interrogatorio de los afectados por parte de uno de los ministros;

f) Tampoco se resolvió oportunamente la petición formulada por tres veces en orden a suspender la medida expulsiva;

g) Ha existido, entonces, una gran pasividad de parte de los Tribunales de Justicia;

h) Las dos sentencias insisten en la improcedencia de ponderar los fundamentos que tiene el Gobierno para expulsar a una persona, contrariando con ello el deber constitucional de establecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección al afectado, según lo dispone el artículo 3º del Acta Constitucional Nº 3, cuyo artículo 11 prescribe que nadie puede invocar precepto

constitucional o legal alguno para vulnerar los derechos y libertades que dicha Acta reconoce, ni para atentar contra la integridad o el funcionamiento del Estado de Derecho o del régimen constituido.

i) El fallo de la Corte Suprema recoge la tesis del Ministerio del Interior en orden a que basta con señalar que hay peligro para la Seguridad del Estado, de acuerdo a antecedentes que obran en poder del Gobierno, para entender que el decreto de expulsión es fundado. De esta forma se olvida que el artículo 2° del Decreto Ley N° 81 de 1973 exige que el decreto sea fundado después de establecer dos premisas sustanciales: que exista esta-

do de emergencia y que lo requieran los altos intereses de la Seguridad del Estado. De consiguiente, si sólo se reitera esta última premisa, sin especificar los antecedentes o motivos que se tienen para llegar a esa conclusión, no se puede afirmar que el decreto esté fundado.

j) La posición de los Tribunales de Justicia puede conducir a absurdos inaceptables. En cuanto se niegan a ponderar los fundamentos de la expulsión, puede el Gobierno utilizar antecedentes falsos, irrelevantes o inconexos. En cuanto se niegan a exigir en detalle esos fundamentos, puede el Gobierno utilizar antecedentes que no existen.

Informaciones

**PETICION DE MINISTRO EN VISITA PARA INVESTIGAR
SITUACION DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
NOVIEMBRE DE 1978**

Fundados en los hechos que exponen y en las nuevas circunstancias que se refieren, solicitan la designación de ministros en visita que investiguen la situación actual de los detenidos desaparecidos que se indican. **EN EL PRIMER OTROSI**, listas de los detenidos desaparecidos en favor de los cuales se pide la investigación; **EN EL SEGUNDO OTROSI**, antecedentes entregados al Ministro del Interior por distintos señores obispos de la Iglesia Católica.

Excma. Corte Suprema:

En múltiples oportunidades se ha representado a V. S. Excma. la situación de las personas desaparecidas después de su detención irregular por agentes de organismos de seguridad.

Tanto los familiares de los desaparecidos, individual y colectivamente, como Pastores de diversas Iglesias Cristianas, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile y la Vicaría de la Solidaridad han reclamado una y otra vez, a los Tribunales de Justicia y a las autoridades de Gobierno, el esclarecimiento de estas dolorosas situaciones, sin resultado positivo alguno; tal vez si de esos requerimientos hubiere resultado una acción severa y decidida en procura de la verdad el número de desaparecidos no se hubiera incrementado como tristemente ha ocurrido.

Hoy los Vicarios Episcopales del Cardenal Arzobispo de Santiago que suscribimos esta presentación elevamos una vez más nuestra voz ante V. S. Excma. en busca de un camino que permita esclarecer definitivamente la suerte corrida con estas personas; lo hacemos por amor a ellos, a sus familiares cuya angus-

tia e incertidumbre nos conmueve; por amor a la Paz. Lo hacemos también en el convencimiento de que recurrimos ante el órgano competente, por mandato constitucional, cuya primera y más importante misión es la de resguardar debidamente los derechos fundamentales de todos los habitantes de esta tierra; lo hacemos finalmente confiados en que V. S. Excma. apreciará debidamente las nuevas circunstancias producidas en torno al asunto, que justifican y hacen imperativa la necesidad de acoger favorablemente la petición que formulamos.

Estamos convencidos de que en la historia de nuestro país no se registra un hecho de la gravedad del que motiva esta petición. Nunca antes se había enfrentado la comunidad nacional a un suceso tan sobrecogedor como alarmante: la sistemática detención y posterior desaparecimiento de centenares de disidentes políticos. Estamos frente a una forma particularmente grave de violación al derecho a la vida y a la integridad física de las personas y que, por producirse en nuestra patria, que siempre profesó un respeto ejemplar por esos valores, ha conmovido a la comunidad internacional, obligando al Gobierno de Chile a dar explicaciones que no siempre resultan satisfactorias ni convincentes.

Más bien, observamos con tristeza que la tendencia de las autoridades es la de ver en las denuncias internacionales una forma de "agresión" a la patria, implicándonos a todos en una polémica en la que importa más el problema de la "imagen" del Gobierno que la suerte de los desaparecidos. Los ataques y las defensas frente a este tema relegan lo esencial a un segundo plano: la vida de quienes se encuentran desaparecidos y el dolor de sus parientes que incesantemente claman por alguna información que los conduzca a su encuentro. Más que un problema de "imagen", se encuentra en juego la identidad misma de nuestra patria, su ser más íntimo. Si no encaramos con decisión el desafío que significa para nuestra comunidad nacional ubicar a los desaparecidos o llegar a una respuesta definitiva sobre ellos, estaremos renunciando a la posibilidad de construir una convivencia nacional basada en la justicia y en el respeto a los derechos esenciales de la persona humana. Habremos dejado pendiente una cuestión que siempre emergerá como fuente de odios o venganzas, obstruyendo cualquier esfuerzo para encontrar un camino de paz en el futuro.

Por eso ha sido tan directa la opinión de los obispos chilenos al referirse al drama de los desaparecidos:

"pedimos respetuosamente al señor Presidente de la República que disponga que el Gobierno preste a los Tribunales de Justicia la cooperación necesaria para que se esclarezca de una vez y para siempre el destino de cada uno de los presuntos desaparecidos desde el 11 de septiembre hasta la fecha, sin lo cual no habrá tranquilidad para sus familias, ni verdadera paz en el país, ni quedará limpia la imagen de Chile en el exterior. Si se han cometido abusos o arbitrariedades —a veces inevitables— más vale reconocerlo o arbitrar medidas para que no se repitan. Y si cada uno de los casos denunciados tiene una explicación valedera, el Gobierno, al darla, quedará prestigiado ante la opinión chilena y extranjera" ("Nuestra Convivencia Nacional" Conferencia Episcopal Chilena, 25 de marzo de 1977).

No habrá verdadera paz en Chile si la situación de aquellos compatriotas que desaparecieron después de su arresto irregular por los servicios de seguridad no es explicada a sus familiares y a la opinión pública nacional e internacional.

No habrá verdadera paz en Chile si los familiares de los desaparecidos son objeto de una nueva forma de tortura psicológica al negárseles información veraz sobre sus seres queridos o al permitirse que sus peticiones se acumulen sin respuestas de la autoridad.

Con profundo conocimiento del alma nacional, los obispos chilenos así lo han comprendido. Y es tan grave y urgente su desvelo por este drama que aflige al país, que no han vacilado en pedir que "de una vez y para siempre" se esclarezca la verdad respecto a cada uno de los desaparecidos. Ellos saben, al igual que nosotros, que es imposible fundar nuestra convivencia en paz y justicia si no enfrentamos con valor, a cualquier precio, la verdad respecto a lo ocurrido con estos hermanos chilenos.

Es necesario que se comprenda que en este caso el tiempo, lejos de curar las heridas o traer resignación, ahonda aún más el dolor de quienes esperan todos los días que en la puerta del hogar se presente su ser querido: padre, esposo, hijo o hermano. Por eso, quienes de buena fe o interesadamente esperan que el solo transcurso del tiempo vaya relegando al olvido este nefasto episodio de la vida nacional, se equivocan. Sólo la verdad y el valor para encararla permitirá a la comunidad nacional juzgar los hechos con libertad, ejercer la justicia, corregir errores y continuar constructivamente su marcha.

Sin embargo, con profundo pesar hemos constatado que, lejos de encararse la verdad "de una vez y para siempre", cada día resulta más difícil encontrar una explicación autorizada que termine la atribulada y angustiada espera de los familiares de los detenidos que han desaparecido. De esta forma, a la gravísima violación al derecho a la vida y a la integridad física que implican los desaparecimientos, se agrega un nuevo atropello esta vez en la persona de sus familiares, los que son hoy día víctimas de la inseguridad y la incertidumbre, derivada de la sistemática negativa de la autoridad de informar o contestar sus peticiones.

Hace pocos meses el fallecido Pontífice Paulo VI denunciaba con severas expresiones esta situación a la que se ven expuestos los familiares de las personas detenidas que en vano buscan noticias de sus seres queridos: "¿Cómo no sentirse turbados cuando se sabe que muchas familias angustiadas hacen en vano súplicas por sus seres queridos y que incluso sus peticiones de información se acumulan sin recibir respuestas?" (Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 14 de enero de 1978.)

"La Iglesia y los creyentes —agregaba el Santo Padre— no pueden permanecer insensibles e inertes ante situaciones como ésta. Ella se siente comprometida en la enseñanza del respeto a la vida en todas sus etapas. Y no podría ser de otro modo, porque la promoción de los Derechos Humanos es requerida por el Evangelio y es central en su ministerio".

La voz autorizada del Santo Padre permitirá comprender a V. E. nuestra insistencia para que la Excma. Corte Suprema adopte una posición definitivamente más activa en la investigación de los hechos que se relacionan con el desaparecimiento de personas. Sentimos vivamente el llamado del Santo Padre, su insistencia para que situaciones como éstas despierten nuestra conciencia cristiana... "que no puede quedar sin reaccionar y procurar, en la medida de lo posible, promover la adopción de remedios adecuados y eficaces" (ibídem). Ante un problema de la naturaleza del que nos preocupa, la Iglesia no puede dejar de recurrir una vez más al más Alto Tribunal del país y ello es no sólo oportuno, sino necesario, ya que no hay "remedio" más "adecuado" y "eficaz" que el ejercicio de los plenos poderes jurisdiccionales que este Alto Tribunal tiene para la averiguación de semejantes hechos que alarman a la opinión pública.

Múltiples son los factores que en el pasado han impedido el establecimiento de la verdad, pero ellos no pueden hoy en día inhibir la acción de la justicia, sino por el contrario deben incentivarla a ejercer con mayor fuerza y celo sus facultades. Ha sido una dificultad y un obstáculo para el establecimiento de la verdad la marginación de la Dirección de Inteligencia Nacional y demás organismos de Seguridad del sistema jurídico, regidos por normas de carácter secreto y exentos de hecho de responsabilidad por sus actos, ha constituido una dificultad y un obstáculo la falta de decisión de las autoridades de Gobierno para enfrentar y colaborar en una investigación severa e imparcial; ha constituido también un factor negativo para el establecimiento de la verdad la debilidad e insuficiencia de la acción de los Tribunales en las investigaciones que legalmente se han radicado en ellos. Pero nunca será tarde para reclamar la acción de la justicia para el establecimiento de la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, más aún en el momento actual en que se avisan síntomas que abren una perspectiva esperanzadora.

Hemos dicho que nos enfrentamos a la existencia de circunstancias nuevas que justifican y hacen imperativa la acogida favorable de esta petición; la evolución que se advierte, desde el 20 de agosto de 1976 fecha en que la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago recurrió ante V. S. Excm. solicitando la designación de un Ministro en Visita para que investigase el desaparecimiento de 411 personas, muestra los siguientes hechos:

- 1° Que existe un consenso de que la existencia de personas detenidas desaparecidas es un hecho real y efectivo.
- 2° Que los desaparecimientos son resultado de la acción de los organismos de seguridad del Gobierno.
- 3° Que el Gobierno ha manifestado su disposición a explorar "cualquier camino serio que respecto de algún caso particular puede presentarse", pero que, a pesar de ello y de las numerosas otras ofertas solemnes formuladas, no ha esclarecido el problema.
- 4° Que la autoridad admite una envergadura de esta situación que se ajusta a los términos en que ha sido presentado por los familiares y la Iglesia.

5° Que la opinión pública admite en forma abierta la existencia de esta situación anómala y exige en términos perentorios su esclarecimiento.

6° Que se admite que las respuestas que antes se dieron para explicar estas situaciones y desestimar las denuncias fueron erróneas.

7° Que las pruebas acumuladas sobre las detenciones conforman una base sólida para completar una investigación criminal que esclarezca la suerte de estas personas.

8° Que el conjunto de situaciones de personas detenidas desaparecidas presenta rasgos que le dan una unidad característica que exige su investigación conjunta.

No es posible desconocer, V. E., que este nuevo cuadro da una fuerza moral incuestionable al apoyo que la Iglesia ha brindado a los familiares de los detenidos desaparecidos, particularmente, en sus gestiones ante la justicia chilena. Asimismo, todo ello es el resultado de la acción diaria e incesante, y muchas veces incomprendida, de aquellos familiares, cuya principal arma de lucha es la fuerza de la verdad. Cada uno de los puntos mencionados confirma la presunción emanada de los antecedentes que la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago presentara a esta Excmá. Corte en la fecha antes citada.

1° Existe consenso de que la existencia de personas que han desaparecido después de su detención es un fenómeno real y efectivo.

La realidad y efectividad del problema de los detenidos desaparecidos es un hecho hoy en día reconocido, incluso por el propio Gobierno. La trascendencia alcanzada por estas situaciones y su envergadura llevaron al Ministro del Interior a dirigirse al país por cadena nacional de radio y televisión, a objeto de plantear la posición del Gobierno sobre el tema. Reconoció explícitamente el Ministro del Interior la existencia del problema afirmando que el Gobierno no ha "permanecido impasible o inactivo frente al tema, el cual se ha venido planteando reiteradamente en los últimos años, y está lejos, por ello, de constituir una sorpresa o novedad para la opinión pública". Admitió, también, el ministro una cuestión trascendental, cual es la naturaleza política de los desaparecimientos, al afirmar que "la gran ma-

yoría de ellos corresponden a activistas comunistas, socialistas y miristas", esto es, precisamente la filiación política que los familiares invocan de sus parientes desaparecidos.

El aspecto dramático de la situación lo proclama directamente al declarar que "estamos conscientes de que nada es capaz de suplir la ausencia del ser querido, y comprendemos que nada podría mitigar el dolor de aquellos que verdaderamente sienten esta pérdida", apelando, para su superación, a "la acción constructiva de todos los chilenos... y muy especialmente aquellos que ejercen autoridad en cualquier campo de la vida nacional".

El propio General Augusto Pinochet, en su Mensaje del 11 de septiembre pasado, por primera vez reconoció solemnemente la existencia de este problema y admitió que existe "un número de posibles afectados reales".

Anteriormente, en noviembre del año pasado, el Embajador de Chile ante Naciones Unidas, señor Sergio Diez, afirmó ante ese organismo que "el caso más grave y serio a que Chile se ve avocado es el caso de los desaparecidos".

Difícilmente pudiera encontrarse un mayor reconocimiento oficial ante una situación como ésta, y, por ende, he ahí una base de apoyo para esta solicitud ante V. S. Excma.

2° Los desaparecimientos son resultado de la acción de los organismos de seguridad del Gobierno.

Las innumerables pruebas que se han exhibido respecto de la responsabilidad que les cabe a los organismos de seguridad en los arrestos que se han prolongado en el desaparecimiento de personas, se suma ahora el reconocimiento que las propias autoridades hacen de ello. No otra cosa es posible concluir del propio texto del discurso del Ministro del Interior a que hemos aludido, cuando señala que ya se han castigado algunos "excesos"; igualmente se desprende de las palabras del General Pinochet, cuando al referirse a la disuelta DINA, en su Mensaje del 11 de septiembre de 1977, la definió como un "organismo creado para enfrentar la fase más dura de la acción subversiva", admitiendo que "hubo algunos errores difíciles de evitar en una labor tan ardua".

Tan claro es que la acción de los servicios de seguridad importó una compleja acción delictiva, que la propia autoridad de Gobierno declaró que la amnistía decretada en el pasado mes de abril alcanza a "los funcionarios de los servicios de seguridad que pudieron excederse en su combate" (discurso del Ministro del Interior aludido).

El fenómeno del desaparecimiento de personas con posterioridad a su detención no es consecuencia de hechos aislados ni de casualidades, sino el resultado de una acción concertada, en la que, principalmente, un organismo como la DINA llegó a contar con omnímodos poderes frente a las personas y frente a los propios Tribunales de Justicia.

3° El Gobierno ha manifestado su disposición a explorar cualquier camino serio que respecto de algún caso particular pueda presentársele, pero a pesar de ello y de las numerosas otras promesas solemnes formuladas, no ha esclarecido las situaciones de los detenidos desaparecidos.

El Gobierno ha comprometido su palabra, en forma reiterada, en la búsqueda de una solución al problema. Los últimos pronunciamientos en tal sentido, no materializados aún, no pueden ser desechados, y corresponde a los Tribunales de Justicia asumir tal manifestada voluntad para despejar definitivamente las dudas en torno a la real disposición del Gobierno y brindarle la oportunidad de demostrarla ante el país y el mundo entero.

El Ministro del Interior, en el mencionado discurso, se comprometió a que "el Gobierno explorará cualquier camino serio que, respecto de algún caso particular, pueda presentársele". El propio General Augusto Pinochet, en su Mensaje del 11 de septiembre de 1978, prometió solemnemente al país que su Gobierno "explorará cualquier camino serio que pueda traducirse en un resultado eficaz respecto de algún caso particular".

Sabemos que no es ésta la primera vez que el Gobierno formula semejantes promesas, las que permanecen incumplidas hasta el día de hoy. En otras ocasiones lo prometió frente al caso de los denominados "119", frente al Director de Cruz Roja Internacional, frente a altas autoridades de Naciones Unidas. Pero, es precisamente a los Tribunales de Justicia a quienes corresponde, en el ejercicio pleno de su potestad jurisdiccional, requerir y exigir del Gobierno la concreción de la voluntad manifestada.

Por otra parte, el propio Ministro del Interior, en su discurso citado, ha reconocido la preeminencia de la investigación judicial al dejar constancia de que "cualquiera sea la verdad concreta en cada situación, ella puede ser investigada por los Tribunales de Justicia".

No es posible desconocer los inconvenientes que significan para el propio Gobierno señalar responsabilidades de entre quienes —perteneciendo a organismos de seguridad— estuvieron por ello tan ligados a las situaciones de desaparecimiento y tienen con aquél vinculación orgánica. Aún más, la circunstancia de haber amnistiado a los funcionarios de los organismos de seguridad que cometieron actos delictuosos, lo inhabilita para ejercer la facultad del Juez, sin perjuicio de investigar o informar verazmente lo sucedido.

4° La autoridad admite una envergadura de estas situaciones que se ajusta a los términos en que ha sido presentado por los familiares y la Iglesia.

Hoy en día la autoridad sugiere que la entidad del problema es precisamente la que los familiares y la Iglesia han aducido siempre en sus presentaciones a los Tribunales de Justicia. De aquellas presentaciones patrocinadas por personeros de la Iglesia nos hacemos responsables en cuanto a su seriedad; hemos llamado la atención a este alto Tribunal sobre 413 casos en la última presentación del 20 de agosto de 1976, en que se pidió la designación de un Ministro en Visita, cifra que luego ha aumentado hasta alcanzar 651 personas. La absoluta seriedad de nuestras presentaciones se prueba en que ahora el Gobierno públicamente reconoce que en torno a una cifra similar es que se presenta el problema. Es así como el Ministro del Interior, mientras rechaza cifras dadas en el exterior que hablan de 2.500 personas desaparecidas, sugiere que el verdadero problema se centra en cifras que llegan "a la cuarta parte", ya que sobre un número tal es que se ha "logrado dar una respuesta satisfactoria". Por su parte un miembro de la Junta de Gobierno ha declarado que "ahora nos preocupamos porque desaparecieron tal vez 600 personas" (declaraciones del General Fernando Matthei, 28 de septiembre de 1978).

5° La opinión pública admite en forma abierta la existencia de estas situaciones y exige en términos perentorios su esclarecimiento.

Mientras en los primeros años posteriores al pronunciamiento militar los órganos de prensa reaccionaban

ante este tema calificándolo de invención y de artificio político destinado a denostar al Gobierno, hoy se admite su dramática realidad menesterosa de esclarecimiento.

Para ejemplificar algunos de los pronunciamientos, podemos citar lo expresado en el diario "La Segunda" el día 30 de mayo de 1978, en su editorial: "Como en otras oportunidades se ha señalado en estas columnas, si alguno de nosotros estuviera en la desgraciada situación de tener un familiar cercano desaparecido, no vacilaría en adoptar cualquier actitud que contribuyera a aclarar el paradero del familiar desaparecido... como otras veces lo hemos señalado, el Gobierno tiene la obligación de empeñarse a fondo para entregar a los familiares de los desaparecidos todos los antecedentes de que pueda disponer sobre ellos... la entrega de esa información es un deber moral fundamental que no puede ser postergado bajo ningún pretexto. Si en el pasado las autoridades cometieron errores o excesos, ha llegado la hora de remediarlos, sancionarlos si fuere preciso".

El diario "El Mercurio", también en comentario editorial, expresó el 28 de mayo de 1978 que "el tema de los desaparecidos se refiere a una grave y dolorosa situación humana, cuyas dimensiones pueden exagerarse hasta lo inverosímil, pero que en casos concretos es muy real... se han cometido errores, muy probablemente se ha incurrido en abusos delictuosos. Sería contraproducente sacudirse de hombros frente a estos hechos... el Gobierno ha ido eliminando a sus adversarios los pretextos que tienen para sostener la campaña exterior contra Chile. En esta línea cabe abordar también el problema de los desaparecidos".

La revista "Ercilla", el 4 de abril de 1978, en un artículo sobre la DINA titulado "organismo con deuda de arrastre" expresa: "Tal como lo ha prometido el Gobierno, resulta indispensable para la tranquilidad interna y el prestigio de nuestro país que se toque a fondo este río de aguas turbias, cuya corriente parece que tiene mucho que arrastrar".

La revista "Qué Pasa", en editorial del 1º de junio de 1978, señaló: "Nuevamente el tema de los chilenos desaparecidos ha sido puesto esta semana ante la conciencia de la comunidad nacional. Y ahora, en medio de crecientes síntomas de que ha llegado el momento de una definición que ponga fin a las especulaciones de todos estos años". Esa misma revista, nuevamente en comentario de editorial del 8 de junio de 1978, expresó: "Es por eso que la actitud de ir al

fondo de esa rémora para el proceso histórico que vive Chile es no sólo la más justa, sino también la más conducente para despejar el camino y poder consagrar los esfuerzos de todos a las tareas que el país exige".

La revista "Mensaje", en editorial de julio de 1978, que titula "Los detenidos desaparecidos: tragedia nacional", concluye expresando: "Para que todo este dolor de la Patria herida pueda florecer en reconciliación, esperamos que el Gobierno aclare pronto este drama que está matando el alma nacional".

Todos los pronunciamientos referidos vienen a sumarse a los que distintos sectores sociales de nuestro país han venido planteando desde el día que comenzó a sucederse este drama. Todos ellos no dejan sino entrever hasta qué punto la comunidad nacional está impactada por el problema. Precisamente este impacto general es, sin lugar a dudas, un argumento más para urgir a Vuestra Excelencia a actuar sin demora.

6° Se admite que las respuestas que antes se dieron para explicar estas situaciones y desestimar las denuncias fueron erróneas.

Constatamos que finalmente se han dejado de lado las diversas razones que se dieron en el pasado para explicar este drama. Ya no es cuestión de la clandestinidad o de la inexistencia legal de los desaparecidos; tampoco es que abandonaron el país o que se trata de un porcentaje normal en toda sociedad. Existe hoy, como se comprueba con las citas anteriores, una convergencia de convencimiento de que el problema de los detenidos desaparecidos es real, y ello constituye otro elemento novedoso que allana el camino a la justicia para una investigación que retome el problema en los términos exactos. Existe una denuncia responsable que subsiste y muchas explicaciones pasadas sobre el problema que ya han sido abandonadas. La suerte de los desaparecidos aún es una cuestión pendiente de necesario esclarecimiento.

7° Las pruebas acumuladas sobre las detenciones conforman una base sólida para completar una investigación criminal que esclarezca la suerte de estas personas.

El camino de la justicia se allana frente a la existencia de pruebas numerosas, concretas y determinadas, que permiten de manera inequívoca acometer la labor de investigación propia de los Tribunales.

Así es como, por ejemplo, bastaría tomar declaración a las personas individualizadas como responsables del arresto y posterior desaparecimiento en casos determinados. De los antecedentes que hemos conocido vemos que sería posible interrogar a Osvaldo Romo Mena, funcionario de la DINA, sobre la situación de Eduardo Ziede, de Juan Chacón Olivares, de Sergio Tormen Méndez, de María Inés Alvarado Borgel, de Alfonso Chanfreau Oyarce, de Jaime Buzio Lorca, de Modesto Espinoza Pozo, de Manuel Carter Lara, de José Flores Rojas, de Violeta López Díaz, de Mónica Llanca Iturra, de Manuel Jesús Villalobos Díaz, de Eugenia Martínez Hernández, de Luis Fuentes Riquelme, de Jorge D'orival Briceño, de Sergio Reyes Navarrete, de Claudio Silva Peralta, de Fernando Silva Camus, de Anselmo Radrigán Plaza, de Juan Carlos Rodríguez Araya, de Cecilia Castro Salvadores.

Sería posible interrogar a Marcia Alejandra Merino Vega, funcionaria de la DINA, acerca de la situación de Muriel Dockendorff Navarrete, de Luis Fuentes Riquelme, de Jorge Müller Silva, de María Angélica Andreoli Bravo.

Sería posible interrogar al Comandante Edgardo Ceballos, del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, acerca de la situación de José Luis Baeza Cruces.

Sería posible interrogar al Sargento de Carabineros Luis Hidalgo, acerca de la situación de Hernán Sarmiento Sabater.

Sería posible interrogar al Teniente de Ejército Jorge Nazar Sabag, acerca de la situación de Oscar Valdivia González.

Sería posible interrogar al Teniente de Ejército Marcelo Morel, acerca de la situación de Alan Bruce Catalán.

Sería posible interrogar a la funcionaria de la DINA, Luz Arce Sandoval, acerca de la situación de Alvaro Barrios Duque, de Sergio Riveros Villavicencio.

Sería posible interrogar a Patricio Alvarez Poblete, funcionario de la DINA, acerca de la situación de Alvaro Barrios Duque.

Sería posible interrogar al Teniente de Ejército Hernán Ramírez, acerca de la situación de José Flores Araya.

Sería posible interrogar al Capitán de Ejército Luis Pavez Parra y al Coronel de Ejército Alfredo Rheren

Pulido, de la Escuela de Suboficiales, acerca de la situación de Arturo Barría Araneda.

Sería posible interrogar al Teniente de Ejército Fernando Adrián Lauriani Maturana, acerca de la situación de Jorge Andrónico Antequera, de Juan Carlos Andrónico Antequera.

Sería posible interrogar al Teniente León, de Carabineros de Copiapó, acerca de la situación de Pedro Acevedo Gallardo.

Sería posible interrogar al Coronel de Ejército Eduardo Oyarzún, Comandante del Regimiento Maipo de Valparaíso, acerca de la situación de Fabián Ibarra Córdova, de Sonia Ríos Pacheco, de Alfredo García Vega, de Carlos Rioseco Espinoza, de Horacio Carabantes Olivares, de María Gutiérrez Martínez, de Abel Vilches Figueroa, de Elías Villar Quijón.

Sería posible interrogar al Suboficial de Carabineros Julio Contreras Chávez, adscrito a la DINA, acerca de la situación de Fabián Ibarra Córdova, de Sonia Ríos Pacheco.

Sería posible interrogar a José Manuel Mac Millan Godoy, funcionario civil, cuñado de Contreras Chávez, acerca de la situación de Fabián Ibarra Córdova, de Sonia Ríos Pacheco.

Sería posible interrogar al Comandante de Carabineros Conrado Pacheco, acerca de la situación de Juan Mac León Trever, de María Ramírez Gallegos.

Sería posible interrogar al Coronel Jaime Garín Cea, ex Jefe de la Zona en Estado de Sitio del Departamento de Talagante, acerca de la situación de Enrique Astudillo Alvarez.

Sería posible interrogar al Teniente de Carabineros Lautaro Eugenio Castro y al Sargento 2º González, de Carabineros, que tuvo a su cargo la oficina de guardia del Campo del Estadio Nacional, acerca de la situación de Carlos, Nelson y Oscar Hernández Flores, de Enrique Astudillo Alvarez, de Omar y Ramón Astudillo Rojas, de Sergio Maureira Lillo, de José, Rodolfo, Segundo y Sergio Maureira Muñoz.

Sería posible interrogar al General Rolando Garay Cifuentes y al Oficial de la DINA N° 8869, acerca de la situación de Carlos Carrasco Matus.

Sería posible interrogar al Coronel de Ejército Jorge Espinoza Ulloa, acerca de la situación de Oscar Castro Videla.

Sería posible interrogar al Comandante de Escuadrilla (A) Enzo Di Nocera García, acerca de la situación de Martín Elgueta Pinto.

Sería posible interrogar al Teniente de Ejército Ernesto O'Ryan Cárdenas, acerca de la situación de Luis Trejo Saavedra.

Sería posible interrogar al Comisario de Carabineros Luis Ignacio Zúñiga, acerca de la situación de Albano Fioraso Chau.

Sería posible interrogar al Teniente de Ejército Aroldo Latorre, acerca de la situación de José Flores Araya.

Sería posible interrogar al Capitán Bravo, de Carabineros de Paine, acerca de la situación de Juan Leiva Vargas.

Sería posible interrogar al Sargento de Carabineros Diógenes Toledo Pérez, del Retén de Catillo, acerca de la situación de Miguel Rojas Rojas, de Golberto Rojas Vásquez, de Ruperto Torres Aravena.

Sería posible interrogar al Teniente Federico Stigman, acerca de la situación de José Salazar Aguilera.

Sería posible interrogar al carabinero Edmundo Sandoval, de la 7ª Comisaría de Santiago, acerca de la situación de José Vidal Molina.

De los antecedentes que hemos conocido vemos que sería posible investigar a quién o a quiénes pertenecían los vehículos individualizados, en que fueron arrestados los detenidos hoy desaparecidos.

Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10 Patente CJ-790, año 1974, Municipalidad de La Reina, en que fue detenido Francisco Bravo Núñez.

Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta C-10 patente UI-55, año 1974, de la Municipalidad de La Granja, en que fue detenido Luis Gendelman Wisniak.

Sería posible investigar quién era el propietario del automóvil Chevy Nova, patente DE-22, año 1974, color celeste, en que fue detenido Bernardo de Castro López.

Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, patente EM-965, año 1974, de la Municipalidad de Las Condes, color rojo, en que fueron detenidos Manuel Jesús Villalobos Díaz, Jac-

queline Drouilly Jurich, Jorge D'Orival Briceño, Sergio Reyes Navarrete, Claudio Silva Peralta.

Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, patente BI-896, año 1974, Municipalidad de Conchalí, color rojo, en que fueron detenidos María Isabel Jouy Petersen, Francisco Rozas Contador.

Sería posible investigar quién era el propietario de la Renault patente NE-81, año 1976, Municipalidad de Santiago, en que fue detenido José Flores Garrido.

Sería posible investigar quién era el propietario del automóvil Fiat 125, patente EG-388, año 1976, en que fue detenido Carlos Contreras Maluje.

Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, patente SV-790, año 1974, color crema, en que fue detenido Enrique Toro Romero.

Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, patente HSN-38, año 1974, Municipalidad de La Cisterna, en que fue detenida María Angélica Andreoli Bravo.

Sería posible investigar quién era el propietario del automóvil Fiat 600, patente DG-586, año 1975, color gris claro, en que fue detenido Francisco Ortiz Valadares.

Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, patente XX-589, año 1974, color granate, en que fue detenido Isidro Pizarro Meniconi.

Sería posible investigar quién era el propietario de la camioneta Chevrolet C-10, patente HSN-36, año 1974, Municipalidad de La Cisterna, en que fue detenido Agustín Reyes González.

Sería posible investigar quién era el propietario del automóvil patente BV-189, año 1974, en que fue detenido Pedro Vergara Inostroza.

De los antecedentes que hemos conocido vemos que sería posible interrogar al personal militar o de seguridad que estuvo a cargo de los recintos donde fueron reclusos los detenidos hoy desaparecidos. Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Campamento de Tejas Verdes, entre enero y mayo de 1974, sobre la situación de Eduardo Alarcón Jara, de Ofelio Lazo Lazo, de Alvaro Barrios Duque, de Jorge Ojeda Jara.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la casa de la DINA ubicada en calle Londres 38, que se puso en funcionamiento a mediados de enero de 1974, sobre la situación de Carlos Cubillos Gálvez, de Eduardo Ziede Gómez, de José Ramírez Rosales, de Enrique Toro Romero, de Bárbara Uribe Tamblay, de Edwin Van Jurick Altamirano, de Jaime Buzio Lorca, de Artemio Gutiérrez Avila, de Juan Chacón Olivares, de Martín Elgueta Pinto, de Máximo Geda Ortiz, de Jaime Cádiz Norambuena, de Luis Guajardo Zamorano, de Sergio Flores Ponce, de María Inés Alvarado Borgel, de Zacarías Machuca Muñoz, de Alfonso Chanfreau Oyarce, de Sergio Montecinos Alfaro, de Muriel Dockendorff Navarrete, de María Andreoli Bravo, de Mauricio Jorquera Encina, de Newton Morales Saavedra, de Alvaro Barriós Duque, de Rodolfo Espejo Gómez, de María Elena González Inostroza, de Hernán González Inostroza, de Sergio Riveros Villavicencio, de Aurelio Troncoso Muñoz.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Escuela de Paracaidistas de Peldehue, sobre la situación de Leopoldo Muñoz Andrade.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Subterráneo del Ministerio de Defensa Nacional, sobre la situación de José Baeza Cruces.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Academia de Guerra de la FACH, sobre la situación de Pedro Merino Molina, Carlos Salcedo Morales, José Baeza Cruces, Ofelio Lazo Lazo, Cecilia Labrín Sazo.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Campamento Cuatro Alamos, sobre la situación de Héctor Garay Hermosilla, de Juan Chacón Olivares, de Sergio Flores Ponce, de Ofelio Lazo Lazo, de Alfonso Chanfreau Oyarce, de Alejandro Parada González, de Muriel Dockendorff Navarrete, de Cecilia Labrín Sazo, de Newton Morales Saavedra, de Rodolfo Espejo Gómez (pabellón 4, celda 8), de Gregorio Gaete Farías, de María Elena González Inostroza, de Hernán González Inostroza, de Aurelio Troncoso Muñoz, de Antonio Cabezas Quijada, de Jacqueline Binfa Contreras.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de Villa Grimaldi, sobre la situación de Héctor Garay Hermosilla, de Martín Elgueta Pinto, de Alfonso Chanfreau Oyarce, de Newton Morales Saavedra, de Antonio Cabezas Quijada, de Modesto Espinoza Pozo, de José Flores Araya, de Víctor Alfonso Martínez, de Manuel Villalobos Díaz, de Rodolfo Marchant Villaseca, de Herbit Ríos Soto.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la penitenciaría de La Serena, acerca de la situación de Ismael Chávez Lobos.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de las casas de José Domingo Cañas N.os 1367 y 1347, que comenzó a usar la DINA desde agosto de 1974, acerca de la situación de Cecilia Castro Salvadores, de Teobaldo Tello Garrido, de Jacqueline Binfa Contre-ras, de Francisco Aedo Carrasco, de Carlos Pérez Var-gas, de Luis Durán Rivas, de Sergio Pérez Molina, de María López Stewart, de Cecilia Bojanic Abad, de Fla-vio Oyarzún Soto, de Amelia Bhrun Fernández.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Escuela de Suboficiales del Ejército, acerca de la situación de José Flores Araya, de Arturo Barría Ara-neda.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Regimiento Osorno, sobre la situación de Jaime Vás-quez Sáez.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Regimiento de Ingeniería de Copiapó, sobre la situa-ción de Pedro Acevedo Gallardo.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Base Aérea de Colina, sobre la situación de Hum-berto Fuentes Rodríguez.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Cuartel Silva Palma de Valparaíso, sobre la situación de José Salazar Aguilera.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Casa de la DINA de Irán esquina Los Plátanos, Co-muna de Ñuñoa, sobre la situación de Jorge Ortiz Moraga.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Hospital Militar de Santiago, sobre la situación de Claudio Thauby Pacheco, Iván Insunza Bascuñán, Gon-zalo Toro Garland.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Regimiento Maipo de Valparaíso, sobre la situación de Fabián Ibarra Córdova, de Sonia Ríos Pacheco, de Alfredo García Vega, de Carlos Rioseco Espinoza, de Horacio Carabantes Olivares, de María Gutiérrez Mar-tínez, de Abel Vilches Figueroa, de Elías Villar Quijón.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Posta Central de Santiago, sobre la situación de An-tonio Aguirre Vásquez.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo del Retén de Carabineros de Lonquimay, sobre la situación de María Arriagada Jerez.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la 17ª Comisaría de Radiopatrullas de Carabineros, sobre la situación de José Astorga Nanjarí.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Escuela de Artillería de Linares, sobre la situación de María Isabel Beltrán Sánchez.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la 9ª Comisaría de Carabineros de Santiago, sobre la situación de Albano Fioraso Chau.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Clínica Santa Lucía N° 162, de la DINA, sobre la situación de Nilda Peña Solari.

Sería posible interrogar a quien estuvo a cargo de la Penitenciaría de Santiago, sobre la situación de David Silberman Gurovich.

De cada uno de los antecedentes concretos señalados, por la vía ejemplar, se derivan diligencias posibles a realizar en el conjunto de los casos, que llevadas adelante con acuciosidad y ejerciendo las facultades propias de un juez de superior rango, habrán de permitir la solución por todos buscada y anhelada del drama de los detenidos desaparecidos.

8° El problema de los detenidos desaparecidos presenta rasgos que le dan una unidad característica que exige su investigación conjunta.

Los desaparecimientos comenzaron a producirse sistemáticamente desde el 11 de septiembre de 1973 y se prolongaron hasta fines de 1977; sin embargo, la no ocurrencia de ellos en el transcurso de este año no nos asegura que no vayan a reiterarse, mientras no se esclarezca definitivamente aquel proceso.

En una primera etapa conjuntamente con los hechos que rodearon los sucesos del 11 de septiembre, los desaparecimientos indiscriminados afectaron en forma principal a los sectores campesinos y urbanos que de una forma u otra habían colaborado en el Gobierno anterior, ya fuera en el ejercicio de actividades sindicales o políticas. A partir del año 1974 aparecen ya rasgos reveladores de una acción dirigida a la eliminación de personas muy determinadas, todas las cuales se encuentran vinculadas al Movimiento de

Izquierda Revolucionaria, MIR; cumplida esta primera etapa el interés represivo se traslada a comienzos del año 1975, fundamentalmente a la dirigencia del Partido Socialista, para llegar en el año 1976 a la del Partido Comunista. En el año 1977 continúan desapareciendo personas vinculadas de alguna manera a esos partidos políticos. El carácter común de las personas que desaparecen, lo que ha sido ratificado hasta por el propio Ministro del Interior, conforma un cuadro unitario en la situación que sólo se diferencia por las diferentes modalidades que se van desarrollando en el transcurso del tiempo.

En suma, el problema de los cientos de desaparecidos es uno solo: es la consecuencia de una táctica represiva perfectamente planificada y coordinada, desde una sola instancia, en contra de quienes podía presumirse alguna acción de antagonismo al régimen.

La designación de un Ministro en Visita Extraordinaria para el esclarecimiento definitivo del problema de las personas desaparecidas se hace absolutamente inexcusable.

No parece que nunca antes en nuestro país se hubiese configurado un cuadro que en forma tan definida requiriese de la intervención de un alto magistrado para esclarecer definitivamente un gravísimo problema que requiere ser enfrentado como un conjunto y sobre la base de una investigación unitaria y centralizada que esté dotada de facultades de imperio. El clamor público que hoy existe sobre el problema de las personas desaparecidas pide incondicionalmente tal esclarecimiento. El Gobierno, por su parte, reconoce el problema y admite la necesidad de esclarecer este drama, ofreciendo su colaboración para ello. Todos están de acuerdo, asimismo, en cuál es la pista que debe seguirse para encontrar los datos que se necesitan; no es siquiera necesaria la existencia de documentos: podrán incinerarse papeles, pero los hechos, sobre todos los dramáticos, están gravados con más eficacia en mentes que no es posible incinerar, en mentes que son conciencias y que precisamente por el dramatismo de los hechos pugnan por manifestarse y lo harán ante la acogida imparcial que a su testimonio dé un alto magistrado de la justicia; los testigos, en suma, existen y es urgente hacerlos comparecer metódica y masivamente ante una alta instancia judicial que reúna la totalidad de los antecedentes para que no se deje confundir por pistas falsas y contraste y confirme un hecho con los demás. La unidad del problema en torno a su causa, hoy unánimemente reconocida, exige la intervención de un alto magistrado que centralice la investigación; en

caso contrario, jamás podrá averiguarse la verdad de hechos esencialmente vinculados. La actuación judicial particular, por la vía de la pesquisa de cada caso, ha demostrado su ineficacia, entre otros motivos, porque desconoce la unidad esencial de un problema colectivo que debe ser enfrentado como un conjunto. No cabe dudas que la acumulación de todos los antecedentes en manos de un solo investigador dotado de imperio jurisdiccional dará una eficacia invencible a la pesquisa.

Es clara, asimismo, la posición diversa en que un alto magistrado del poder judicial se encuentra ante el problema de la que tiene el Gobierno. Si bien éste ha ofrecido su colaboración, no cabe ignorar que su actuación directa en el problema se ve obtaculizada por múltiples relaciones personales y orgánicas que mantuvo con la disuelta DINA y demás servicios de seguridad. Ya el hecho de haber decretado una amnistía general extensiva a las personas comprometidas en sucesos de esta naturaleza, lo inhibe de alguna manera para que, **por sí mismo** dinamice un proceso que concluya con un esclarecimiento completo. Para un magistrado, en cambio, que ningún vínculo personal ni orgánico mantiene con los servicios causantes de estos sucesos, no existe elemento alguno que lo inhiba del establecimiento de "la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad" a la que el país entero dice hoy que tienen derecho los familiares de las personas desaparecidas. No será así el Gobierno directamente quien lleve adelante la pesquisa y ordene la comparecencia de los testigos, sino que será un colaborador que ha comprometido anticipadamente su cooperación para que se aclare un problema en cuyo esclarecimiento anuncia solamente su interés específico. La naturaleza judicial que el problema tiene en sí mismo, por estar comprometidos en él los derechos más sensibles de nuestro ordenamiento jurídico, y que hace inexcusable la intervención de las instancias más calificadas del Poder Judicial, la admite el propio Gobierno al expresar el Sr. Ministro del Interior: "Cualquiera sea la verdad concreta en cada situación, ella puede ser investigada por los Tribunales de Justicia".

¿Será necesario añadir una sola palabra a lo que la Iglesia ha dicho en estos cinco años, a las expresiones antes citadas del Ministro del Interior, del Embajador de Chile ante las Naciones Unidas, del General Augusto Pinochet, de numerosos editoriales que reflejan el estado de la opinión pública en la mate-

ria, para afirmar ante V. E. que este drama nacional que provoca un público clamor constituye la "alarma pública" a que la ley alude para el nombramiento de un Ministro en Visita Extraordinaria? No parece posible imaginar que pueda provocarse mayor alarma pública que ante el hecho incontrastable, hoy por todos reconocido y calificado de un drama nacional, del desaparecimiento de 651 chilenos. ¡Pero se multiplica aun esta alarma pública si tal suceso trágico no queda definitivamente esclarecido! ¿No es alarmante para una sociedad el que no sólo un hecho así pueda ocurrir en ella sino que ni siquiera se pueda identificar cómo, en qué circunstancias, por quién, han desaparecido de la faz de la tierra centenares de sus miembros? Mientras el problema no se esclarezca habrá que sospechar que sus causantes tienen el poder de impedir tal esclarecimiento, con lo que, si ello es así, pende sobre nuestra sociedad la amenaza de su repetición. El carácter acentuado de alarma pública que una situación así cobra es innegable. En realidad, la única manera de lograr una seguridad en esta materia es comprobar que nuestra sociedad tiene el vigor y la salud vital para llevar a la luz pública su verdad y para condenarla. Hoy los causantes de este drama se ocultan en la penumbra y se solazan en su anonimato y en la ignorancia de la sociedad acerca de lo realmente ocurrido. Si en tales circunstancias vuelven ellos, u otros, a forjar planes siniestros, ¿serán ellos los únicos responsables de nuevos hechos dramáticos? Si se les da el espectáculo de instituciones sociales débiles, ¿acaso no los estamos fortaleciendo? La debilidad de la ley es la fuerza de la ilegalidad. En cambio, si el país aprecia la conducta ejemplar de un Poder Judicial ineludible, que en su compromiso de justicia con la sociedad cumple con su mandato de esclarecer este drama de las personas desaparecidas, se eliminará la alarmante aprehensión sobre una eventual repetición de estos hechos por parte de los mismos o de diferentes grupos. Imposible cumplir con los anhelos históricos de nuestro país de caminar resueltamente hacia un futuro institucional si iniciamos nuestros pasos con tal fardo a nuestras espaldas.

POR TANTO:

Respetuosamente e invocando los derechos de protección a la vida, a la integridad física y a la libertad personal de las personas desaparecidas después de su detención y el derecho de sus familiares a obtener de la justicia el esclarecimiento definitivo de es-

tas situaciones que los mantienen en la incertidumbre y los angustian, solicitamos de este Alto Tribunal encargado por mandato constitucional de la suprema protección de los derechos fundamentales, la designación en visita extraordinaria de un Ministro en cada una de las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia para que en sus respectivas jurisdicciones tomen a su cargo las investigaciones judiciales encaminadas a establecer las circunstancias de la detención, el o los lugares a que han sido conducidos después de practicadas las detenciones, el o los lugares en que han permanecido y actualmente permanecen privados ilegalmente de su libertad, su estado actual o la suerte corrida por las personas desaparecidas que se individualizan en las nóminas que por separado para cada una de las Cortes de Apelaciones antes indicadas acompañamos en el primer otrosí.

PRIMER OTROSI:

Acompañamos nóminas que contienen los nombres de 651 personas detenidas desaparecidas, correspondientes a las diferentes Cortes de Apelaciones señaladas en lo principal, para la investigación de cuyas detenciones y suerte se solicita la designación de Ministros en Visita Extraordinaria.

Resuelta que sea esta petición, si procediere, acompañaremos duplicado de estas nóminas para ser remitidas a cada uno de los señores ministros designados.

Sírvase V. S. Excma. tener por acompañadas las nóminas.

SEGUNDO OTROSI:

Con motivo del compromiso contraído por el señor Ministro del Interior en su citado discurso del 15 de junio del presente año por cadena nacional de radio y televisión en orden a explorar "cualquier camino serio que respecto de algún caso particular pueda presentársele", diversos señores obispos de la Iglesia Católica han estado enviándole antecedentes de personas detenidas desaparecidas.

Acompañamos esos antecedentes ya enviados, que corresponden a 478 personas, haciendo presente a

V. S. Excma. que resuelta que sea esta solicitud acompañaremos las correspondientes al resto de las personas incluidas en las nóminas, para que los señores ministros que se designen cuenten desde el inicio de sus investigaciones con los antecedentes de todos los detenidos desaparecidos a los cuales ellos deben extenderse.

ENRIQUE ALVEAR URRUTIA
Obispo Auxiliar de Santiago
Vicario Episcopal Zona Oeste

JORGE HOURTON POISSON
Obispo Auxiliar de Santiago
Vicario Episcopal Zona Norte

IGNACIO ORTUZAR ROJAS
Vicario General y Vicario
Episcopal Zona Providencia-
Las Condes

CRISTIAN PRECHT BAÑADOS
Vicario Episcopal para la
Solidaridad. Secretario de
Pastoral del Arzobispado

GUSTAVO FERRARIS
DEL CONTE, S. D. G.
Vicario Episcopal Zona Sur

SERGIO URIBE GUTIERREZ,
O. F. M.
Vicario Episcopal Zona Centro

MAURICIO VEILLETTE G.,
O. M. I.
Vicario Episcopal Zona
Avda. Matta

ALFONSO BAEZA DONOSO
Vicario Episcopal para la
Pastoral Obrera

RENE VIO VALDIVIESO,
SS. CC.
Vicario Episcopal Zona Rural-
Costa

JUAN DE CASTRO REYES
Vicario Episcopal Zona Oriente

JAVIER MAC MAHON A.,
O. F. M.
Vicario Episcopal para
Religiosos

RESOLUCION DE LA CORTE SUPREMA

En Santiago, a veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y nueve se reunió en Pleno el Tribunal presidido por don Israel Bórquez Montero con la concurrencia de los ministros, señores: Eyzaguirre, Retamal, Maldonado, Ramírez, Rivas, Correa, Erbeta, Ulloa, Aburto, Zúñiga y Meersohn, y tomó conocimiento de los antecedentes administrativos "V-28-78", caratulados: **"Los Vicarios Episcopales del Cardenal Arzobispo de Santiago piden que se designen Ministros en Visita para que investiguen los que denuncian de detenidos desaparecidos que señalan"**, adoptándose al respecto, el acuerdo que sigue:

Los Vicarios Episcopales del Cardenal Arzobispo de Santiago por las razones que exponen en su presentación de fs. 52, han solicitado a este Tribunal nombramiento de Ministros en Visita Extraordinaria en las Cortes de Apelaciones que señalan "para que tomen a su cargo las investigaciones judiciales encaminadas a establecer las circunstancias de las detenciones, lugares a que han sido conducidos, lugares en que han permanecido y permanecen actualmente privados ilegalmente de su libertad, estado actual o la suerte corrida" por las personas que se individualizan en la nómina acompañada.

Y teniendo presente los antecedentes suministrados por las diversas Cortes de Apelaciones del país, a las cuales se les solicitó informe, según resolución corriente en fs. 67 del cuaderno respectivo, y aquellos aportados por los peticionarios en su presentación, este Tribunal, en uso de sus facultades acuerda.

1. Corte de Apelaciones de Iquique:

Oficiar a dicha Corte a fin de que ordene que el Juzgado de Letras de Arica que corresponda instruya sumario para averiguar la desaparición que se denuncia de Sergio Amador Pantoja Rivera y Juan Franco Peña Fuenzalida, sin perjuicio de la facultad de

ese tribunal de alzada de designar un Ministro en Visita Extraordinaria para el conocimiento de ese proceso, si lo estimare conveniente, según los antecedentes de que disponga.

Remítase al efecto, copia del memorándum presentado por los peticionarios.

Se previene que los ministros señores Eyzaguirre y Retamal, estuvieron por disponer que aquella Corte efectuara desde luego la designación de Ministro en Visita Extraordinaria.

2. Corte de Apelaciones de Antofagasta:

Oficiar a dicha Corte a fin de que ordene al juzgado que corresponda proceda a instruir sumario en averiguación de las causas y circunstancias de la desaparición denunciada de Luis Gómez Cerda; y para que disponga que el Juez del Primer Juzgado del Departamento de El Loa preste personal y preferente atención al proceso que instruye por la presunta desaparición de Luis Eduardo Contreras León, sin perjuicio de la facultad de dicha Corte de designar Ministro en Visita Extraordinaria para que se avoque al conocimiento de esos procesos si lo estimare procedente según los datos de que dispusiere.

Remítase copia de los antecedentes suministrados por los solicitantes respecto de Luis Gómez Cerda. Se previene que los ministros señor Eyzaguirre y señor Retamal estuvieron por disponer que aquella Corte efectúe desde luego nombramiento de Ministro en Visita Extraordinaria.

3. Corte de Apelaciones de Copiapó:

Oficiar a dicha Corte a fin de que instruya al Juez del 2º Juzgado de Letras de dicha ciudad que debe prestar personal y preferente atención en el proceso por presunta desaparición de Pedro Gabriel Acevedo Gallardo, sin perjuicio de la facultad de ese tribunal de alzada de proceder a designar Ministro en Visita Extraordinaria si lo estimare del caso según los antecedentes de que dispusiere.

4. Corte de Apelaciones de Valparaíso:

Oficiar a esta Corte con el objeto de que disponga sean ubicados los procesos por presunta desaparición de Raúl Iván Cárcamo Aravena y Luis Otárola Valdés detenidos el 30 de agosto de 1977, y a cuyo respecto se efectuó denuncia por los familiares en

el Juzgado de turno de Valparaíso. Si no existieren los procesos se ordenará la instrucción de ellos por el juez que corresponda, a quien se le recomendará personal y preferente atención; y para que se ordene instruir sumario por la desaparición denunciada de Manuel Nemesio Valdés Gálvez, por el Juzgado de Quillota, todo ello sin perjuicio de la facultad del tribunal de alzada de nombrar Ministro en Visita Extraordinaria si lo estimare del caso con los antecedentes de que dispusiere.

5. Corte de Apelaciones de Santiago.

Oficiar a dicho Tribunal a fin de que proceda a designar un único Ministro en Visita Extraordinaria en los Juzgados del Crimen del Departamento de Santiago para que se avoque al conocimiento y fallo de todos los procesos que se encuentren en tramitación en dichos tribunales incoados por presunta desaparición de personas.

La designación anterior no comprenderá los procesos de que está conociendo el Ministro señor Aldo Guastavino con el Rol 2/77.

Asimismo, para que instruya a los jueces de los departamentos Presidente Aguirre Cerda, San Bernardo y Talagante con el objeto de que presten personal y preferente atención a los procesos que aún se encuentran en sumario sobre los hechos de que se trata, sin perjuicio de la facultad del Tribunal de alzada de nombrar un Ministro en Visita Extraordinaria si lo estimare conveniente según los antecedentes de que dispusiere.

Se previene que los ministros señores: Eyzaguirre, Retamal, Erbeta, Aburto y Meersohn fueron de parecer de ampliar la Visita Extraordinaria del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Adolfo Bañados en el Juzgado de Letras de Talagante a los demás procesos por desaparecimiento que figuran en sumario en ese Tribunal.

Oficiar a la misma Corte a fin de que disponga la instrucción de los procesos correspondientes a la investigación de la presunta desaparición de Jorge Salgado Salinas, Manuel Antonio Cerda Meza, Luis Dávila García, William Osvaldo Ramírez Barría, Osvaldo Torres Albornoz, Carlos Aracena Toro, Guillermo del Canto Ramírez, Luis Humberto Lagos Cid, José Orellana Meza, Sergio Pérez Molina, José Caupolicán Villagra, Manuel Díaz González y Hugo Concha Villegas, para lo cual se remitirá copia de los

antecedentes proporcionados por los ocurrentes, sin perjuicio de la facultad del tribunal de alzada de nombrar un Ministro en Visita Extraordinaria si estimare que procede, según los datos de que dispusiere.

6. Corte de Apelaciones de Rancagua:

Oficiar a esa Corte a fin de que designe un ministro en Visita Extraordinaria en el Juzgado de Letras de Maipo (Buin) a fin de que se avoque al conocimiento y fallo del proceso que se instruye en ese Juzgado en averiguación de las causas y circunstancias en que se produjo la presunta desaparición de José Domingo Adasme y otras diecinueve personas, y conozca la denuncia de desaparición, acompañándose al efecto copia de los antecedentes suministrados a esta Corte y del sumario que deberá instruirse por el presunto desaparecimiento de Pedro León Vargas que habría ocurrido en Paine.

7. Corte de Apelaciones de Talca:

Oficiar a ese Tribunal a fin de que disponga la instrucción de sumario por el Juzgado de Linares por la denunciada desaparición de Luis Tapia Concha, para lo cual se remitirá copia de los antecedentes proporcionados por los recurrentes, y se recomendará al Juez personal y preferente atención, sin perjuicio de la facultad del tribunal de alzada de designar Ministro en Visita Extraordinaria si lo estimare procedente; y solicite informe del Juzgado de Letras de Curicó sobre el proceso por la presunta desaparición de Luis Eduardo Vega Ramírez, debiendo si el proceso se encontrare en sumario recomendar al juez personal y preferente atención, sin perjuicio de nombrar Ministro en Visita Extraordinaria si lo estimare del caso.

8. Corte de Apelaciones de Chillán:

Oficiar a ese Tribunal a fin de que designe un solo Ministro en Visita Extraordinaria para que se avoque al conocimiento y fallo de aquellos procesos instruidos por la presunta desaparición de personas, que se encuentran en tramitación en los juzgados del departamento de Chillán, y para que instruya a los jueces de la jurisdicción en que haya procesos en tramitación por el mismo motivo a fin de que les presten personal y preferente atención, sin perjuicio de nombrar Ministro en Visita Extraordinaria si lo estimare procedente.

Oficiar al mismo Tribunal a fin de que ordene instruir sumario por el presunto desaparecimiento de Manuel Bascuñán Aravena, José J. Fuentes Bustos, Enrique

Carreño González, Rafael Díaz Meza, Claudio Escani-lla Escobar, Sergio Fetis Valenzuela, Armando Morales Morales, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Víctor Vivanco Vásquez y Luis Pereira Hernández, para lo cual se remitirá copia de los antecedentes proporcionados a esta Corte.

Los procesos se ordenarán incoar por el juzgado que corresponda sin perjuicio de la facultad de esa Corte de nombrar Ministro en Visita Extraordinaria si así lo estimare del caso con los antecedentes de que dispusiere.

9. Corte de Apelaciones de Concepción:

Oficiar a este Tribunal a fin de que designe un solo Ministro en Visita Extraordinaria para que se avoque al conocimiento y fallo de los procesos que se están tramitando en los juzgados de ese departamento por desaparecimiento de distintas personas; y para que se instruya a los jueces de la jurisdicción a fin de que a los procesos pendientes sobre análoga materia les presten personal y preferente atención, sin perjuicio de la facultad de designar Ministro en Visita Extraordinaria si lo juzgare del caso, con los antecedentes de que dispusiere.

Oficiar al mismo Tribunal a fin de que ordene incoar sumario para averiguar la presunta desaparición de Mario Belmar Soto y Ricardo López, para lo cual se remitirá copia de los antecedentes proporcionados a esta Corte por los ocurrentes, debiendo instruirse a los jueces de que les presten personal y preferente atención, sin perjuicio de la facultad de esa Corte de nombrar Ministro en Visita Extraordinaria si lo estimare del caso con los antecedentes de que disponga.

10. Corte de Apelaciones de Temuco:

Oficiar a ese Tribunal a objeto de que proceda a nombrar un solo Ministro en Visita Extraordinaria en los juzgados del departamento de Temuco a fin de que se avoque al conocimiento y fallo de los procesos por presunta desaparición de personas que se encuentran pendientes en esos juzgados.

Oficiar a ese Tribunal para que disponga que los juzgados que correspondan instruyan sumario por la presunta desaparición de las siguientes personas: Jorge Aillón Lara, Antonio Aninao Morales, Jorge Eduardo Calderón Otaíza, Pedro Curihual Paillán, Edo. Alberto González Galeno, Domingo Antonio Obreque Obreque, Merie Louis Stanislas Pesle de Menil Etienne, Dixon

Retamal Cornejo, Florencio Rubilar Gutiérrez, Liborio Rubilar Gutiérrez, Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Julio San Martín San Martín, Walter Raúl Stepke Muñoz, Einor Enrique Tenorio Fuentes, Omar Roberto Venturilli Leonelly, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo y Osvaldo Segundo Barriga Gutiérrez, remitiéndose copia de los antecedentes que obran en este Tribunal, debiendo instruirse a los jueces que les presten personal y preferente atención, sin perjuicio de la facultad de ese Tribunal de Alzada de nombrar Ministro en Visita Extraordinaria si lo fuere del caso, según los antecedentes de que dispusiere.

11. Corte de Apelaciones de Valdivia:

Oficiar a dicho Tribunal a fin de que disponga la instrucción de los sumarios respectivos por presunta desaparición de las personas que se indican, por los juzgados que correspondan, recomendándoles a los jueces personal y preferente atención: Santiago Domingo Aguilar Duhan, Lucio Hernán Angulo Carrillo, Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay, René Burdiles Almonacid, Arturo Chacón Salgado, Raúl Wladimir Leveque Carrasco, Rodolfo Iván Leveque Carrasco, Mario Sandoval Vásquez, José Mateo Vidal Panquileff y Carlos Zapata Aguila. Todo ello sin perjuicio de la facultad de esa Corte de designar Ministro en Visita Extraordinaria si lo estimare del caso según los antecedentes de que dispusiere.

Acuerdo General.

Se acuerda recomendar a todos los Ministros Visitadores de los juzgados en que actualmente se incoan procesos por presuntas desapariciones de personas que deben prestarles particular atención, haciéndose informar de ellos con la oportunidad que el caso requiere.

Se recomienda a las Cortes de Apelaciones antes indicadas que instruyan a los señores Ministros en Visita Extraordinaria y a los jueces de su jurisdicción para que en todos los procesos en que se investigue el desaparecimiento de alguna persona o personas: en las circunstancias que han motivado la instrucción de los respectivos sumarios, agreguen al proceso el correspondiente prontuario civil o penal de los presuntos desaparecidos, con sus fotografías respectivas, si fuere posible, para establecer así la existencia de las referidas personas.

Instrúyase, asimismo, a dichas Cortes de Apelaciones para que hagan saber a los Ministros en Visita Ex-

traordinaria y a los jueces de su jurisdicción, que respecto de aquellos procesos en que hubiere recaído auto de sobreseimiento temporal, por hallarse agotada la investigación, sólo podrá reabrirse ésta en las condiciones que la ley establece, esto es, en los casos en que se solicite por la existencia de nuevos antecedentes, reapertura que se decretará por los jueces que respectivamente hubieren pronunciado aquel sobreseimiento salvo en aquellos casos en que actúe un Ministro en Visita Extraordinaria en el respectivo departamento ante quienes se continuará la tramitación de los aludidos procesos.

Se previene que el Ministro señor Rivas concurre al presente acuerdo teniendo principalmente en consideración la manifiesta conveniencia de que se ponga pronto término a las investigaciones periódicas que se realizan por Ministros y Jueces sumariantes, en diversos puntos del país, en relación con los renovados denuncios sobre presuntos desaparecimientos de personas, formulados desde hace largo tiempo, a raíz del enfrentamiento militar de septiembre de 1973, por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, situación que no ha logrado esclarecerse en esos procesos, por la falta de antecedentes ciertos para puntualizarlos, lo que dio motivo —en varias ocasiones— al rechazo de esta Corte Suprema para encomendar a Ministros en Visita Extraordinaria la averiguación de tales denuncios. Muchos de esos procesos, por otra parte, se encuentran ya con resolución de sobreseimiento temporal, porque —después de agotadas las indagaciones respectivas— no se alcanzó confirmación de lo que fue asunto del denuncia.

D'ríjense los oficios correspondientes.

Para constancia, se extiende la presente acta que firman el Sr. Presidente y los señores Ministros y que autoriza el Secretario. Agréguese copia autorizada a los antecedentes "los" enmendado a fs. 2; "de" enmendado en la referida foja, valen "a los", entrelíneas a fs. 5; y "largo", entrelíneas a fs. 7, valen.

Documentos

EL PODER JUDICIAL: SUS FUNCIONES DE CONTROL JURISDICCIONAL Y SU PAPEL EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Informe de la visita a Chile del Grupo de Trabajo Ad Hoc encargado de estudiar la situación de los derechos humanos en Chile. Octubre de 1978.

El Grupo se refirió reiteradamente en sus informes a las condiciones de funcionamiento del poder judicial chileno y sus consecuencias en la protección de los derechos humanos, en particular los que se relacionan con la libertad y seguridad de las personas (A/31/253, cap. VI; E/CN. 4/1221, párrafos 80 a 84, y E/CN. 4/1226, párrafos 75 a 77). También analizó, en su informe a la Comisión de Derechos Humanos en su 32º período de sesiones (E/CN. 4/1188, párrafos 44 a 50) los cambios introducidos en la legislación en cuanto al respeto de las garantías y privilegios reconocidos a los integrantes de la magistratura.

En la sección **A supra** se refirió a las circunstancias legales y de hecho que traban la independencia del poder judicial a raíz de la acumulación de poderes ejercidos por la Junta Militar en virtud de los regímenes de emergencia.

Durante su permanencia en Chile, el Grupo se interesó por el funcionamiento de la justicia y el papel que desempeña actualmente en la protección de los derechos humanos. Su investigación se centró principalmente en dos aspectos: 1) eficacia de los recursos judiciales existentes para la protección de los derechos humanos y en particular de la vida, la libertad y seguridad de las personas, y 2) eficacia de los medios judiciales para la aplicación de las normas pertinentes cuando alega la existencia de violaciones a los derechos

humanos, así como para establecer las responsabilidades en esos casos.

1. Recursos judiciales para la protección de los derechos humanos.

La legislación chilena actual cuenta, en su letra, con dos recursos para la protección de la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Uno de ellos, incorporado a la legislación en el artículo 2 del Acta Constitucional N° 3, **es el recurso de protección**, que la concede en términos muy amplios, para todas las garantías enumeradas en el artículo 1º del Acta Constitucional N° 3. El Decreto Ley 1.684 del 31 de enero de 1977 dispuso que el recurso de protección sería improcedente en las situaciones de emergencia. Con esta disposición se extinguió una vía de protección que fuera abierta, poco tiempo antes, por la misma Junta de Gobierno. Este recurso, según el Gobierno chileno, "es incompatible con las situaciones de emergencia. . . Sin embargo, según jurisprudencia de la Corte Suprema, este recurso es procedente incluso en tales situaciones, cuando su interpretación y fallo no inciden en una cuestión relativa a la seguridad nacional. Así por ejemplo, se han acogido recursos de esta naturaleza cuando la reclamación versaba sobre cobro de impuestos". (57) Pese al decreto ley 1.684, la

(57) Informe presentado por el Gobierno de Chile, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Ci-

Corte Suprema considera aplicable el recurso de protección en cuanto a los derechos patrimoniales, pero no ha resuelto, sin embargo, que lo sea para la protección de la vida, la libertad y la seguridad de las personas.

El otro es el **recurso de amparo**. En 1976, el Gobierno de Chile informó a la Comisión de Derechos Humanos en un "Memorándum explicativo del decreto supremo N° 187 que contiene normas de protección para los detenidos en virtud del estado de sitio", donde se indican garantías tales como examen médico, orden escrita de detención o allanamiento, lugares de detención y visitas de inspección a esos lugares, que "de no darse cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia, la detención pasa a ser arbitraria, con lo que se hace aplicable el recurso de amparo o **habeas corpus**, cuyo conocimiento, en última instancia, corresponde a la Corte Suprema". Esta afirmación no coincide con lo manifestado al Grupo por el Presidente de la Corte Suprema quien, a las preguntas del Grupo sobre los alcances del recurso de amparo, respondió que éste tiene por objeto subsanar una detención irregular, no una detención administrativa. Por consiguiente, primero, si la detención ha sido practicada por el Ministerio del Interior, el amparo no puede prosperar; segundo, el recurso de amparo no es un instrumento para investigar el paradero de una persona, sino para solucionar una situación ilegal. Si el recurso de amparo es desechado, cabe recurrir en primera instancia ante la Corte de Apelación, y en segunda instancia ante la Corte Suprema. Ahora bien, la Corte Suprema en los casos recientes tenía que rechazar el recurso de amparo si la detención había sido decretada en virtud del estado de sitio o si la persona no estaba detenida, pero

ordenaba que la justicia ordinaria competente instruyera de oficio un sumario para investigar detenidamente si la persona estaba detenida o había desaparecido. La Vicaría de la Solidaridad pidió que se nombrara un ministro en visita para todos esos casos. La Corte Suprema denegó la petición por dos razones: primera, porque el servicio policial del ministro en visita designado sería el Servicio de Investigaciones que depende del Ministerio de Defensa y el ministro en visita estaría supeditado a éste, y segunda, porque sería más eficaz que los propios jueces competentes con sus inspectorías judiciales realizaran las diligencias correspondientes. Añadió que esa medida introduciría un factor de política encaminado a desprestigiar al Poder Ejecutivo.

Y luego, ampliando su explicación, insistió en que el recurso de amparo es para enmendar los errores de los tribunales ordinarios del país, no para averiguar los secuestros arbitrarios, tampoco las detenciones practicadas por el Ejecutivo. (58)

Mientras estuvo en Chile el Grupo fue informado por un grupo de abogados de que esta interpretación no es la que tradicionalmente dio la jurisprudencia a la legislación sobre recurso de amparo. Esta interpretación de sus alcances desvirtúa el sentido mismo del recurso de amparo, que así se convierte en una protección del poder judicial contra las arbitrariedades del mismo poder judicial, únicamente. En rigor, frente a los demás poderes las personas quedan sin protección legal alguna, y, por ende, a merced de su eventual arbitrariedad. Desde que otros recursos no cumplen esa función protectora de la vida, la libertad y la seguridad de las personas, el Grupo observa que no existe en la legislación chilena, tal

viles y Políticos (CCPR/C/1/Add. 25). Véase información sobre la jurisprudencia en esta materia en A/32/227, párrafos 63 a 65.

(58) Minuta N° 26, 24 de julio de 1978: entrevista con el Presidente de la Corte Suprema de Chile.

como lo interpreta actualmente la justicia, la protección a que se refiere el artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido integral que allí se establece.

En 1977 el Gobierno de Chile informó, refiriéndose a la no prolongación del estado de sitio, que

"con el actual estado de emergencia es materia del recurso de amparo tanto el mérito con que se ha procedido a la detención como si se han o no cumplido las formalidades procesales. No contradice lo anterior la facultad tradicional reglada en el decreto ley 1.877, (59) por la cual el Presidente de la República puede, durante el estado de emergencia, disponer el arresto de personas hasta por el plazo de cinco días, en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles. Transcurridos los cinco días, el detenido tendrá que ser dejado en libertad, o ser puesto a disposición de los tribunales de justicia, a fin de que éstos resuelvan lo que corresponda." (60)

Esta información puntualiza los alcances del recurso de amparo durante el estado de emergencia, a saber: transcurridos cinco días, en que la arbitrariedad de la detención no puede ser discutida y si el detenido es puesto a disposición de los jueces, la Cámara de Apelaciones decidirá si corresponde o no el amparo, contra una posible arbitrariedad. Subsisten las facultades del Poder Ejecutivo en cuanto al arresto y detención de personas, pero sujetas a los plazos determinados en el decreto ley 1.877 (véase *supra*, sección B).

(59) Véase comentario sobre esta disposición, dictada el 12 de agosto de 1977, en la sección B *supra*.

(60) Informe presentado por el Gobierno de Chile de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (CCPR/C/1/Add. 25).

El Grupo recibió una copia de la presentación que efectuó la Vicaría de la Solidaridad a la Corte Suprema, en marzo de 1978, a fin de exponerle problemas que encuentra en la administración de justicia. Su interpretación de los alcances legales del recurso de amparo en la legislación chilena difiere fundamentalmente de la sustentada por el Presidente de la Corte Suprema. Se dice en la presentación:

"El recurso de amparo ha sido de tal manera establecido en nuestra legislación, que se encuentra dotado de toda la potencialidad necesaria para constituir un eficaz resguardo de la libertad e integridad de las personas. Su vigencia tanto en situaciones de normalidad jurídica como en los regímenes de excepción, su tramitación preferente y urgente, el análisis que exige de los jueces sobre las cuestiones de forma y de fondo en relación a la detención de una persona, el mecanismo específico del **habeas corpus** que pone en sus manos, permitiéndoles ya sea traer al detenido a su presencia o desplazarse el tribunal al lugar en que éste se encuentra y la facultad con que inviste a los magistrados para que persigan la eventual responsabilidad criminal que quepa a los aprehensores por abusos cometidos, demuestran el excepcional valor que la ley da a este recurso." (61)

Sin embargo, la práctica judicial actual en la materia responde al punto de vista mencionado por la Corte Suprema. La presentación mencionada dice más adelante que, de un análisis de los recursos de amparo tramitados durante el primer semestre de 1977, se desprende que en ningún caso se provocó el **habeas corpus** del detenido, aun cuando el propio recurrente lo solicitó.

(61) Vicaría de la Solidaridad, presentación con motivo de la inauguración del Año Judicial, marzo de 1978.

por ser ello pertinente. Los tribunales tampoco se desplazaron por denuncias graves en casos de incomunicación prolongada, ni ante denuncias de que los detenidos se encontraban en lugares no reconocidos por la ley como centros de detención. En esa presentación se observa asimismo:

"la exclusiva dependencia del juicio que se hace el tribunal a los informes del representante del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior... Los recursos se fallan ateniéndose casi exclusivamente a lo que aquel funcionario informa, sin que exista una mayor ponderación de los antecedentes entregados por el recurrente particular. No se discute por el tribunal lo afirmado por el Ministro del Interior, aunque los antecedentes del recurso lo hagan dudoso y, en oportunidades, inverosímil... Por otra parte, esta práctica de los tribunales de rechazar los recursos de amparo, tanto cuando el Ministerio del Interior informe que ha emitido orden de detención en contra de una persona como cuando niega este hecho, limita el alcance del recurso y lo transforma en una especie de acción del particular en contra del Ministerio del Interior." (62)

La práctica que se menciona en la última frase de esta cita corresponde a un criterio sustentado por la Corte Suprema, conforme lo expresó al Grupo su Presidente. Este dijo que la Corte Suprema tenía que rechazar el recurso de amparo si la detención había sido decretada en virtud del estado de sitio, o si la persona no estaba detenida. (63) Esta información se solicita al Ministerio del Interior, que es quien dice si la persona se encuentra o no detenida. Así lo informó el Presidente de la Corte de Apelaciones, Sr. Aldo Guastavino, cuando dijo que entre los recur-

sos que figuran como rechazados están los casos en que el Ministerio del Interior informa que la persona no está detenida, ya que entonces se encomienda la investigación del caso al juzgado del crimen. (64)

La restricción de los alcances del recurso de amparo (que es la vía rápida y expedita establecida en la legislación para corregir eventuales arbitrariedades y abusos de poder) no se refiere sólo al hecho de la privación de libertad. Tampoco se investigan irregularidades evidentes, que surgen de la propia documentación obrante en el expediente, (65) como por ejemplo, la incomunicación de personas detenidas en virtud de órdenes emanadas del poder ejecutivo, así por plazos superiores a los autorizados para la incomunicación judicial, con riesgo para su salud y a merced de los funcionarios que los aprehendieron (que han sido señalados reiteradamente como autores de malos tratos y sevicias). Los jueces de la Corte Suprema parecen ser especialmente responsables del debilitamiento del poder judicial en Chile. El Grupo informó anteriormente acerca de fallos de la Corte de Apelaciones tendientes a impedir la incomunicación durante el estado de sitio, por no estar autorizada legalmente. (66) En esta materia, según lo expresa la Vicaría de la Solidaridad, la Corte Suprema ha llegado a aceptar la tesis sustentada por el Ministro del Interior en el sentido de que la persona detenida y aislada por orden del poder

(64) Minuta N° 27, 24 de julio de 1978: Entrevista del grupo de magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago.

(65) Véase A/31/253, párrafo 378, donde se explica el caso de un recurso de amparo en que el Ministerio del Interior dio informaciones contradictorias sobre una detención y la Corte desestimó el recurso sin averiguar el origen o la razón de las informaciones falsas.

(66) Ver A/31/253, párrafos 383 y 384, donde se transcribe un fallo de la Corte de Apelaciones tendiente a limitar las facultades del poder ejecutivo para incomunicar a las personas detenidas en virtud del estado de sitio.

(62) *Ibíd.*

(63) Minuta N° 26, 24 de julio de 1976.

ejecutivo no está incomunicada, sino "privada de visitas". (67) En el caso de tres personas amnistiadas y expulsadas del país, la Corte de Apelaciones hizo lugar al recurso en cuanto entendió que el Ministerio del Interior debía indicar expresamente los fundamentos de la expulsión y la Corte Suprema, a pedido del Ministerio del Interior, revocó su fallo por opinar que no están sometidos a control jurisdiccional los fundamentos de la decisión del Gobierno en esta materia. Este no está obligado a informar las razones por las que considere peligrosas para la seguridad del Estado a ciertas personas (véase capítulo III, sección A).

La Ministra de Justicia, refiriéndose a hechos que pueden configurar delito, dijo que en virtud del sistema jurídico chileno, una vez que el poder judicial recibe información sobre un hecho inicia de oficio el proceso y no se requiere querellante privado. Para efectos de la parte de defensa de la sociedad existen los fiscales que pueden pedir que se inicie un proceso. (68) La Vicaría de la Solidaridad, en su presentación de marzo de 1978, dice al respecto que "no se conocen tampoco casos en que los antecedentes hayan sido puestos a disposición del Ministerio Público para que éste deduzca querrela en contra de eventuales abusos cometidos con ocasión de las detenciones, tal como lo dispone el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal al reglamentar este recurso".

Un criterio similar al sustentado en materia de recursos de amparo donde el bien jurídico protegido es la vida, la libertad y la seguridad de las personas, fundamenta las resoluciones de los tribunales cuando se trata del derecho de los chilenos a vivir en su pa-

tria (véanse capítulos III, sobre ley de amnistía, y VI, sobre exilio).

Esta actitud del poder judicial de no ejercer sus atribuciones y potestades frente al poder ejecutivo se encuentra confirmada por su abdicación, por vía de la jurisprudencia que dictó, de la facultad constitucional de revisar las decisiones adoptadas por los tribunales militares. El Presidente de la Corte Suprema dijo que, en el estado de sitio, en determinados casos intervienen los tribunales militares. Los tribunales ordinarios y la Corte Suprema no pueden inmiscuirse en esos consejos de guerra. (69) Cabe señalar que los tribunales militares de tiempo de guerra han dejado de funcionar, desde que no rige el estado de sitio (si bien continúa haciéndolo respecto de los casos iniciados durante su vigencia), pero el criterio que sustenta esa jurisprudencia es concordante con la actitud de la Corte frente a otros organismos dependientes del Gobierno.

El Grupo observa que la renuncia a ejercer facultades del poder judicial en una materia tan grave como la de la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, ya sea porque existen normas que la Junta dicta en ejercicio de sus poderes legislativo y constituyente y que los tribunales no objetan, ya sea porque los tribunales dictan una jurisprudencia crecientemente restrictiva de esas facultades, parecen demostrar que la justicia no constituye en Chile en las actuales circunstancias un poder de control y protección de derechos humanos esenciales ante eventuales ar-

(67) Vicaría de la Solidaridad, presentación con motivo de la Inauguración del Año Judicial, marzo de 1978.

(68) Minuta N° 28, 24 de julio de 1978: entrevista del Grupo con la Ministra de Justicia.

(69) La Corte Suprema de Justicia de Chile declaró, con fecha 21 de agosto de 1974, que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre los reclamos presentados contra los consejos de guerra (A/31/253, párrafo 395). La decisión mencionada está en contradicción con disposiciones constitucionales y legales y con la jurisprudencia anterior de ese alto tribunal, según se dice en documentos entregados por abogados al Grupo.

bitrariedades y abusos del poder. En la mayoría de los casos han abandonado esas funciones. Así se deja al particular que presenta recurso de amparo sin ninguna clase de protección frente a un poder ejecutivo dotado de facultades muy amplias que es, frecuentemente, acusado de ser responsable de los hechos por los que se reclama esa protección.

2. Eficacia de los medios judiciales en la investigación de responsabilidades por violaciones a los Derechos Humanos.

En la investigación de violaciones a los derechos humanos, las limitaciones parecen ser similares a las que se señalaron respecto de las protecciones a esos derechos.

En las conversaciones que el Grupo realizó con el Ministro del Interior sobre el problema de las personas desaparecidas, éste manifestó que por grave e importante que pueda ser el caso para los interesados, no puede ser tan excepcional que obligue a la adopción de medidas tan extraordinarias y a privar de sus facultades constitucionales y legales a organismos independientes como el poder judicial. Ello sería inferirle una grave injuria y sentar un grave precedente en la historia jurídica del país, pues significaría que no se confía en los tribunales. (70)

Una serie de hechos hacen presumir al Grupo que esta falta de confianza en los tribunales de justicia del país, en lo referente a la aplicación de las leyes penales en la situación actual, haya sido más bien una característica de la actuación del propio poder ejecutivo, durante todo el período de gobierno de la Junta Militar. En efecto, la permanencia de tribunales militares de tiempo de guerra durante un largo lapso en que, según declaraciones oficiales "se encuentran superadas las cir-

cunstancias que determinaron la declaración de estado de guerra" (decreto ley 1181 del 11 de septiembre de 1975) o cuando la "situación de conflicto interno" está "ya superada" (decreto ley 1876 del 11 de septiembre de 1977), demuestra que el poder ejecutivo o los poderes militares preferían sacar a los detenidos de sus jueces naturales y dejar el proceso a cargo de tribunales especiales. Sin embargo, las decisiones de los tribunales militares no parecen gozar de la misma consideración que las de los tribunales ordinarios, pues la amnistía ha podido borrar las condenas que aquéllos dictaron. (71)

La Ministra de Justicia explicó, por su parte, al Grupo que, en todos sus actos, el Gobierno de Chile respeta al poder judicial. Por eso, aunque la amnistía borra el delito y la pena, no se podía incluir en ella a las personas que estaban bajo la jurisdicción del poder judicial. (72)

El Grupo no puede afirmar que este respeto se haya reflejado en todos los actos del Gobierno. La revista **Mensaje**, que se edita en Santiago de Chile, en un artículo titulado "La lección de la DINA", dice:

"Es para quedar atónito cuando uno encuentra escritos judiciales de nada menos que el Ministro del Interior de la época (General Raúl Benavides Escobar), consignando que el proporcionar información a los tribunales de justicia sobre las actividades y agentes de la DINA constituiría una violación a su 'vulnerabilidad como agentes de inteligencia' (Causa rol N° 10.262, 4° Juzgado del Crimen de San Miguel) y significaría un peligro para 'las condiciones absolutamente secretas en que trabajan los servicios de seguridad' (causa rol 2.680, 11° Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago). No re-

(70) Minuta N° 29, 25 de julio de 1978.

(71) Véase el capítulo III sobre el decreto ley de amnistía, N° 2.191, del 18 de abril de 1978.

(72) Minuta N° 28, 24 de julio de 1978.

paraba el Ministro que la petición de los tribunales no se refería a los aspectos técnicos y profesionales de los agentes de la DINA sino al eventual compromiso de éstos en actos que son delitos en todo el territorio de la República y por cualquier ciudadano que los cometa, cuestión que por su esencia misma es pública". (73)

La actitud del Ejecutivo de no facilitar las investigaciones realizadas por el poder judicial redujo notablemente su eficacia en el cumplimiento de sus funciones, en los casos en que debía establecer las responsabilidades frente a hechos delictuosos cometidos en violación de los derechos humanos. Los servicios de seguridad, que dependen directamente del Supremo Gobierno, se negaron reiteradamente a concurrir a declarar ante los tribunales. El mismo artículo citado dice:

"En los miles de recursos de amparo que se presentaron, en los masivos procesos criminales iniciados por desaparición de personas, en las causas por torturas, por arrestos ilegales, por secuestro, por homicidio, no se logró la comparecencia de los funcionarios de la DINA".

Tampoco demostró el Gobierno confianza en la justicia del país, al dictar decretos como el N° 1775 del 20 de mayo de 1977, (74) actualmente vigente, que según lo manifestó el Presidente de la Suprema Corte al Grupo, mutiló la facultad de los jueces ordinarios de entrar en cuarteles o lugares militares para efectuar las diligencias necesarias para la averiguación de un delito. El Presidente de la Corte Suprema indicó asimismo que según dicho decreto esas diligencias las deben practicar los pro-

prios tribunales militares, previa rogatoria de los tribunales ordinarios, y que en un recurso de amparo, si la persona está detenida en un lugar militar, la justicia ordinaria no puede entrar allí. (75)

Este decreto ley cercena las facultades de los jueces para actuar de inmediato en la instrucción de un sumario, practicando las primeras diligencias (artículo 6 del Código de Procedimiento Penal), la posibilidad de efectuar exámenes y registros en instalaciones militares, las que deberán efectuarse por intermedio de los tribunales militares. Cabe hacer notar que el 13 de septiembre de 1976, el Gobierno había dictado el Acta Constitucional N° 3, en cuyo artículo 3° se encomienda a los magistrados de la Corte de Apelaciones velar por la regularidad y legalidad de cualquier arresto, detención o prisión que pudiera sufrir un individuo, invistiéndola de la facultad de "adoptar de inmediato las providencias que juzgare necesarias" y "ordenar que el individuo sea traído a su presencia". Todas estas facultades quedan, una vez más, supeditadas al arbitrio de los tribunales militares que serán, en última instancia, los que decidirán la premura con que realicen las medidas ordenadas y aún más, si las llevan o no a cabo. Según lo señala la Vicaría de la Solidaridad, múltiples investigaciones ordenadas por los jueces se han visto interrumpidas u obturadas por la dilación o el incumplimiento de órdenes judiciales por parte de las autoridades militares (véase anexo XXIV en que se reproduce parte del anexo N° 2 de la presentación de la Vicaría de la Solidaridad ante la Corte Suprema de Justicia en marzo de 1978).

La tolerancia de los tribunales de justicia frente a negativas de los funcionarios de los organismos de seguridad a comparecer ante los jueces cuando se los cita, la negativa de los mismos

(73) Mensaje (Santiago de Chile), N° 270, julio de 1978.

(74) Véase en anexo XXII el texto del decreto ley 1.775 y en anexo XXIII, los artículos 6 y 158 del Código de Procedimiento Penal, que el decreto ley 1.775 modifica.

(75) Minuta N° 26, 24 de julio de 1978.

tribunales a constituirse en lugares de detención, los sobreseimientos en causas en que el delito aparece acreditado o donde hay diligencias pendientes (véase anexo XXIV), las restricciones impuestas por decretos leyes y las que se dispusieron mediante simples resoluciones ministeriales, son limitaciones cuyas consecuencias aparecen en el resultado de las investigaciones. Como ejemplo de cambios en el procedimiento por simple resolución administrativa, puede citarse el oficio N° 57 del Ministerio de Justicia, de fecha 14 de julio de 1976, que prohíbe oficiar directamente a la DINA. La Corte Suprema por resolución del 18 de junio de 1976 confirmó esa modificación, que se sigue aplicando respecto de la CNI. (76)

El resultado de esta situación es que hasta el momento en que la Vicaría ocurría ante la Corte Suprema, 500 presentaciones a los tribunales ordinarios del crimen "no hayan entregado averiguaciones que aclaren en forma fehaciente la suerte de alguna persona desaparecida y la eventual sanción de los responsables". (77)

Tampoco se ha identificado a los culpables, en circunstancias en que los organismos de seguridad han sido acusados de delitos tan graves como los que se cometieron en el caso del menor Carlos Veloso. (78) En este caso, el tribunal ordenó la libertad de las personas falsamente acusadas de secuestro (que también habían sido torturadas para que admitieran su culpabilidad en un hecho que no habían cometido), pe-

ro se cerró el proceso y se puso fin a la investigación dejando que sus autores sigan impunes, pese al cúmulo de elementos que permitirían continuar inquirendo. En casos de personas desaparecidas, largos y complicados procesos, con pruebas fehacientes de la detención por fuerzas de seguridad y sustentados con el solo impulso del recurrente, pues los tribunales no tomaron iniciativa alguna para la investigación, se extienden a través de años, sin que se logre averiguar la identidad de los responsables del secuestro y desaparición. Uno de los relatos que se puso en conocimiento del Grupo se refiere a ocho personas que fueron detenidas en Valparaíso y cuya suerte se desconoce, a partir de la detención, probada en el juicio. El relato se reproduce en el artículo IV, sección A, e ilustra acerca de las gestiones realizadas por familiares y abogados de personas desaparecidas ante la justicia. (79)

Los tribunales chilenos se han mostrado inclinados a cerrar las vías posibles para la investigación de hechos delictuosos de que son acusados los servicios de seguridad escudándose en la intrincada red de disposiciones dictadas por la Junta y sus ministros, esgrimiendo argucias procesales o simplemente dejando de lado normas y procedimientos jurídicos en vigor. En verdad, los tribunales deberían dirigir sus esfuerzos hacia la averiguación de la verdad. Sus decisiones tienden en cambio, en la gran mayoría de los casos, a declinar sus responsabilidades judiciales y acoger, en cambio, el principio de autoridad de que habló el Gobierno el 9 de marzo de 1977, con motivo de la presentación de los familiares de desa-

(76) La información fue proporcionada al Grupo por abogados entrevistados en Chile. En su presentación de marzo de 1978, la Vicaría de la Solidaridad informa acerca de la negativa de los tribunales a oficiar directamente a la CNI y otros organismos pertenecientes a las Fuerzas Armadas (véase anexo XXIV).

(77) Vicaría de la Solidaridad, presentación con motivo de la inauguración del Año Judicial, marzo de 1978.

(78) Véase A/32/227, párrafos 88 a 90, y E/CN.4/1266, párrafos 57 y 59.

(79) Véase asimismo en el anexo XXIV las dificultades con que se enfrentan las personas que recurren a los tribunales en demanda de investigaciones para establecer el paradero de personas desaparecidas o para identificar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

parecidos a la Corte Suprema el 8 de mayo de 1977. (80)

Recientemente, un juez se declaró incompetente para conocer en la querrela interpuesta por familiares de personas desaparecidas contra el General Manuel Contreras Sepúlveda y otros. (81) El proceso pasó al Juzgado Militar.

Los abogados querellantes recurrieron a la Corte de Apelaciones, a raíz de la negativa del juez a sustanciar las primeras diligencias ya que el artículo 6° del Código de Procedimiento Penal dice que "cualquiera que sea el tribunal llamado a conocer en un juicio criminal... están obligados a practicar las primeras diligencias de instrucción del sumario con respecto a delitos cometidos en el territorio de su jurisdicción..." (Véase texto íntegro del artículo 6° del Código de Procedimiento Penal en el anexo XXIII.)

Lo visto y lo oído por el Grupo durante su visita, así como los elementos de juicio que le fueron proporcionados por escrito por diversas personas respecto a las causas y procesos que les conciernen, lo llevan a formular las siguientes observaciones:

a) Si bien en la legislación chilena existen disposiciones establecidas para asegurar la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas, su aplicación está limitada por la legislación de la Junta

de Gobierno y las interpretaciones de los tribunales, a tal punto que no podría afirmarse que tales derechos gocen de la debida protección.

b) Existen, asimismo, las normas legales que permiten establecer las responsabilidades y penar los delitos cometidos en violación de los derechos humanos, pero la acción de la justicia frente a los organismos del Gobierno a los que se imputa la responsabilidad se ha visto cercenada por las disposiciones limitativas del poder militar, por su propia obediencia a las decisiones de ese poder, aún cuando las mismas contradigan principios legales vigentes y tal vez, también, por el peso de una estructura de gobierno que pone a los jueces, así como a los demás ciudadanos, a merced de las decisiones discrecionales de poderes que escapan a todo control jurisdiccional.

c) Si bien es cierto que el Presidente de la Corte Suprema y todos los magistrados con los que se entrevistó el Grupo insistieron en poner de relieve su independencia, no cabe duda de que esta independencia y esta función de la justicia son puramente teóricas. En efecto, ¿acaso no es cierto que la propia suerte de los jueces depende del poder discrecional de la Junta, que con arreglo a la legislación actual puede destituir a un juez, aunque sea miembro de la Corte Suprema, sin que éste disponga de ningún recurso contra dicha medida?

(80) Véase E/CN.4/1266, párrafo 66. El informe reproduce algunas de las expresiones de la declaración de prensa del Gobierno con motivo de la presentación de 2.542 chilenos que se dirigieron a la Corte Suprema pidiéndole que planteara al Ejecutivo la gravedad de la situación de los desaparecidos. En esa declaración el Gobierno dijo que no vacilaría en aplicar con la máxima energía y cuantas veces sea necesario el legítimo principio de autoridad para asegurar las condiciones de paz y orden.

(81) El Mercurio, 12 de agosto de 1978.

Esta publicación cuesta editarla,
envíe su aporte a la Vicaría de la Solidaridad